

LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

CUERPO DE TAQUÍGRAFOS

10ª REUNIÓN

9ª SESIÓN ORDINARIA

29 de marzo de 2017

VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

–En la ciudad de Córdoba, a 29 días del mes de marzo de 2017, siendo la hora 16 y 40:

-1-

IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente (Passerini).- Con la presencia de 50 señores legisladores, declaro abierta la 9ª sesión ordinaria del 139º período legislativo.

Invito al señor legislador Benigno Rins a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto.

-Puestos de pie los señores legisladores y público, el señor legislador Rins procede a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2-

VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la versión taquigráfica de la sesión ordinaria anterior.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.

-3-

ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente (Passerini).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados por contar cada legislador con un ejemplar de los mismos en sus bancas y en las netbooks. Asimismo, el legislador que así lo desee puede solicitar la inclusión de coautores o el giro a otras comisiones de los respectivos proyectos.

Tiene la palabra la legisladora Graciela Brarda.

Sra. Brarda.- Gracias, señor presidente.

Solicito se incorpore como coautores del proyecto 21452/L/17 a los legisladores Daniel Passerini y Dardo Iturria; y del proyecto 21454/L/17 a todo el bloque del Frente Cívico.

Sr. Presidente (Passerini).- Así se hará, legisladora.

Tiene la palabra la señora legisladora Ilda Bustos.

Sra. Bustos.- Señor presidente: solicito se incorpore como coautores del proyecto 21391/L/17 al bloque del Frente Cívico y a las legisladoras Mariana Caserio y Viviana Massare.

Sr. Presidente (Passerini).- Así se hará, legisladora.

Tiene la palabra el señor legislador Carlos Mercado.

Sr. Mercado.- Señor presidente: solicito se incorpore como coautor del proyecto 21442/L/17 a la legisladora Ana Papa.

Sr. Presidente (Passerini).- Así se hará, legislador.

Tiene la palabra el señor legislador Saillen.

Sr. Saillen.- Señor presidente: solicito se incorpore como coautores del proyecto 21411/L/17 a los legisladores Peressini y Salas.

Sr. Presidente (Passerini).- Así se hará, legislador.

Tiene la palabra el señor legislador Somoza.

Sr. Somoza.- Señor presidente: solicito se incorporen como coautor del proyecto 21409, 21413, 21414, 21415 y 21416/L/17 al interbloque Cambiemos.

Sr. Presidente (Passerini).- Así se hará, legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Massare.

Sra. Massare.- Señor presidente: solicito el giro del proyecto 21063/L/17 a la Comisión de Turismo y Relación con el Desarrollo Regional como comisión madre.

Sr. Presidente (Passerini).- Así se hará, legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Miguel Osvaldo Nicolás.

Sr. Nicolás.- Señor presidente: solicito se incorpore como coautor del proyecto 21406/L/17 a la totalidad del bloque de la Unión Cívica Radical.

Sr. Presidente (Passerini).- Así se hará, legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Adriana Oviedo.

Sra. Oviedo.- Gracias, señor presidente.
Solicito se incorpore como coautores del proyecto 21417/L/17 a los legisladores Gutiérrez, Miranda y Farina.

Sr. Presidente (Passerini).- Así se hará, legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Amalia Vagni.

Sra. Vagni.- Solicito se incorpore como coautor del proyecto 21350/L/17 al legislador Saieg.

Sr. Presidente (Passerini).- Así se hará, legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Carlos Gutiérrez.

Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito se incorpore como coautores del proyecto 21440/L/17 a los legisladores Marcos Farina, Franco Miranda y Adriana Oviedo.

Sr. Presidente (Passerini).- Así se hará, señor legislador.

-4-

Sr. Presidente (Passerini).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la palabra el legislador Gutiérrez.

Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 12, 20 y 23 del Orden del Día sean girados al archivo.

Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la moción de enviar a archivo los proyectos correspondientes a los puntos 12, 20 y 23 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.

-5-

Sr. Presidente (Passerini).- Continúa con el uso de la palabra el legislador Gutiérrez.

Sr. Gutiérrez.- Gracias, señor presidente.
Solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 34, 42, 48, 49, 55, 64, 66, 92, 96, 100, 107 al 136, 138, 141 y 142 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 10ª sesión ordinaria.

Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con preferencia para la 10° sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 34, 42, 48, 49, 55, 64, 66, 92, 96, 100, 107 al 136, 138, 141 y 142 del Orden del Día.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

—Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.

Se incorporan al Orden del Día de la 10° sesión ordinaria.

-6-

Sr. Presidente (Passerini).- Continúa con el uso de la palabra el legislador Gutiérrez.

Sr. Gutiérrez.- Gracias, señor presidente.

Solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 1 al 11, 13 al 19, 21, 22, 24 al 33, 35 al 41, 43 al 47, 50 al 54, 56 al 63, 65, 67, 69 al 83, 85 al 91, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 143 al 148 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 12° sesión ordinaria.

A la vez, solicito una alteración en el Orden del Día debido a la presencia de un nutrido grupo de geólogos -a quienes damos la bienvenida-, para que el proyecto de ley 19930/L/16 sea tratado en primer lugar.

Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con preferencia para la 12° sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 1 al 11, 13 al 19, 21, 22, 24 al 33, 35 al 41, 43 al 47, 50 al 54, 56 al 63, 65, 67, 69 al 83, 85 al 91, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 143 al 148 del Orden del Día.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

—Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.

Se incorporan al Orden del Día de la 12° sesión ordinaria.

-7-

Sr. Presidente (Passerini).- Tomando en consideración y aprobando la propuesta del legislador Gutiérrez, con la honorable presencia en este recinto de un nutrido grupo de profesionales geólogos de la Provincia de Córdoba, vamos a alterar el Orden del Día, tal cual lo habíamos propuesto originalmente en la Comisión de Labor Parlamentaria, para dar lugar al tratamiento del proyecto de ley 19930/L/16.

Se encuentra reservada en Secretaría una nota mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 19930/L/16, que cuenta con despacho de comisión.

A continuación, se leerá la nota respectiva.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

Córdoba, 29 de marzo de 2017.

Sr. Presidente de la Legislatura

de la Provincia de Córdoba

Dr. Martín Llaryora

S. / D.

De mi consideración:

Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el tratamiento sobre tablas del expediente 19930/L/16, proyecto de ley iniciado por los legisladores Manzanares y González, creando el Colegio Profesional de Geólogos de la Provincia de Córdoba, estableciendo el régimen legal aplicable a la actividad y derogando la Ley 5759.

Sin otro particular, saludo a Ud. muy atte.

Carlos Gutiérrez
Legislador provincial

Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas que acaba de ser leída.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

—Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.

Tiene la palabra la legisladora Manzanares.

Sra. Manzanares.- Señor presidente: hoy ponemos en consideración de este Cuerpo el despacho del proyecto 19930/L/16, emitido por las Comisiones de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Legislación General, que propicia la creación del Colegio Profesional de Geólogos de la Provincia de Córdoba, estableciendo el régimen legal aplicable a la actividad y derogando la Ley 5759, Consejo Profesional de Geología.

Debo destacar que hoy se encuentran presentes como invitados varios profesionales geólogos, entre los que puedo mencionar a Ricardo da Silva, Arturo Llupíá, Carlos Boggetti, Marcelo Chambard, Jorge Cornaglia, Alejandro Gamkosian, Argentino Recalde, David Rubin, Rosa Ayala, Facundo Aredes, Adriana Cerato e Isaac Pereyra, también los miembros actuales del Consejo de Geología, en representación de todos los geólogos de nuestra Provincia y, además, funcionarios de distintos estamentos universitarios relacionados con la geología, a quienes agradecemos su presencia y predisposición.

Quiero comenzar mi informe para referirme brevemente a los profesionales geólogos, licenciados en Geología o licenciados en Ciencias Geológicas, quienes tienen un campo de acción bastante amplio y, en algunos casos, hasta desconocidos por el conjunto de la sociedad. Su profesión los habilita para que evalúen y efectúen estudios destinados a determinar la estructura, composición y génesis de minerales, rocas y suelos. Poseen conocimientos científicos que permiten realizar estudios estratigráficos, geocronológicos, geotectónicos, sismológicos y volcanológicos, glaciológicos en ambientes continentales y marinos.

En base a su profesión pueden efectuar estudios para determinar áreas de riesgo geológico, elaborando, en consecuencia, propuestas de prevención; hacen estudios de suelos como así también pueden planificar, dirigir y efectuar prospección, exploración, evaluación y cuantificación de minerales, rocas y yacimientos sólidos, líquidos y gaseosos; poseen facultades para establecer categorías y cuantificar reservas de recursos geológicos renovables y no renovables; en base a su profesión pueden dirigir, supervisar y efectuar reconocimientos geológicos, ubicación, delimitación y representación gráfica de las concesiones mineras, perforaciones de exploración vinculadas a hidrocarburos; supervisar estudios de la evolución, degradación y erosión de suelos; investigar, desarrollar, participar y efectuar control de materiales geológicos aplicados a la industria, construcción, minería, agricultura, medio ambiente y servicios.

En síntesis, el geólogo está habilitado para distintas especialidades tales como minería, agua, suelos, petróleo, peligrosidad por fenómenos naturales y, dentro de estas disciplinas, los estudios de: petrología, fotogeología, aerofogrametría, prospección geoquímica, geofísica, entre otros.

La ley vigente que regula la actividad de los geólogos —Ley 5759, reguladora del Consejo de Geología— es limitada e impide el ejercicio de muchas de las acciones que el conjunto de los profesionales en la materia necesita actualmente para el desarrollo de la actividad con el resguardo legal de una entidad con mayores atribuciones que los agrupe.

Por esta razón es que impulsamos el presente proyecto, ya que se ha tornado imprescindible contar con un colegio profesional que tenga una estructura interna de decisión que permita la participación de los matriculados, tanto en la asamblea como en los demás organismos internos específicos como el Directorio, la Comisión Revisora de Cuentas y el Tribunal de Disciplina.

Pretendemos que con la creación del Colegio Profesional de Geólogos de la Provincia de Córdoba se haga real y efectivo el control de la actividad profesional, conforme el expreso reconocimiento del artículo 37 de la Constitución de la Provincia de Córdoba, que establece que la Provincia puede conferir el gobierno de las profesiones y el control de su ejercicio a las entidades que se organicen con el concurso de todos los profesionales de la actividad, en forma democrática y pluralista conforme a las bases y condiciones que establece la Legislatura.

Entendemos que en esta época los profesionales en geología necesitan contar con una institución que los represente, que los contenga y aglutine, y que ejerza el control de la matrícula profesional. Sin duda, este proyecto de ley otorga una herramienta que permitirá combatir el ejercicio ilegal de la profesión.

El proyecto en tratamiento contiene diversos aspectos, tales como: el régimen legal de la actividad profesional; el ejercicio profesional; su ámbito de actuación; la creación misma del colegio; sus funciones, atribuciones y deberes; las autoridades, sus funciones; competencias y deberes del Directorio; una Comisión Revisora de Cuentas; las facultades y competencias del Tribunal de Disciplina; el mecanismo de elección de las autoridades del colegio, su régimen electoral; la posibilidad de creación de delegaciones en el interior provincial; el patrimonio y sus recursos; el gobierno de la matrícula y sus requisitos; cuáles son las causales de inhabilidades; los supuestos de cancelación de la matrícula; las incompatibilidades; las obligaciones, derechos y prohibiciones; el sistema arancelario de los profesionales; las reglas de ética profesional y las faltas; las sanciones disciplinarias; el procedimiento de juzgamiento disciplinario; la organización del colegio profesional y, finalmente, la derogación de la Ley 5759, de creación del Consejo Profesional de Geología.

Sr. Presidente (Passerini).- Disculpe que la interrumpa, señora legisladora. Voy a solicitar a los señores legisladores y al público presente que guarden silencio para que se pueda escuchar lo que está planteando la legisladora, y por respeto a la gente que está aquí presente para el tratamiento de este tema.

Continúe con uso de la palabra, legisladora Manzanares.

Sra. Manzanares.- Este proyecto de ley tuvo un extenso tratamiento en la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, recibiendo a representantes del Consejo Profesional de Geología, quienes se explayaron en el contenido del proyecto, en sus necesidades como profesionales y en la realidad del Consejo, promoviendo y apoyando la iniciativa.

A su vez, en el seno de la comisión, y a través del debate serio y pragmático de los legisladores integrantes, se propusieron modificaciones al proyecto, las que luego de ser debatidas y analizadas han sido incorporadas al despacho que hoy está en tratamiento.

Es dable señalar que las modificaciones introducidas vienen a mejorar el proyecto presentado oportunamente a esta honorable Legislatura, entre las que podemos destacar: la adecuación de la terminología conforme al nuevo Código Civil y Comercial de la Nación; la elección de la Junta Electoral por medio de la Asamblea; que sea la Asamblea la que determine el porcentaje sobre los honorarios de los profesionales que será destinado a recursos para integrar el patrimonio del Colegio; la eliminación del requisito de ser argentino o naturalizado para matricularse; y la eliminación de una tasa de empadronamiento.

Habiendo sido suscripto por la mayoría de los bloques parlamentarios, el despacho final que hoy traemos a este recinto es una demostración de la necesidad de convertir en ley esta iniciativa y del trabajo conjunto que durante estos últimos meses hemos realizado, escuchando sobre todo las necesidades de los profesionales involucrados y comprometidos con la actividad.

En virtud de todo lo expuesto, adelanto el voto positivo del bloque de Unión por Córdoba, y solicito el acompañamiento de los demás bloques que así los consideren.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra la señora legisladora Elisa Caffaratti.

Sra. Caffaratti.- Señor presidente: a fin de no abundar en argumentos que han sido expuestos por la miembro informante, pongo de manifiesto el acompañamiento del interbloque al presente proyecto.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el legislador Saillen.

Sr. Saillen.- Señor presidente: en principio, quiero felicitar a los compañeros y amigos geólogos, y manifestar que, tal como se dijo en la comisión, esto era una necesidad.

También deseo agradecer al presidente de la comisión por darnos participación a los legisladores de los distintos bloques para argumentar lo que creíamos que correspondía a este proyecto de ley en beneficio del Colegio de Geólogos.

Quiero hacer extensivo el acompañamiento de todo el bloque Córdoba Podemos.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el legislador Eduardo Salas.

Sr. Salas.- Gracias, señor presidente.

Sumamos el voto positivo del bloque del Frente de Izquierda y de los Trabajadores al proyecto en tratamiento, sobre el cual hemos trabajado mucho en comisión. No sé si habrá salido exactamente como los geólogos querían, pero lo sacamos como entendíamos que respondía a los intereses generales.

Nada más.

Sr. Presidente (Passerini).- Muchas gracias, señor legislador.

Tiene la palabra el señor legislador Aurelio Francisco García Elorrio.

Sr. García Elorrio.- Señor presidente: adhiero a la creación del Colegio y le deseo la mejor de las suertes en el camino que van a emprender, ya no individualmente sino como colegio.

En segundo lugar, quiero recordarles la altísima responsabilidad que van a tener, como colegio, en el cuidado de la tierra, que es nuestra casa común. Que siempre sean una voz en defensa de la casa común.

Nada más.

Sr. Presidente (Passerini).- Muchas gracias, legislador.

Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, en consideración en general el proyecto 19930/L/16, tal como fuera despachado por las comisiones respectivas.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

– Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobado.

A los efectos de la votación en particular, si no hay objeciones, se hará por título.

- Se vota y aprueba el Título I, artículos 1º al 4º, inclusive.
- Se vota y aprueba el Título II, artículos 5º al 20, inclusive.
- Se vota y aprueba el Título III, artículos 21 al 31, inclusive.
- Se vota y aprueba el Título IV, artículos 32 al 34, inclusive.
- Se vota y aprueba el Título V, artículo 35.
- Se vota y aprueba el Título VI, artículos 36 y 37.
- Se vota y aprueba el Título VII, artículos 38 y 39.
- Se vota y aprueba el Título VIII, artículos 40 al 49, inclusive.
- Se vota y aprueba el Título IX, artículo 50.
- Se vota y aprueba el Título X, artículos 51 al 53, inclusive.
- Se vota y aprueba el Título XI, artículos 54 al 56, inclusive.

Sr. Presidente (Passerini).- Siendo el artículo 57 de forma, queda aprobado el proyecto en general y en particular.

Se comunicará al Poder Ejecutivo. (Aplausos).

Además de agradecer la presencia de los profesionales geólogos que nos acompañan en el tratamiento de este proyecto de ley, quiero destacar la presencia del doctor Alejandro Gamkosian, que es un joven geólogo de 95 años, para quien pido un fuerte aplauso. (Aplausos).

También quiero destacar la presencia, entre los profesionales geólogos, del legislador mandato cumplido Argentino Recalde. (Aplausos).

-8-

Sr. Presidente (Passerini).- Continuamos con la sesión.

Corresponde el tratamiento del punto 139 del Orden del Día, proyecto de ley 20934/E/17, que cuenta con despacho de comisión.

Tiene la palabra la señora legisladora Sandra Trigo.

Sra. Trigo.- Gracias, señor presidente.

Voy a fundamentar, como miembro informante, el proyecto de ley 20934/E/17, iniciado por el Poder Ejecutivo provincial, por el cual se propicia la modificación de la Ley 9235, de Seguridad Pública de la Provincia de Córdoba.

Para el tratamiento del presente proyecto, se hizo presente en esta honorable Legislatura, para presentarlo, el Ministro de Gobierno, Carlos Massei, acompañado de todo su equipo de trabajo. Ellos explicaron de manera exhaustiva el trabajo que hicieron, junto al cambio de paradigma que se propone en materia de seguridad a través del Plan Integral de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito.

Señor presidente: básicamente, se crea un Sistema Provincial de Seguridad Pública y Ciudadana. Esto significa que cuando hablamos de un sistema nos referimos a un conjunto de elementos o herramientas organizadas que se encuentran en interacción y que tienen como objetivo, o meta en común, combatir la inseguridad. Este Sistema de Seguridad Ciudadana se podría definir como una acción integral que desarrolla el Estado, con la estrecha colaboración de la ciudadanía y de todos los actores de la sociedad, destinada, fundamentalmente, a propiciar una convivencia pacífica, por un lado, mientras, por el otro, a la erradicación de la violencia...

Sr. Presidente (Passerini).- Perdón que la interrumpa, señora legisladora.

Pido nuevamente orden en la sala y silencio para que, de esa manera, podamos escuchar con atención y respeto.

Continúe, señora legisladora.

Sra. Trigo.- Gracias, señor presidente.

Sin duda que el tema de la seguridad ciudadana y de la política de seguridad urbana es un tema que nos compete a todos, y no sólo como legisladores desde nuestra función pública, sino también como ciudadanos. Y si todos estamos buscando una solución a esta problemática, realmente debemos concentrarnos en el tema, por lo que le agradezco muchísimo su recomendación.

Decía que se propicia una convivencia pacífica, por un lado, mientras, por el otro, la erradicación de la violencia y, en general, evitar la comisión de delitos y faltas contra las personas y sus bienes. Se busca que el ciudadano sea protagonista y que se logre socializar la discusión en materia de seguridad porque es un derecho ciudadano. Este es uno de los aspectos centrales del cambio de paradigma al que hice referencia, ya que ubica al ciudadano o vecino ya no sólo como un sujeto pasivo que vive, o sufre, o simplemente es parte de la población que resulta víctima, sino también como un actor central que propone cuáles son los aspectos más relevantes a través de los cuales el Estado en todos sus niveles –sea municipal, provincial y, por qué no, nacional- debe intervenir para promover todas las condiciones para evitar, justamente, la comisión de hechos de violencia social o en general.

En efecto, se procura integrar a la comunidad en un estado de gestión compartida, sin perder de vista que el Estado, señor presidente, es el principal responsable en materia de seguridad. Esto fue ampliamente discutido en las comisiones y planteado por cada uno de los señores legisladores, ya que no había claridad conceptual respecto al rol del ciudadano en la discusión de las políticas en materia de seguridad.

Por otro lado, junto con la seguridad ciudadana, es fundamental también el rol de la Policía. Por ello, como bien nos explicara el Ministro Massei en su visita, se está realizando una fuerte inversión para dotar a la Fuerza de todas las herramientas y equipamiento necesarios para combatir el delito, además de ejecutarse una profunda capacitación que sea capaz de otorgarle un mayor conocimiento sobre temas sensibles a la ciudadanía y, de esta manera, mejorar los estándares operativos de la Policía, como son, por ejemplo, el Código de Convivencia, temáticas como violencia de género, trata de personas, en fin, cuestiones inherentes a los derechos humanos en general.

Asimismo, se capacita a la Policía para dotarla de un perfil de proximidad; es decir, bajar ese perfil represivo y trocarlo en uno de reconocimiento ciudadano, con una mirada de prevención social basada, fundamentalmente, en la educación y la comunicación, procurando que el policía se anticipe y prevenga así problemas comunitarios, y que conozca el territorio; más específicamente, los cuadrantes que se crearon mediante el Plan Integral de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito, que están casualmente reflejados en el presente proyecto de ley.

El cuadrante es un espacio geográfico de una Unidad de Gestión Territorial que reemplazará lo que significa la Comisaría de Distrito, en los que ya está actuando la Policía Barrial en conjunto con la Policía común, como fue ampliamente explicado por el Ministro de Gobierno y sus funcionarios en su visita. Asimismo, fueron respondidas todas las preguntas que los distintos legisladores y asesores –por ausencia de algunos legisladores- pudieron efectuarles de manera directa.

Cuando entramos específicamente en el análisis del articulado que integra el proyecto en tratamiento, nos encontramos –como dije anteriormente- ante un cambio de paradigma.

El mundo ha avanzado a través de las dificultades inherentes a la seguridad, ha construido un concepto de seguridad ciudadana y avanzó un poco más todavía en las problemáticas y demandas al hablar de seguridad humana que es, digamos, una mirada integral que propende al desarrollo humano, donde fundamentalmente se le permite a cada uno de los ciudadanos ejercer libremente y en plenitud cada uno de los derechos, para que esto no quede solamente en la letra de alguna constitución o tratado internacional, sino que realmente podamos hablar no solamente de habitantes o vecinos sino de ciudadanos en forma integral, con todos los derechos y obligaciones que eso significa.

Esta nueva concepción ha quedado plasmada en el articulado del proyecto donde se determinan los conceptos de seguridad pública y seguridad ciudadana, sus finalidades y los objetivos del nuevo sistema.

Con relación al artículo 4º de la Ley 9235, señor presidente, quiero destacar que del fruto del trabajo en comisión y de las propuestas efectuadas por los señores legisladores, se propuso modificar la redacción original del proyecto. Con tal modificación quedó establecido que el sistema de seguridad debía estar conformado por dos ramas perfectamente diferenciadas. Por un lado, quienes son los responsables de la planificación y la organización de las políticas de seguridad, quienes llevan a cabo la logística en la materia, que serían el Ministerio de Gobierno, la Comisión Interministerial de Seguridad Ciudadana, el Observatorio de Estudios sobre Convivencia y Seguridad Ciudadana y los Consejos departamentales, municipales y barriales de Prevención y Convivencia.

Con esto, señor presidente, estamos hablando de importantes avances en relación a esta problemática. Uno de ellos –simplemente para mencionar y no detenerme tanto en este tema- es la creación del Observatorio de Estudios sobre Convivencia y Seguridad Ciudadana, que es un organismo que, casualmente, evalúa con toda la información que corresponde lo inherente a la situación no solamente de la comisión de delitos, porque eso sería una mirada muy parcial de la problemática, esa sería la mirada de los efectos, sino, fundamentalmente, todo lo que hace al esquema de las causas focalizadas en cada uno de estos cuadrantes y de los sectores que contribuyen para que la comisión de los delitos siga, lamentablemente, en crecimiento. Por otro lado, las fuerzas de seguridad, quienes son el brazo armado y las ejecutoras directas de las políticas de seguridad, es decir, la Policía, la Fuerza Policial Antinarcotráfico y el Servicio Penitenciario, quedan perfectamente diferenciadas.

Con respecto al artículo 5º, se derogaba, pero entendimos -y esa fue una de las modificaciones propuestas y que ambos presidentes de las comisiones, el doctor Farina y el doctor López, la tomaron en cuenta y fue incorporada- que eso no era correcto y que debía estar expresamente enunciado en la letra –voy a leerlo específicamente- quiénes son los auxiliares del sistema, ya que son las herramientas que complementan a las fuerzas de seguridad, no sólo porque tienen una competencia o especialidad que les es propia, sino también por el conocimiento específico del territorio donde cumplen sus funciones, como es el caso de Defensa Civil, Bomberos, Dirección de Prevención de Accidentes de Tránsito, Seguridad Náutica y Dirección de Control de Prestadores Privados de Seguridad, siendo este último punto muy importante porque todos sabemos que otro de los efectos que produce ese fenómeno es, casualmente, la creación y constitución de numerosas empresas privadas que prestan un servicio de seguridad.

En el segundo punto se suprime a los auxiliares de las Juntas de Participación Ciudadana –que actualmente están en la Ley 9235–, siendo reemplazados –este es otro de los aspectos centrales del plan de seguridad que está reflejado en este proyecto– por los Consejos Barriales. Es decir, las Juntas de Participación Ciudadana han sido reemplazadas por los Consejos Barriales. Esto produjo ciertos interrogantes por parte de algunos legisladores que planteaban algunas dudas respecto al tema de la conformación de los Consejos Barriales. Así fue que entendimos -como efectivamente se plasmó- que debían estar dentro de aquellos espacios de planificación de las políticas de seguridad.

Asimismo, se modifica el artículo 2º de la Ley 9235, que pasa a llamarse Plan Integral de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito, y en los artículos subsiguientes del proyecto vamos a determinar la finalidad y los objetivos, entre los que se destacan: fomentar la cultura de la prevención; promover la participación comunitaria mediante la conformación de los Consejos Barriales; desarrollar estrategias y programas sociales, educativos, culturales, de salud y de infraestructura urbana; la determinación de la gestión territorial por cuadrantes; la implementación de la Policía de proximidad; la promoción y capacitación de los agentes que van a integrar las fuerzas de seguridad.

Señor presidente, señores legisladores: estamos frente a un plan integral y de características sociales donde se busca la prevención del delito articulando este plan con un conjunto de políticas que trabajan en el abordaje de las causales del delito.

–Murmullos en el recinto.

Sr. Presidente (Passerini).– Señora legisladora Trigo, la interrumpo nuevamente para volver a pedir a los señores legisladores y público presente que escuchemos en silencio las fundamentaciones del proyecto.

Continúa en el uso de la palabra la legisladora Trigo.

Sra. Trigo.– Muy amable, señor presidente, usted siempre es un caballero.

Como estaba expresando, el señor Gobernador hace mención específicamente, como autor y promotor, casualmente, de esta innovación que tiene que ver con las políticas de seguridad –así como los ministros, los funcionarios y quienes compartimos este proyecto de Gobierno y concepción del Estado– que la seguridad es hija de la inclusión social. Entonces, no podemos medir solamente un proyecto que modifica específicamente todo lo que es el tema de seguridad pública y ciudadana; no podemos soslayar que esto depende de la mirada y la óptica –una mirada ideológica, política y también diría filosófica– respecto de cuáles son las verdaderas causales de la seguridad o de la inseguridad, depende de cómo se lo vea. Nosotros, los peronistas, vemos este problema como el fracaso de las políticas públicas. Porque si hoy estamos hablando de que tenemos el 40 por ciento de la población que está bajo el índice de pobreza y un 10 por ciento bajo la línea de indigencia, es realmente el fracaso de las políticas nacionales que impiden que haya puestos de trabajo, que se estén cerrando permanentemente, que estemos hablando de inflación, de recesión y de una cantidad de argentinos están cayendo en la más profunda de las crisis y, como Estado, no podemos estar ausentes...

Sr. Presidente (Passerini).– Perdón que la interrumpa, señora legisladora Trigo. La legisladora El Sukaria le solicita una interrupción, ¿se la concede?

Sra. Trigo.– Sí, señor presidente.

Sr. Presidente (Passerini).– Tiene la palabra la señora legisladora El Sukaria.

Sra. El Sukaria.– Señor presidente: simplemente, quiero decir que para evaluar las políticas nacionales –que llevan quince meses– primero tendríamos que evaluar en Córdoba las políticas provinciales, que llevan ya dieciséis años.

Asimismo, le pido que, cuando la legisladora Trigo finalice su exposición, me conceda el uso de la palabra.

Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. Presidente (Passerini).– Continúe con el uso de la palabra, legisladora Trigo.

Sra. Trigo.– Señor presidente: con todo el respeto que me merece la legisladora Soher El Sukaria, debo recordarle que ambas –ella también es abogada– tenemos claridad respecto de las competencias –lo establece nuestro ordenamiento político y jurídico– y sabemos que es el Estado nacional el que fija las políticas de empleo, en las que finamente nos vamos a ver subsumidos todos los argentinos.

Lo que estoy diciendo –sin establecer criterios acusatorios ni nada que se le parezca, ya que creo que estas temáticas nos incumben a cada uno de nosotros– es que el Gobernador de la Provincia, en ejercicio de sus plenas competencias, tiene herramientas para mitigar algunos aspectos que hacen a la generación de empleo; no obstante, son las políticas nacionales las que establecen las líneas de inclusión o exclusión social. Entonces, mientras más empleo se pierdan, más fábricas cierran sus puertas y dejen trabajadores desocupados y más argentinos estén fuera del sistema de inclusión, lamentablemente, tendremos que seguir trabajando, cada vez más, sobre este tipo de ordenamiento.

Como peronistas que somos, desde ningún punto de vista estamos abordando este problema –no lo hace el Gobernador, como ninguno de los legisladores de Unión por Córdoba– como una cuestión de precaución para cuidar a nuestras personas y nuestros bienes. Estamos alarmados y preocupados, no queremos decir que tenemos que dotar de más presupuesto a las fuerzas de seguridad para que la Policía reprima, sino que queremos trabajar para que la promoción social sea un hecho y para que cada vez más cordobeses, más argentinos tengan trabajo y los padres puedan garantizarles a sus hijos, como corresponde, todos sus derechos.

Continuando con la fundamentación del despacho, quiero expresar que se modifican los artículos 12, 13 y 14 de la Ley 9235, creando los Consejos Barriales, estableciendo sus

finalidades y objetivos y articulando la educación, la capacitación laboral y el deporte como formas de contención social.

Quiero destacar –por su intermedio, señor presidente, pido disculpas a los señores legisladores por no haberlo hecho al principio de mi exposición– que se encuentra presente en este recinto el Secretario de Promoción Comunitaria, señor Oscar Arias, que ha venido a escuchar este debate en representación del Ministro Massei. Por medio de una resolución del Gobernador, de febrero de este año, se creó esta Secretaría, que tiene la finalidad esencial de coordinar los Consejos Barriales.

Menciono esto porque algunos legisladores plantearon este tema en distintas reuniones de comisión, ya que existían algunas dudas sobre quién sería ese “coordinador barrial” –para llamarlo de alguna manera–, que es el funcionario responsable que oficiará de nexo entre la Secretaría y el Ministerio de Gobierno, y se decía que podría llegar a ser el propio comisario. De ninguna manera esto puede ser posible porque estamos hablando, precisamente, de la participación ciudadana.

Por eso, quiero resaltar que el señor Oscar Arias es el responsable de la coordinación con cada uno de los referentes barriales, que son elegidos por las propias organizaciones. En el marco de la conformación de los Consejos Barriales participan los líderes sociales naturales de cada barrio o del cuadrante en cuestión, así como representantes de los centros vecinales y de las iglesias –en sus diferentes credos–, de las cooperativas, asociaciones y comedores que trabajan articuladamente con cada una de las áreas de Gobierno, es decir, con los Ministerios de Salud, de Educación, de Desarrollo Social y con las Agencias Córdoba Deportes, Córdoba Joven y Córdoba Turismo.

Entonces, se trata de un organismo interministerial que, tomando las propuestas de los vecinos, realiza recomendaciones no sobre las políticas de prevención policial sino, centralmente, acerca de cuáles son aquellas intervenciones que debe realizar, en este caso el Gobierno de la Provincia en cada una de sus áreas, para mitigar los efectos de la exclusión. No puedo dejar de mencionar los aspectos que hacen a la infraestructura municipal, tales como la falta de alumbrado o zonas con yuyos muy altos que impiden una buena visualización del lugar por dónde uno transita, lo que promueve la comisión de delitos.

Señor presidente: a raíz de preguntas planteadas por algunos señores legisladores en la reunión de la comisión, el Secretario Arias acercó la información pertinente, que solicito en este momento sea incorporada al Diario de Sesiones a fin de que todos tengan acceso a ella. Entre otras cosas, se preguntó cuáles eran los resultados de los Consejos Barriales ya constituidos. Brevemente –porque será incluido en la versión taquigráfica–, quiero mencionar lo siguiente: programas de prevención de adicciones; en todos los cuadrantes se brindan talleres de prevención de adicciones para jóvenes; charlas informativas para padres; actúan equipos de primer contacto que toman las demandas puntuales; derivan a los centros asistenciales de Córdoba, dependientes de la Secretaría de Prevención y Asistencia de las Adicciones. Además, se realizan capacitaciones laborales y programas de empleo.

Quiero agregar una buena información para algunos legisladores que de manera permanente -aunque no lo cuestiono- solicitan informes sobre las acciones que particularmente está realizando la señora Alejandra Vigo en la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo y voy a hacer una pequeña reseña al respecto. En el transcurso de 2016 se realizaron algunas de esas acciones: capacitación laboral y programas de empleo, habiéndose implementado 400 cursos de capacitación y oficios para 10 mil jóvenes; este número es muy importante porque estamos hablando de 10 mil jóvenes. Muchas veces esos números no están siendo bien manejados, pero estamos hablando de personas, de jóvenes que se encuentran en una situación de alta vulnerabilidad y de riesgo social, por lo que no es un número menor. Muchas veces no se da la suficiente difusión y se cuestionan los dineros que se utilizan para publicitar los actos de Gobierno, y una forma de poder explicar en qué se gastan los dineros de los cordobeses es esta. Por lo tanto, es una información importante.

Como les decía, son más de 10 mil jóvenes vulnerables que quedaron fuera del sistema de educación formal y se utilizan como sede de estos talleres a las escuelas del sector y, muy especialmente, a la red de organizaciones sociales existentes a los fines de capitalizar su cercanía y credibilidad. Como decía anteriormente, participa activamente el Ministerio de Educación, tratando que aquellos jóvenes que están fuera del sistema formal retornen al mismo, en cualquiera de las modalidades que hoy ofrece el Ministerio de Educación, o bien a través de estos talleres de oficios de los que salen debidamente certificados.

Dos mil jóvenes resultaron beneficiarios del Programa Primer Paso y del Primer Paso Aprendiz, fundamentalmente, fueron de estos sectores de alta vulnerabilidad, por eso hago tanto hincapié en esta información.

También se hicieron mejoras en obras de infraestructura, pavimentación y luminarias LED, entubamiento de desagües y funcionamiento de plantas cloacales, y en esto tienen

intervención directa –en la sugerencia de dónde y cómo se hace- los propios ciudadanos que están en los Consejos Barriales.

A modo de ejemplo, podemos citar el Programa Rutas Seguras, a través del cual la Secretaría de Políticas Comunitarias establece itinerarios que la comunidad le plantea que más necesitan tener iluminación, teniendo en cuenta que es una ciudad bastante oscura; al día de la fecha se inauguró dicho programa en los cuadrantes de barrios Renacimiento, Maldonado, Marqués Anexo, Villa Urquiza, Cabildo y Congreso.

Actualmente, el Gobierno provincial está en proceso de licitación de las primeras quinientas cuadras de cordón cuneta y ripiado.

Debo mencionar que las autoridades municipales, en el caso de la ciudad de Córdoba, participan de estos Consejos, o sea, la Provincia no le está echando nada en cara al municipio porque, sinceramente, no es la idea ni el espíritu del plan.

Por último, en el marco de la reforma de la Ley de Seguridad se crea la Dirección General de Control de Conducta Policial, bajo la dependencia directa del Jefe de Policía que controlará absolutamente a toda la Policía, incluyendo al Estado Mayor. Esto de ninguna manera implica reemplazar ni interrumpir el trabajo del Tribunal de Conducta Policial; todas las policías del mundo tienen su propia división de Asuntos Internos que es lo que el propio Cuerpo utiliza para el control no solamente de aquellos policías –y lo voy a decir de manera directa- que cometen o han cometido delitos, sino como medida preventiva para que no los cometan, porque hace al control de inteligencia en la fuerza, incluyendo al Estado Mayor. Reitero, es una forma efectiva que se utiliza en todas las policías, no solamente en las de nuestra República sino del mundo, de manera preventiva, de control y para auditarse.

De ninguna manera esto significa que los policías se van a autoevaluar; simplemente, es un espacio más de control y de auditoría que tiene toda la Policía, desde el jefe hasta el último agente, para no cometer delitos, y el que ya los cometió irá a la Justicia como corresponde y recibirá el castigo y las sanciones penales, y si estuviesen pensando en cometerlos, deberán tener mayor cuidado porque, a partir de la creación de esta Dirección, van a tener un nuevo control, porque es un órgano con plena autonomía técnica de gestión en materia de prevención e investigación en el ámbito de su competencia y, a su vez, es complementario del Tribunal de Conducta Policial, ya que si de la investigación que se realice surge que hay conductas antiéticas o delictivas, coordinarán sus actuaciones, siendo dicho Tribunal quien hará lo conducente en cuestión de sanción a todos aquellos que violenten las normas y desacrediten a la fuerza policial. Sabemos que la inmensa mayoría de nuestros policías son honestos y comprometidos con su trabajo, pero quienes no lo son van a quedar afuera y van a pasar a engrosar la población carcelaria.

En definitiva, y como bien lo dijo el Ministro Massei en su exposición al presentar el presente proyecto, se sabe que la inseguridad es hija de la droga y la exclusión social; donde haya desigualdad y exclusión vamos a tener inseguridad, porque hay ciudadanos vulnerables que se encuentran absolutamente indefensos y que no tienen las herramientas económicas ni particulares para poder defenderse de manera individual ante este flagelo, que golpea a todos los cordobeses por igual.

Por tal motivo, si bien sabemos que esta reforma de la Ley de Seguridad no va a ser una solución mágica ni definitiva a este problema que es tan complejo, se aplicará en conjunto con las políticas públicas de inclusión social, que ya se vienen aplicando, como lo mencioné anteriormente. Nuestro Gobierno pretende, de alguna manera, paliar esta enorme crisis económica y de desempleo con políticas de inclusión, porque es la manera más efectiva que tenemos los peronistas de bajar el índice delictual, que es un problema no solamente de Córdoba sino de todo el país.

Por todo lo expuesto, y creyendo necesario replantear las políticas en materia de seguridad efectuando todas adecuaciones para lograr una mayor eficacia en la lucha contra el delito, y generando el compromiso y participación de toda la ciudadanía, como se propone el proyecto en tratamiento, adelantamos el voto afirmativo de la bancada de Unión por Córdoba, al mismo tiempo que solicitamos su acompañamiento por parte de los restantes bloques.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra la legisladora Elisa Caffaratti.

Sra. Caffaratti.- Señor presidente: nadie aquí puede obviar que estamos desde hace tiempo inmersos en una situación muy delicada en materia de seguridad. La Provincia se encuentra sumida en un círculo de violencia y crecimiento de las tasas del delito. Tampoco puede nadie desconocer que la inseguridad es hoy una de las principales preocupaciones de los cordobeses.

En igual sentido, tampoco podría alguien pasar por alto que desde hace 17 años gobierna en Córdoba un mismo color político, y que las sucesivas medidas paliativas y marketineras adoptadas en materia de seguridad han ido de fracaso en fracaso. Menos podría pensar alguien que con este proyecto en tratamiento vamos a solucionar el problema de la inseguridad en Córdoba.

Debemos ser claros: Unión por Córdoba gobierna nuestra Provincia desde 1999, y nadie puede negar que la situación actual es producto de sus políticas erróneas o, más bien, por la falta de ellas en materia de seguridad.

Luego de 17 años, es evidente que no hay capacidad, creatividad ni voluntad, ya sea por acción u omisión, de solucionar o reducir el delito y la violencia que nos azota.

Hace 17 años que se ensayan una y otra vez planes o programas a los que se les cambia el nombre, que no sólo no han detenido el incremento de los índices del delito y la violencia, sino todo lo contrario. La ineficiencia e incapacidad son absolutamente manifiestas en cada rincón de la Provincia.

Exacto diagnóstico les cabe a las políticas de inserción social de las que tanto se habla. Tristemente tenemos que decir que Córdoba, después de 17 años de peronismo, muchos de ellos de bonanza económica, se ubica en esta materia a la par de provincias como Santiago del Estero, con índices de pobreza del 40 por ciento y de indigencia del 10,8 por ciento.

A través suyo, señor presidente, le digo a la miembro informante: "háganse cargo", como dijo en esta Legislatura el ex legislador De Loredó. Al peronismo en sus distintas versiones: "háganse cargo".

Varios son los puntos que vamos a analizar y que nos llevan a adelantar el rechazo a este proyecto de ley.

Primero, el diagnóstico y la falta de datos. Lo primero que debemos decir es que difícilmente se puede prevenir o actuar sobre algo desconocido, sobre una realidad de la que no existe un diagnóstico pormenorizado, una evaluación que se haya realizado hasta el momento, datos o estadísticas georeferenciadas.

Paradójicamente, en la presentación del proyecto en tratamiento, no hemos escuchado por parte de ningún actor del oficialismo trazar un diagnóstico sobre la actual situación de la inseguridad que identifique las características, causas, los principales problemas y los factores de riesgo locales.

Si hay algo seguro, señor presidente, es que, en algo tan delicado, tan complejo, tan policausal como es la inseguridad, no podemos utilizar a los ciudadanos como conejitos de India e ir aplicando teorías e ideas por obra de la inspiración, sin que estén debidamente basadas en un análisis sistemático de datos, de los cuales surjan los objetivos y los procedimientos adecuados para lograr esos objetivos.

Acá, como en tantas otras áreas de Gobierno, se empieza al revés: primero, antes que nada, la publicidad, mucha publicidad, toda la necesaria para que la mayor cantidad de gente piense que tal o cual cosa ya se ha construido, inclusive toda la necesaria para que se crea que ya ha dado excelentes resultados.

Desde hace décadas esta Provincia no tiene datos certeros, objetivos y transparentes sobre el delito; no tenemos una herramienta tan fundamental como es el mapa del delito, por ejemplo, para saber que en Córdoba se registraron el año pasado 131 homicidios -lo que indica que hablamos de un homicidio cada poco más de 48 horas en nuestra Provincia- debemos acudir a relevamientos periodísticos. O bien, para saber que, en Córdoba, entre los años 2008 y 2015 los robos crecieron un 27 por ciento, mientras que a nivel país la media fue del 19 por ciento, debemos bucear en algún informe de estadística nacional.

Otro punto para el análisis es lo que llamamos "maquillaje humo". Como vemos, señor presidente, ya partimos de una situación complicada: no hay diagnóstico sobre el cual se asiente este proyecto en tratamiento.

Ahora bien, se ha planteado este proyecto como un nuevo paradigma, una nueva visión de la seguridad que, entre comillas, ustedes lo llaman "ciudadana". Así lo contó el Ministro cuando hizo su presentación en esta Casa. Sin embargo, técnicamente no se reforma ni se convierte verdaderamente a lo que en el mundo se denomina "seguridad ciudadana".

Por lo tanto, podrán cambiar la nomenclatura de la ley y renombrar los programas, pero sólo se trata de un decálogo de buenas intenciones y un poco más de maquillaje.

La creación de la Policía Barrial, de la cual ahora se habla como innovadora, encuentra, en realidad, muchos antecedentes que ya fueron anunciados con anterioridad. Hemos tenido, en estos 17 años, muchas nuevas policías o fuerzas, por supuesto siempre anunciadas con la dosis suficiente de marketing y propaganda.

Se recuerda, por ejemplo, el Comando de Persecución Inmediata, la Turpol, los DOT -Departamento de Ocupación Territorial-; la CAP, la FPA -Fuerza Policial Antinarco tráfico-, las

policías de proximidad o de pacificación, sólo por mencionar algunas de las tantas creaciones de las que fuimos testigos.

También mucho se dijo acerca de la participación de la ciudadanía a través de los Consejos de Seguridad Barrial, pero -no me estoy adelantando a los hechos porque es algo que ya está sucediendo, y lo digo con argumentos fundados- todo indica que son el mascarón de proa para iniciativas de despliegue territorial y construcción de referentes comunitarios -para llamarlos de alguna manera- en un distrito que históricamente ha sido hostil electoralmente.

La corta experiencia hasta aquí nos muestra que no hay verdadera participación ni construcción de ciudadanía, los vecinos no forman parte de la toma de decisiones ni participan en el diseño de las políticas que repercuten en su vida.

Tampoco quedó claro, señor presidente, cuál será el esquema de actuación que esta Policía y estos Consejos tendrán en los barrios que están tomados, literalmente, por el narcotráfico, las llamadas zonas rojas -a las que hacía mención el legislador García Elorrio en la comisión-, ya sea porque ni la Policía puede entrar o bien porque ésta actúa en connivencia con el delito. Ellas son, justamente, las zonas donde debería actuar el Estado con mayor prioridad.

En tercer lugar, me voy a referir a la Fuerza policial, a la situación ya descrita que da cuenta de la complejidad y la preocupante situación que vive cada día nuestra Córdoba, ya que también debemos incorporar el análisis de la crisis institucional que atraviesa la Policía de Córdoba, actor central en la materia bajo análisis. En los últimos meses, tomaron estado público una gran cantidad de hechos que dan cuenta de la participación de efectivos de la Fuerza policial en hechos delictivos, que ni siquiera vale la pena detenernos a mencionar de manera pormenorizada porque todos los conocemos.

La institución policial se ha visto opacada en los últimos años por estos episodios, que no son aislados y ensucian injustamente la labor de la gran mayoría de policías que, con honradez y valentía, desempeñan sus funciones y ponen en riesgo sus vidas cotidianamente prestando un servicio esencial para toda la ciudadanía.

Resulta poco creíble y poco serio que, ante la gravedad de los hechos, la respuesta del Gobierno sea la modificación de un artículo que plantea la creación de una nueva Dirección General de Conducta Policial, que de hecho estará presidida por un policía de la Fuerza nombrado por el Poder Ejecutivo. Realmente, de esta manera, ¿quién puede creer que se va a combatir la corrupción policial?

Por último, señor presidente, en cuarto lugar, a lo largo de estos diecisiete años la política de seguridad en Córdoba ha funcionado más bien con paliativos y anuncios reiterados de planes e inversiones, pero con poca permanencia en el tiempo y sin un enfoque integral de la cuestión.

Los vaivenes pueden apreciarse en distintos ámbitos, pero, a nivel de lo que hoy analizamos, se plasmó en la discontinuidad orgánica que los gobiernos de Unión por Córdoba han mostrado en materia de seguridad.

El Ministerio de Seguridad fue creado durante el segundo mandato de De la Sota, luego integrado al Ministerio de Gobierno entre 2007 y 2011, vuelto a separar desde 2011 hasta 2013, cuando se vuelve a integrar con el Ministerio de Gobierno hasta la actualidad. Esta discontinuidad contrasta, sin embargo, con la permanente centralidad y hegemonía de la agencia policial y los agentes policiales en marcar el eje de las políticas de seguridad.

En estos diecisiete años, las administraciones de Unión por Córdoba se han inclinado por llevar adelante políticas principalmente represivas del delito, con la Policía como actor hegemónico, sin haber diseñado ni implementado políticas integrales de prevención que busquen actuar sobre las causales estructurales.

La improvisación, la falta de planificación y de una visión estratégica a largo plazo queda reflejada cuando vemos que, en Córdoba, como lo ha dado a conocer hoy nuestro Tribunal de Cuentas, se compra por más de 300 millones de pesos de equipamiento para la Policía mediante contrataciones directas, obviando los procedimientos legales ordinarios que brindan garantías de transparencia e igualdad de oferentes para adquirir los mismos a un precio más conveniente para el Estado. Este gravísimo hecho, totalmente irregular, ha sido motivo hoy de un pedido de interpelación al ministro y ahora lo estamos presentando.

En definitiva, por todo lo expuesto, podemos decir que el proyecto en tratamiento no está a la altura de la situación acuciante que vivimos en Córdoba; puede resultar muy lindo para la tribuna, sin embargo, en ningún artículo se plantea qué vamos a lograr con la aplicación de este Programa de Seguridad Ciudadana, que no da respuestas a muchas preguntas que cualquier discusión sincera de política pública de seguridad debe incluir: ¿qué estudios se realizan sobre las causas que generan la delincuencia?, ¿cuáles son los instrumentos que permiten medir el impacto de las políticas públicas de seguridad implementadas en los últimos diecisiete años?, ¿por qué se viene privatizando el servicio de

seguridad en Córdoba?, ¿qué hacemos con ello?, ¿cómo atendemos a las víctimas del delito?, ¿cómo reinsertamos socialmente a quienes cometen delitos, para evitar que vuelvan a cometerlos?, ¿cómo formamos y seleccionamos a nuestros policías?, ¿cómo trabajamos en los barrios cooptados por el narcotráfico?

Cada vez tenemos más burocracia, menos capacitación, menos equipamiento, más robos, más violencia, y los vecinos siguen siendo rehenes de los delincuentes por causa de la improvisación de quienes deben delinear las políticas públicas para cuidarnos.

La gente en sus casas, cuando escuche hoy que esta Legislatura sancionó una nueva Ley de Seguridad, se preguntará cuándo podremos salir tranquilos a la calle, cuántos arrebatos menos sufriremos, cuándo ocurrirá que no necesitemos cerrar nuestros comercios para evitar robos. Y debemos ser claros y decirles que ninguno de esos interrogantes encuentra respuesta en la ley que hoy estamos tratando.

Muchas gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (Passerini).- Antes de continuar, vamos a saludar la presencia en el recinto – ha sido mencionado por la legisladora Trigo- del señor Secretario de Políticas Comunitarias del Ministerio de Gobierno y Seguridad, Oscar Arias.

Tiene la palabra la legisladora Chiappello.

Sra. Chiappello.- Señor presidente: en verdad, con mucho dolor haré mi discurso en esta Legislatura, porque creo que se ha perdido la oportunidad de elaborar una Ley de Seguridad entre todos, porque creo que todos podemos aportar y, además, Unión por Córdoba lleva diecisiete años en el gobierno y no lo ha podido solucionar.

Por lo tanto, en esta ley hubiese sido bueno que hubiera una mayor participación -más allá de que sé que van a contestar que hubo posibilidades de hacer propuestas-, pero la decisión que hoy tenían era de aprobar la ley tal como estaba.

Y la diferencia que tenemos –y que vamos a tener como legisladores, seguramente- es en cuanto a qué entendemos por el concepto de seguridad. Se trata de un concepto que ha ido mutando sustancialmente en las últimas décadas, tanto en su utilización en documentos formales, nacionales e internacionales, llámense leyes, declaraciones, tratados, etcétera, hasta el uso común que hace nuestra comunidad.

Desde el punto de vista formal, técnica y académicamente hablando, ha cambiado el paradigma. Hasta no hace muchas décadas apuntaba a preservar el orden social a través de la Policía, ejercida por el Estado por medio de la fuerza. Y eso es lo que no ha podido cambiar Unión por Córdoba. Hoy el concepto ha sido modificado, los Estados democráticos promueven modelos que defiendan la protección de los derechos humanos de todos sus habitantes, en un marco de respeto a las instituciones, leyes y derechos fundamentales.

En otras palabras, el concepto de seguridad ya no se limita a la lucha contra la delincuencia. Hoy estamos hablando de cómo crear un ambiente propicio y adecuado para la convivencia pacífica de las personas, para lo cual el Estado debe poner mayor énfasis en el desarrollo de las labores de prevención y control de los factores que generan violencia e inseguridad que en tareas meramente represivas o reactivas ante hechos consumados.

La Provincia de Córdoba no ha logrado consolidar este paradigma, más allá de algunas buenas intenciones manifiestas en el discurso de algunos gobernantes.

También es cierto que, en algunas de las normas establecidas en los últimos años, algunas de ellas derogadas –o a punto de ser derogadas por esta ley-, se promovió la participación de la sociedad civil, sobre todo cuando se debía discutir la relación entre seguridad y democracia.

Pero los Consejos de Participación Ciudadana –órganos supuestamente diseñados para controlar y decidir sobre las políticas de seguridad adoptadas por el Ministerio de Seguridad, en su época, luego reemplazados por las Juntas de Participación Ciudadana para la Prevención por la Paz y la Convivencia Social- terminaron, en la práctica, funcionando como espacios de legitimación de la actividad policial. Prueba de ello fue que nadie pareció advertir ni siquiera la posibilidad del levantamiento de 2013, que derivó en olas de saqueos, enfrentamientos, muertos y heridos. La Policía mostró su peor cara: la de generar una demanda extorsiva y obtener una concesión rápida por parte del Estado, al tiempo que agitaba el fantasma del caos. Aquellas protestas y sus consecuencias inmediatas abrieron la necesidad de las reformas y la discusión sobre el rol de la Policía y su vínculo con el poder político.

Finalmente, a más de tres años de aquellos hechos, el Poder Ejecutivo nos propone la modificación de la Ley 9235, que fue creada en el 2005 y que fue la que creó las Juntas de Participación Ciudadana.

Por eso, cuando algunos legisladores acá hablan de la nueva participación ciudadana, demostrado quedó en estas Juntas que nunca funcionaron para implementar lo que se

denomina el Plan Integral de Seguridad Ciudadana y de Prevención del Delito y para crear el Consejo Social de Seguridad Ciudadana, el Observatorio de Estudios para la Convivencia y Seguridad Ciudadana, los Consejos Barriales de Prevención y Convivencia, y los Consejo Municipales, todo esto propuesto en la nueva ley, además de cambiar la nomenclatura del Ministerio de Gobierno y Seguridad por la de Ministerio de Gobierno.

Se envía este proyecto cuando el tema de la inseguridad vuelve a aparecer, justificadamente, en los aspectos prioritarios de las preocupaciones de los cordobeses. ¡Qué casualidad! ¿no? Más del 85 por ciento teme ser víctima de algún delito, en el marco de una situación social de conflictividad, con desocupación, aumento de la pobreza e inflación.

Claro, ya pronto viene la campaña electoral y quizás necesitamos hacer muchos spots publicitarios, como lo están haciendo en la ciudad de Río Cuarto, que estamos armando las Juntas de Participación Ciudadana, las Juntas Barriales y los Cuadrantes, pero, bueno, todos los días hay un arrebato en esa ciudad.

A la hora de analizar el presente proyecto de ley vemos que en su artículo 1º plantea como objetivo regular el sistema de Seguridad Pública y Ciudadana e implementar el Plan mencionado. Sin embargo, en la práctica sostenemos que es necesario replantear las distancias entre la proclamación de este tipo de políticas públicas y su ejecución, pues en el medio de la aplicación de este tipo de programas es necesario un diagnóstico profundo del contexto cultural, social, político y económico en el que se pretenden aplicar.

Consideramos que es necesario lograr cambios en la cultura organizacional de las instituciones de seguridad, las cuales hoy se centran –como ya lo hemos dicho- en un fuerte control social fundamentado en un paradigma de militarización y jerárquico.

Tenemos que entender que este modelo –aplicado desde la llegada al gobierno de Unión por Córdoba- no funcionó. También aclaro, -porque recién hicieron alusión a que hacía 17 años- que no es así, este modelo viene siendo aplicado desde que terminó la dictadura militar con los mismos policías, y una prueba de ello la tenemos en el último juicio a las juntas militares en donde hubo un policía de nombre Yanicelli involucrado, que estuvo en la Policía hasta los años 90.

Consideramos que es necesario lograr cambios en la cultura organizacional. Tenemos que entender que este modelo aplicado desde la llegada de Unión por Córdoba al gobierno no funcionó. La idea de la seguridad ciudadana liderada por actores policiales, con trayectorias en unidades militarizadas, poder independiente y escaso énfasis en la protección de los derechos y participación ciudadana, no debe ni puede seguir vigente.

El concepto de seguridad ciudadana es un concepto amplio que debe abarcar a la persona en toda su condición humana y, a la hora de implementar toda política pública, debemos tener una mirada integral y, por ende, más compleja; en este caso, no se puede analizar el delito desde una sola perspectiva.

Pasemos ahora al análisis del artículo 2º del presente proyecto. Según este artículo, la seguridad ciudadana tiene por finalidad promover la convivencia de la ciudadanía, garantizando la integridad y legítimo disfrute y posesión de sus bienes, y el efectivo ejercicio de sus derechos y libertades, asegurando la participación ciudadana en el desarrollo de las políticas de seguridad provincial.

Muy lindo el maquillaje, pero nos gustaría saber, concretamente, qué planes se aplicarán para lograr los objetivos planteados y si habrá un registro de evaluaciones de los resultados de su aplicación, porque es muy cierto lo que decía la legisladora preopinante: hace 17 años que el Estado provincial no ha podido evaluar con datos ciertos su propio accionar en materia policial y, lo que resulta aún más grave, no ha podido dar respuestas a los problemas de inseguridad. Todos los datos los obtenemos a través de la Universidad Nacional de Córdoba o de la Universidad Nacional de Río Cuarto o de alguna ONG, pero no es posible que el Estado provincial no brinde datos siendo que es su obligación.

En el artículo 3º, inciso g), se plantea la reglamentación y control de los servicios de seguridad privada. Estos servicios están actualmente regulados por la Ley 9236, de Régimen de los Servicios de Prestación Privada de Seguridad, Vigilancia e Investigación. Es necesario saber qué modificaciones se le introducirán en su reglamentación para lograr la coordinación con el nuevo plan.

A partir del artículo 7º, se desarrolla el Plan Integral de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito, y en su artículo 12 se plantea la constitución de Consejos barriales, municipales y departamentales de prevención y convivencia, con una perspectiva multidisciplinaria de la seguridad ciudadana, con ámbitos de labor y encuentro comunitarios, donde se fijen las prioridades de los barrios que integran el cuadrante o ámbito territorial que corresponda. Habría que preguntar cómo hacen para fijar esto; tal vez lo hagan por intuición, porque si carecemos de datos y análisis social, cultural y económico del barrio, debe haber algún “iluminado” que diga qué modelo se instaurará en ese barrio para llevar una política de relación con los vecinos.

Cuando se habla de la Policía Barrial que trabajará bajo protocolos específicos, entendemos necesario que se detallen los ejes de los protocolos dentro de los cuales se va a trabajar y que la ley habilita, como la asistencia a las víctimas, las orientaciones jurídicas, el fortalecimiento de los jóvenes, la asistencia social, la educación en drogas y violencia dirigida a establecimientos escolares e instituciones de salud, etcétera.

También se establece que la Policía Barrial trabajará de manera mancomunada con los Consejos Barriales. En este punto, es necesario repensar quién va a llevar adelante esos Consejos Barriales y cómo se van a organizar e integrar, ya que, como hemos dicho, las experiencias pasadas demuestran que comisiones similares funcionaron como espacios de legitimación de la actividad policial.

Otro riesgo constatado es que resulta habitual la selección de los miembros de la colectividad llamados a participar basada en su nivel de instrucción, su capacidad de expresión u otros elementos propios del estereotipo del buen ciudadano. Es decir, en el proceso de constitución puede producirse un proceso simultáneo de exclusión.

En esta junta, por ejemplo, no se planteó generar espacios de diálogo con aquellos jóvenes que se dice son los “productores de inseguridad”, sino que sólo participan aquellos propietarios que vieron vulnerado o amenazado su derecho a la propiedad.

En consonancia con el modelo vigente, las medidas que se proponen suelen ser defensivas y/o punitivas.

Esto que digo sobre la participación ciudadana se basa en un estudio que ha hecho la Universidad Nacional de Córdoba, por el que se pudo constatar lo que ocurre en las Juntas Ciudadanas.

Por ello, considero que es fundamental trabajar en la prevención, sobre todo con uno de los sectores más vulnerables, como lo es la juventud en nuestra Provincia, que está profundamente estigmatizado y sufre, sistemáticamente, el abuso policial.

En la propuesta llegada desde el Ejecutivo, en el artículo 10, se propone que un organismo de la Fuerza asuma, casi con exclusividad, el control interno de sus miembros. Esta no parece ser la mejor idea, en el marco de una corporación tan particular.

El “ser parte de” le resta perspectiva, independencia y autonomía de criterios. En otras palabras, advertimos que la nueva redacción concentra demasiado poder en una sola mano, la cual, apenas en una oportunidad al año, debería informar de su tarea al Poder Legislativo, cuando las tendencias nacionales e internacionales avanzan en otro sentido.

En síntesis, si la Policía se autodirige, se autocapacita, se autoadministra y se autocontrola, claramente se convierte en una corporación en el peor de los sentidos. Por ello, la Dirección General de Control de Conducta Policial no debe ser un órgano de control interno, sino lo opuesto; debe ser un órgano de control externo con participación ciudadana.

Para concluir, creemos que un modelo de política de seguridad debe ser parte de un modelo de inclusión con desarrollo económico y humano. Por ello, más allá de las modificaciones técnicas que la ley habilita, es necesario trabajar, en nuestra Provincia, con cuestiones como la aplicación de políticas públicas universales que lleguen a todos los ciudadanos y que tiendan a la igualdad de oportunidades para generar nuevos puestos de trabajo que dignifiquen y desarrollen posibilidades de crecimiento.

Insisto: creo que nos hemos perdido la oportunidad de hacer una ley acorde a lo que los cordobeses necesitamos.

Desde ya, adelantamos nuestro voto negativo.

Muchas gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (Passerini).- Gracias, señora legisladora.

Tiene la palabra el señor legislador Ezequiel Peressini.

Sr. Peressini.- Muchas gracias, señor presidente.

Estamos discutiendo una de las leyes más importantes con la cual el Gobierno va a salir a hacer campaña a partir de julio, o tal vez antes, y quizás ya estemos comenzando la campaña electoral con esta discusión, por la cual el Gobierno pretende “pintar” que hay un proceso de democratización de las fuerzas de seguridad, o un proceso de respeto a los derechos humanos y de escucha a los actores activos de cada uno de nuestros barrios, pretendiendo que creamos que se va a terminar con la represión, en fin, que existe un nuevo paradigma. Pero claramente no lo hay, porque si bien afirman falsamente que las intenciones del Gobierno de Schiavetti son trabajar de una manera más democrática junto a las fuerzas de seguridad y atacar los problemas sociales generales para resolver los problemas de inseguridad, sepan que el salario de miseria que está llevando adelante la política del Gobierno provincial enclavan en la pobreza a miles de trabajadores.

Son miles los trabajadores en negro también en nuestra Provincia, y eso significa que no tienen seguridad social ni jubilación; además, los miles de despedidos que ingresan a las

filas del hambre en nuestra Provincia hacen que el principal violento sea el Estado. El Gobierno provincial somete a la miseria a miles de trabajadores y sectores populares, mientras que, paradójicamente, son esos sectores empobrecidos los que más sufren la inseguridad.

Buscan, a través de un doble discurso, decir que con estos nuevos organismos intermedios van a democratizar la Fuerza, pero de una manera satelital o periférica, a manera de órgano de consulta, cuando, en realidad, el que va a seguir ejerciendo la fuerza de coerción y de violencia del Estado va a seguir siendo, claramente, la Policía de la Provincia de Córdoba, la que va a seguir teniendo un “fierro” y una chapa para perseguir a los jóvenes pobres de nuestros barrios, como ya lo viene haciendo. Ya intentaron maquillarse de democráticos con la modificación –o cambio de nombre- del Código de Faltas renombrándolo Código de Convivencia, y esta es una nueva instancia con la que el Gobierno intenta reposicionarse ante las profundas críticas vertidas por organismos de derechos humanos y organizaciones sociales y políticas. Por ello nos hemos movilizad^o de a miles en las calles, para que se sepa que su Plan de Seguridad no es más que represión.

Con el Código de Convivencia hay 40 detenciones diarias y 1440 al año; estos son datos extraídos en base a mucho esfuerzo de organizaciones relacionadas con los derechos humanos y en contra de las detenciones arbitrarias. Presten atención a este dato: 1435 de las 1440 detenciones estuvieron dirigidas a los conductores de motocicletas que no tenían casco o no llevaban la patente bien ubicada. Esto es realmente lamentable, ya que, mientras detienen a 1440 jóvenes en las calles de nuestros barrios, los grandes delincuentes que ampara la Justicia, la Policía y el poder político siguen libres.

La delincuencia no es un proceso de generación espontánea, sino que nace bajo el paraguas de la impunidad del sistema político, judicial y la podredumbre que significa, centralmente, el aparato policial y coercitivo de nuestra Provincia.

Buscan maquillar de “democrática” a esta nueva Ley de Seguridad provincial con elementos de ciudadanía, nuevos observatorios y estructura, pero, en realidad, lo que están buscando es la militarización de los barrios, porque con marcar las zonas rojas no alcanza. La única política que tienen para las llamadas zonas rojas es meter más policías y sólo le cambian el color del chaleco, usando uno naranja, pero igualmente los mandan a ejercer mayor control en los barrios; claramente se ha demostrado que esa no es una salida para la inseguridad. Lo que se consigue así es segmentar los barrios para poder diferenciar quiénes van a ser los responsables, como los comisarios. Y aquí también los Consejos Barriales no van a cumplir otra tarea que la de “pintarle la cara a la Policía” cuando –según sus dichos- se cometan excesos, por ejemplo. Esos excesos son sumamente recurrentes, porque en Córdoba, desde el año 2007 hasta ahora, llevamos 150 casos o más de gatillo fácil; tenemos uno en Carlos Paz, el de Franco Amaya, que fue ejecutado por la espalda por un miembro de la Policía de la Provincia de Córdoba en un control de motocicletas.

Esa es la Policía que hoy tenemos, y cuando necesitamos seguridad nunca aparece, porque los barrios populares están pegados al narcotráfico, están pegados a lo más podrido de nuestra sociedad.

También dicen, por ejemplo, que el Observatorio va a publicar, va a investigar, pero claramente los datos nunca aparecen. Los Consejos Barriales serán ocupados por los punteros políticos del oficialismo o la oposición porque, por más que la oposición hoy vote en contra este proyecto de ley, van a ir corriendo todos para meterse en esa “cueva” de los Consejos Barriales de Seguridad. ¿Serán parte de la política orgánica de seguridad del Gobierno de la Provincia?

Buscan más control, más coerción social, el promotor no va a ser más que un empleado de la Provincia de Córdoba. En fin, con el desarrollo de la miseria, del hambre, de los bajos salarios producto de las políticas del Estado, no hay posibilidad de más seguridad. Necesitamos seguridad en el trabajo, en el empleo y en nuestros barrios para poder resolver estos problemas de fondo.

Dicen que van a trabajar en la reinserción del detenido, cuando el objetivo fundamental de los espacios socioeducativos, como por ejemplo el Complejo Esperanza, estuvo controlado por casi 10 días por el Sistema Penitenciario de la Provincia de Córdoba y no resuelven ninguno de los problemas.

Qué reinserción buscan del detenido si en las comisarías de la Provincia de Córdoba hay ejecuciones y asesinatos -así tenemos los casos de Vanesa Castaño, Jorge Reyna, Iván Rivadero, Cristian Guevara-, y muchas veces son ahorcados con los cordones de las zapatillas. El caso de Vanesa es muy particular porque los informes policiales dijeron que se había ahorcado, pero cuando la familia pudo investigar el caso, resulta que le faltaban las uñas y tenía la mandíbula quebrada. ¿Quién pega de esa manera? Lo conocemos todos, y es la Policía, que lleva el chaleco y el nombre de los que hoy gobiernan esta Provincia.

No es más que continuar y maquillar la violencia estatal con la cual quieren no solamente esto, sino que es la misma Policía que reprime al movimiento obrero, a la clase trabajadora cuando sale a reclamar por sus derechos; es la reglamentación y la bajada a tierra del protocolo antipiquetes, es la bajada de la ley antiterrorista. Mientras discutimos esto tendrían que buscar un articulo nuevo -y tendría que ser modificada la Orgánica de esta Policía de la Provincia- porque ya generaron una división antiterrorista de la Policía de la Provincia de Córdoba con el único objetivo de controlar el movimiento de masas ante posibles disturbios.

Reconocemos el legítimo reclamo de seguridad de los trabajadores y los sectores populares que sufren la inseguridad en nuestros barrios populares, pero les decimos que no podemos confiar en las políticas del Gobierno.

Necesitamos un plan económico contra el hambre y la miseria; trabajo, salud y educación, y nada de eso está escrito acá.

Es un Gobierno que viene incrementando el presupuesto de Seguridad mientras no genera los cargos en enfermería en el sistema de salud, ni en el sistema de educación pública. Han generado más cargos en la Policía que en las escuelas; implementaron los jardines de tres años y no crearon los cargos necesarios para cubrirlos orgánicamente.

Al día de hoy tenemos 27 mil agentes de policía, incrementaron un 747 por ciento el presupuesto de Seguridad en 2016. En 2008 había 17.500 y hoy hay 27 mil policías, con distintos colores, chalecos o armamento. Se han cansado de darle plata a la Policía y no han resuelto ninguno de los problemas.

Por eso exigimos un cambio de rumbo inmediato. Hay que desarticular la verticalidad de la Policía y del aparato represivo que garantiza la impunidad, porque a los ladrones y delincuentes de guantes blancos no los investiga nadie, ninguno va “en cana”, ningún narcotraficante está detenido, preso o enjuiciado. Necesitamos terminar con esta verticalidad que garantiza la impunidad imponiendo la elección popular de comisarios y jueces, la revocabilidad de mandatos de los mismos para que, efectivamente, estén pegados a los intereses de la clase trabajadora, de los sectores populares y de la juventud que sufre no solamente la inseguridad sino también la violencia del Estado a través de sus fuerzas policiales.

Estos son algunos de los argumentos por los cuales el Frente de Izquierda rechaza tajantemente la presente Ley de Seguridad de la Provincia, porque no resuelve ninguno de los problemas y porque será el instrumento legal con el cual van a seguir buscando los chivos expiatorios de la inseguridad, que ustedes han generado, y estamos cansados que sean los jóvenes pobres de nuestros barrios los que la terminen pagando.

Es por eso que rechazamos el proyecto de ley del Gobierno.

Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra la legisladora Vilches.

Sra. Vilches.- Señor presidente: voy a adelantar el voto negativo de la banca del PTS-Frente de Izquierda. Es claro –y ha sido claro– nuestro rechazo y oposición a fortalecer esta institución putrefacta que es la Policía Provincial, una institución putrefacta que, por más que le cambien el nombre, lo único que se demuestra, diariamente, es que está implicada en todo tipo de delitos. De hecho, sin ir más lejos, se conoció hace pocos días el decreto del Gobernador Schiaretti ascendiendo escandalosamente a algunos miembros de la Policía Provincial implicados y acusados de delitos. Es decir que acá se premia, efectivamente, a aquellos que tienen antecedentes, que han participado del negocio del contrabando, del narcotráfico y demás.

Con esta Ley, a la que ahora le cambian el nombre –le ponen el adjetivo “ciudadana”, como si esto fuese a aminorar el peso del aparato represivo que están incrementando cada vez–, lejos de lo que manifestó la legisladora miembro informante, lejos de lo que anunció el Ministro de Seguridad en las distintas reuniones de comisión en las que estuvo presente, lejos de cualquier declamación y de no tener la más mínima voluntad de no favorecer la exclusión social ni la estigmatización, de hecho, lo que vienen haciendo todos los gobiernos de Unión por Córdoba es favorecer y generar ese 40 por ciento de pobreza del que hoy todo el mundo se escandaliza, pero que desde las bancas del Frente de Izquierda venimos denunciando, una política de miseria y exclusión que ustedes garantizan, y para eso fortalecen el aparato represivo del Estado, porque hay en curso un ajuste brutal en el cual coinciden con el Gobierno Nacional, y para eso necesitan la fuerza policial.

El Gobierno de Schiaretti –que tiene un discurso demagógico de respeto de los derechos humanos, al que vimos en el mega juicio de La Perla llorando “lagrimas de cocodrilo” y lo vemos movilizar o movilizar a su gente para la marcha del 24 de Marzo– es el que aumentó categóricamente el número de las fuerzas represivas del Estado. En su primer gobierno, Schiaretti, aumentó –lo anticipó y declamó con bombos y platillos– el 50 por

ciento de la Fuerza, lo que significaba en su momento 5.500 agentes; cuando terminó su mandato, la Policía ascendía a 20 mil agentes en el año 2011; el año pasado, cuando volvió a asumir, anunció que iba a incrementar, una vez más, la cantidad de agentes policiales llevándolo, a fines de 2017, a 27 mil agentes. Eso significa que nuestra Provincia tiene uno de los mayores niveles de concentración de policías por habitante, que es alrededor de 1 policía cada 130 habitantes. Es decir, es evidente que lo que están desplegando es una política de saturación policial aplicada en los territorios directamente vinculados con la política de exclusión social y estigmatización, ya que hablan de “zonas rojas” que son, precisamente, las zonas urbano-marginales. Después, en un discurso demagógico Massei dijo que allí el 99 por ciento son trabajadores honestos; sin embargo, es ahí donde montan la mayor saturación policial.

Este Gobierno –que se dice defensor de los derechos humanos– hoy anunció la creación de una nueva dependencia dentro de la institución, que es la División de Inteligencia Antiterrorista –con el provocador logo de un águila o un cóndor, como si en estos días estuviéramos para soportar símbolos nefastos–, asentada en la Ley Antiterrorista Argentina, votada en 2007 por el kirchnerismo –a medida de Washington–, que jamás cuestionó ningún partido político defensor de este tipo de policías; de hecho, sigue vigente y será la fuerza de esa ley la que aplicarán para esta División de Inteligencia Antiterrorista, cuyo futuro conductor dice, sin sonrojarse, que están aprendiendo nuevas lenguas vinculadas al mundo árabe, al mundo islámico. ¿Acaso, falta alguna aclaración para demostrar que tiene un carácter estigmatizante y persecutorio, hecho a medida respecto de lo que pide el imperialismo norteamericano?

Así, con este panorama, se avanza en las gestiones de Unión por Córdoba; en el medio, la Justicia les hace el favor de establecer el perfil del infractor ligado al comercio y al mercado de estupefacientes, diciendo que en su mayoría tienen entre 26 y 40 años, que no tienen estudios secundarios completos, que hacen changas, son jornaleros o amas de casa. De ese modo, están dándoles el pie, desde el enfoque de la Justicia, para que ustedes avancen.

Hoy, se hicieron presentes en esta Legislatura el fiscal anticorrupción, doctor Moyano, y el jefe de la Fuerza Policial Antinarcostráfico y, cuando les preguntamos cuál es la cantidad de involucrados en el gran negocio del narcotráfico, nos respondieron que esto no es de su competencia porque es un delito federal. Entonces, tratamos de encararlos de otra manera, preguntándoles cuántas son las causas que se derivan a la Justicia Federal –producto de la creación de esta nueva fuerza– y cuánto se avanzó en la lucha contra el narcotráfico –que no tiene que ver con el narcomenudeo ni con los perejiles o el último orejón del tarro en este delito, ya que hay muchos sectores que caen en esta situación y son usados como mano de obra barata de la propia Policía, que es la que regentea el negocio–, y no nos brindaron ningún dato.

Entonces, es evidente que esta política que están desplegando es de saturación barrial, generada en sectores pobres, urbano-marginales, de modo que la operación política de ligar la exclusión al delito organizado la están haciendo ustedes. Esto no tiene otro objetivo que enfrentar a los sectores más pobres con el conjunto de la población trabajadora, sobre la base de prejuicios racistas, discriminatorios, con una clara división de las filas de la clase trabajadora.

Por eso, entendemos que si ustedes realmente quisieran combatir esa exclusión y ese 40 por ciento de pobreza –del cual son exclusivamente responsables Unión por Córdoba a nivel provincial, y el radicalismo, que viene gobernando la ciudad–, si quisieran evitar el aumento de la desocupación, lo que tendrían que hacer es dejar de garantizarles las ganancias a empresarios como Roggio, que ahora está en boca de toda la provincia porque es el responsable y el que viene negociando no sólo con el servicio del agua sino con la Planta de Tratamiento de Residuos Peligrosos. Al respecto, hay que recordar –porque parece que muchos se olvidaron– que en esta Cámara el bloque Frente de Izquierda fue el único que votó en contra de la instalación de esa planta y de ese vertedero en ese lugar, y hoy se ven las consecuencias.

Si ustedes no quisieran garantizarles las ganancias a las automotrices, a los emprendedores inmobiliarios, a los sojeros, lo que tendrían que estar discutiendo es que la vida de la población vale mucho más que las ganancias de todos estos negociantes y de todos estos negocios, legales e ilegales. Por lo tanto, tendríamos que estar discutiendo el reparto de las horas de trabajo, sin disminución salarial, que todos los trabajadores tuvieran una jornada de 6 horas, que no trabajaran más de cinco días a la semana y que, de una vez por todas, quienes paguen la crisis y el ajuste sean los empresarios de la provincia y del país.

Es evidente, y no voy a agregar ningún argumento más, que lo que están haciendo es generar y fortalecer una fuerza de choque que han garantizado con pertrechos, con cámaras

de vigilancia, con los patrulleros que, escandalosamente, compraron de urgencia, según la admisión de los funcionarios del Gobierno, y que eso es para enfrentar a los trabajadores y a los sectores populares que, como ya lo estamos demostrando, están saliendo a resistir el ajuste en curso. Esa policía va a ser la fuerza de choque que quiere amedrentarlos y hacerlos desistir en su pelea.

Por ello, el bloque PTS-Frente de Izquierda rechaza el proyecto de ley en tratamiento. Luego expondré sobre el siguiente punto en discusión que también incluye a la Policía.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra la legisladora Marcela Tinti.

Sra. Tinti.- Señor presidente: estaba en duda sobre calificar el proyecto como “grotesco”. Pero, luego de escuchar a la legisladora miembro informante, que deja trascender que la culpa de la inseguridad es de Macri, de Mestre, de los yuyos o de las lámparas LED, no tengo dudas sobre dicha adjetivación.

En primer lugar, es burlesco que cada diez años el Poder Ejecutivo envíe leyes al Parlamento que definan “seguridad ciudadana” o “seguridad pública” y que estos textos legales indiquen que la seguridad pública y la seguridad ciudadana están a cargo exclusivo del Estado; lo que es una obviedad.

Parece que nuestros gobernantes provinciales tienen que remarcar la seguridad con textos, con tintas, con papeles, con proyectos, con tipeos, con palabras, con relatos, con bla, bla, bla, con burocracia porque en la práctica la seguridad ciudadana y la seguridad pública en Córdoba han sido y son desastrosas.

Esto muestra a las claras la crisis de la función estatal en el tema de seguridad. Pero el tema es urgente; los vecinos no dan más. Cuando la legisladora informante hablaba sobre el rol del ciudadano me hizo pensar que no lo tienen en cuenta. Tengo una nota de representantes de la mayoría de los centros vecinales que desde hace tiempo están pidiendo audiencia para hablar sobre el tema de la seguridad.

El derecho a la seguridad está consagrado en la Constitución de la Provincia en el artículo 19, inciso 1°. Pero, además, el Gobernador es la máxima autoridad de la fuerza policial, por lo tanto, la seguridad ciudadana tiene que ser una política de Estado, no una ley.

En febrero del año pasado se sancionó la Ley 10.337 por la que se le otorga competencia al Ministro de Gobierno para asistir al Poder Ejecutivo en todo lo inherente a políticas de seguridad, tal como se establece en el artículo 18 que, en uno de sus incisos establece que el Ministerio de Gobierno debe entender en “la ejecución de los planes, programas y proyectos del área de su competencia elaborados conforme a las directivas que imparta el Poder Ejecutivo.” Textualmente, las competencias del Ministerio son elaborar, implementar y evaluar políticas y estrategias de seguridad pública; dar directivas generales y específicas para su gestión; promover programas y proyectos de desarrollo; coordinar y coadyuvar lo inherente a cuestiones de seguridad; es larguísimo -para qué voy a seguir leyendo si la ley se presume conocida- es un rosario de facultades amplias, abarcativas y, obviamente, necesarias para la gestión.

Somos respetuosos de esas facultades, somos democráticos, la gente votó una fórmula de Gobierno y deben hacerse cargo, pero hemos llegado al punto en que, en Córdoba, la seguridad se ha privatizado, los barrios contratan guardias privados, otros ciudadanos se mudan a barrios privados, vecinos se organizan por su cuenta ...

Sr. Presidente (Passerini).- Disculpe legisladora.

Solicito a los señores legisladores y al público que guarden silencio.

Continúe, señora legisladora.

Sra. Tinti.- Gracias, señor presidente.

Decía que los ciudadanos se organizan para tener seguridad privada en los barrios abiertos o se mudan a barrios privados con seguridad, además, se instalan alarmas comunitarias.

¿Sabemos cuántas empresas de seguridad existen en Córdoba, que están vigilando barrios abiertos? Las políticas de seguridad tienen que tener una pata muy importante que son las estadísticas, pero no existen. ¿Conocemos las estadísticas de la inseguridad y del delito? El año pasado solicitamos un informe al respecto y, entre otras cosas, decíamos que en Córdoba no hay estadísticas oficiales del delito, sólo informes de ONG y datos periodísticos, como dijo otra legisladora.

En la página de la Dirección de Estadísticas y Censos de nuestra Provincia, las últimas estadísticas proporcionadas en relación a delitos contra las personas y contra la propiedad son del año 2008; sin embargo, están actualizados y se publican datos de

encuestas sobre faenamiento de ganado o el índice del costo de la construcción, pero de los datos del mayor flagelo de los cordobeses, nada.

Cuando vino el Ministro Massei, el legislador Arduh preguntó expresamente sobre los índices del delito y el ministro dijo que se estaba trabajando en ello, pero que no quería dar datos, “no queremos dar índices”, dijo, y me remito a la versión taquigráfica de ese día, dijo: “En verdad, comparados cada uno de los índices que tenemos con los de otras provincias en grandes conglomerados urbanos, Córdoba está realmente muy disminuida en delitos como, por ejemplo, homicidios dolosos comparados con Buenos Aires, con la CABA, con la media nacional, con Mendoza y con la provincia de Santa Fe. Pero no queremos dar exactamente las cifras hasta que el Observatorio ...”, se refería al Observatorio de Estudios para la Convivencia y la Seguridad, “...no tenga la aprobación del acta correspondiente ...”; grotesco, nuevamente uso esa palabra.

Además, quiero aclararle a la legisladora que informó sobre el proyecto que cuando en las comisiones preguntábamos por resultados sobre lo ya trabajado en algunos barrios, nos estábamos refiriendo a eso, es decir, a si mejoró o no la seguridad, no a si los chicos juegan al fútbol o si hay programas sociales.

Este proyecto es una mera expresión de buenos deseos y la política de seguridad sigue a la deriva.

Hoy vemos titulares en los diarios referidos a que la formación policial le adicionan cuatro meses, parece que se trabaja según el método ensayo error.

También, cuando vino el Ministro Massei, presentó al equipo que forma parte de su Ministerio y, además, a gente que está trabajando, según dijo: el Director General de Recursos Humanos de la Policía de la Provincia, Comisario General Marcelo Altamirano; tres asesores que trabajan en conjunto con este Plan de Seguridad; presentó también al Comandante Bernardo Gómez del Campo, de México, que “está trabajando con nosotros desde el comienzo de nuestra gestión”, afirmó, y “es uno de los especialistas más importantes en Latinoamérica en Policía de Proximidad y Policía de Cercanía y Barrial”. Presentó al arquitecto Gustavo Restrepo, de Colombia, urbanista social; al doctor Claudio Stampalija, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; a Sebastián Serrano, Secretario de Coordinación del Ministerio de Gobierno, y a Alfonso Mosquera.

Sin embargo, en las comisiones nos pidieron a los miembros que presentáramos propuestas alternativas a este proyecto. Es decir, en un mes teníamos que ser expertos en seguridad. Tienen a los mejores, según dicen, pues, ¡resuelvan, entonces!

En consecuencia, señor presidente, ruego consigne el voto negativo del Frente Cívico a este proyecto.

Nada más.

Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el legislador Eduardo Salas, según el orden de prelación.

Sr. Salas.- Señor presidente: estaba tentado de decir que esta no era una ley de prevención, como se quiere plantear. En realidad, es una ley de prevención: ustedes están previniendo frente a una situación que se les hace muy dura porque son conscientes de que la situación social se está saliendo de curso, porque no hay respuesta, porque los problemas sociales son muy grandes. Lo que han creado es todo un sistema para contener a través de los barrios y ahora se agrega la creación de esta Policía...

Cambiamos de Presidencia.

-Ocupa la Presidencia la
Vicepresidenta 1º, legisladora Caffaratti.

Sra. Presidenta (Caffaratti).- Continúe, señor legislador.

Sr. Salas.- Decía que se ha creado un aparato de prevención en los barrios y todo lo demás y, por otro lado, ahora, con la creación de esta Policía Antiterrorista -que les aclaro desde ya que vamos a ir a fondo porque es el peor ataque a las libertades públicas en Córdoba- han metido la línea represiva a fondo, pero no represiva en el terreno de ir a buscar a los delincuentes –después voy a explicar por qué no los van a ir buscar nunca-; se han metido en la línea de la lucha de los movimientos, de las ideas, y están creando un aparato de investigaciones y de espionaje. Nadie va a tener control sobre eso y vamos a ir a fondo contra esa situación.

En toda política de prevención, en la creación de la Policía Barrial, etcétera, hay un gran camelo porque, en realidad, la población no controla nada. Es una relación desigual entre gente armada y gente desarmada. Por ejemplo, habría un control si la gente pudiera ir

a la Comisaría y pudiera decir: “¿me muestra los operativos que hicieron?, ¿cuál fue el resultado?, ¿me dice qué pasó con las denuncias que efectuamos?, ¿me dice en dónde anduvo la Policía dando vueltas todo este tiempo?”.

La población no va a poder ir a requerir eso. Hay una relación desigual, es puro “macaneo”. Esto me hace acordar a la canción –los que son de mi generación se van a acordar de Silvana Di Lorenzo- que dice: “parole, parole, parole”. Es puro palabrerío para justificar este proceso de acordonar los barrios y tener un control sobre un proceso social. Este es el problema central del paradigma de la prevención, porque el que diga que la prevención no quita, le digo que está establecido en la ley, en el artículo 2º, que modifica al 3º en el inciso b), donde está claro el carácter de órgano represivo.

-Ocupa la Presidencia el Vicepresidente, legislador Daniel Passerini.

Sr. Presidente (Passerini).- Señor legislador, le solicito una interrupción, por cuarta vez en lo que va de la sesión, para solicitarle al resto del Cuerpo legislativo y público presente que mantengamos un respetuoso silencio para seguir escuchando.

Continúa en el uso de la palabra señor legislador.

Sr. Salas.- Alguien dijo –no fue la legisladora que presentó el proyecto- que se necesitaba poner más fondos. La Policía se llenó de fondos y el resultado que usted tiene que explicar es por qué hay más inseguridad habiendo cada vez más policías, más plata y más armas.

Esta ley está destinada al fracaso desde el punto de vista de la inseguridad, es decir, de los problemas que sufre la ciudadanía; en ese sentido, está destinada al fracaso porque no va a los problemas centrales del por qué se produce la inseguridad; la pobreza no produce inseguridad, la pobreza produce miseria humana, chicos mal nutridos que no pueden evolucionar, produce hambre, la destrucción de los hogares, pero no inseguridad.

La inseguridad la producen desde arriba, lo que hace la pobreza es darle mano de obra barata, regalada, descartable -y después aparecen muertos- a todo el mecanismo y a toda la verdadera fuente del delito. ¿Alguien puede pensar que un chico de una villa o barrio pobre puede organizar una red de narcotráfico? Ni loco, eso necesita de policías, fiscales, jueces y políticos. Esa es la realidad, el pez se pudre por la cabeza, y esta ley no va a decir nada de eso, es como pedirle peras al olmo porque se tendrían que autoenjuiciar todos para decir por qué llegamos a esta situación.

¿Quién puede organizar el lavado de dinero, la trata de personas, el juego clandestino?, ¿un chico pobre? La pobreza no. Eso lo organizan los que tienen los bolsillos llenos de “guita”.

Una medida fundamental contra la inseguridad sería abrir las cuentas de los bancos, nacionalizarlos porque ahí va toda la “guita” que se lava, el dinero de la droga, del juego, de la prostitución, ahí va a parar, no a los pibes pobres. Los chicos pobres son usados -por la pobreza que ustedes producen- como mano de obra descartable para el delito; entonces, nunca se va a solucionar la inseguridad con una estructura que no incluye sólo a la Policía sino a un Estado que está podrido.

En Córdoba hubo un hecho terrible que cobró mucha magnitud -uno de los tantos hechos terribles, pero me refiero a ése porque me parece educativo-: el de la mujer policía que fue golpeada y matada a palazos en El Tropezón, y lo hicieron para robarle la moto, que fue a parar a un reductor, que no es el mismo que le sacó la moto.

¿Se acuerdan del jefe de la División Robos y Hurtos que tenía 700 llamadas cruzadas con el principal reductor de autos de esta Provincia? Nunca me acuerdo el nombre.

Una mujer policía que venía a trabajar a las 4 o 5 de la mañana, a quien estaba esperando su hijo, la mataron de un palazo para que un gordo hijo de su reverenda madre se llene los bolsillos vendiendo el fruto de lo robado y tirándole posiblemente al que robó dos “mangos” y después “arreglate y si jodés te pego un tiro”. Esa es la realidad. El pez está podrido por la cabeza.

Ustedes hacen una ley de prevención para contener los movimientos sociales, una división antiterrorista para espiar a la gente, para controlar las luchas sociales; ustedes se preparan para lo peor, y esto significa que ustedes saben que van a lo peor y no tienen ninguna solución; van de cabeza a meter al pueblo cordobés en una situación insostenible; son conscientes de eso y no tienen ninguna salida.

Rechazamos esta ley, como explicó mi compañero Peressini, por todos los elementos que tiene, pero creo que deben señalarse estos problemas para que la población no se engrupa y vayamos fuertemente contra esta División Antiterrorista.

Nada más.

Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra la legisladora El Sukaria.

Sra. El Sukaria.- Señor presidente: venimos a dar tratamiento al proyecto que el Ministro Massei nos anunciara desde hace un año en este mismo recinto y, en verdad, con gran novedad, tratando de involucrar nuevos conceptos, como son la Política de Seguridad Ciudadana, cambiando el paradigma. Y en esto no es que seamos contrarios a un cambio de paradigma, sí somos contrarios a cambios de un nuevo modelo y no de paradigma.

Y respondiendo a la legisladora Trigo, que me permita decirle que perfectamente recuerdo cada una de las materias que estudié en la Facultad de Derecho y que tengo en claro cuáles son las políticas que se reserva la Provincia y cuáles son las federales. Perfectamente entiendo cuál es el reparto federal de nuestro Estado nacional y de nuestro Estado provincial.

Y como estamos hablando de una Ley de Seguridad, es exclusivamente de competencia de la Provincia de Córdoba. Inclusive, los programas sociales que evitan la pobreza -como ella adujo, que son una problemática nacional-, son realmente un asunto que debe mediar y solucionar como política pública el Estado provincial. Y si no, miremos los índices, porque ahora podemos hablar con índices; no con los índices de seguridad que esta Provincia no tiene, porque no existe un mapa del delito ni estadística del delito, y se esconden adrede cuáles son las estadísticas reales sobre la inseguridad en nuestra Provincia, sino con las del INDEC, que miden que a nuestra Provincia le preocupa y no le ocupa la tasa más alta de pobreza y también la nacional más alta de indigencia en el Gran Córdoba, con el 10,8 por ciento. Lamentablemente, estas estadísticas son las que hablan de exclusión.

En esta Provincia -que dentro de los fundamentos de la ley se dice que la exclusión es parte de esta problemática-, cuando de exclusión hablamos, lo hacemos para los sectores más vulnerables, donde la Policía, amparándose en una ley provincial, no habla de abuso y arbitrariedad, cuando está lejos de crear la seguridad y la confianza que un hombre de la fuerza pública debe ofrecer, ser quien nos cuida y nos asegura el porvenir, y no esta doble tributación que el ciudadano cordobés está pagando con sus servicios, impuestos, alarmas, alarmas comunitarias, policías, policías privados y servicios múltiples que ofrecen empresas, porque la seguridad pública no nos alcanza ni para descansar en paz, ya no para tener abiertas las puertas de nuestros hogares sino para evitar el descanso en paz de cualquiera de los ciudadanos de toda nuestra geografía provincial.

Cada día lo que nos preocupa más -y no hay ninguna encuesta que demuestre lo contrario- es la inseguridad de todos los cordobeses, y nadie está exento de esta problemática.

Nos preguntamos algunas cuestiones puntuales: cuándo vamos a ver qué capacitación se merecen nuestros policías, cuyos chalecos están vencidos y no hay medidas precautorias para que estos chicos, que estudian como una salida laboral y que muchas veces se convierte en una vocación digna, que no tienen ni siquiera el chaleco y se los tienen que comprar sus familiares para poder salir a cuidarnos y defendernos; cuándo vamos a hablar de la falta de elementos metodológicos y de instrumentos preventivos, de la falta de infraestructura de la policía y de los temas que realmente hacen a la inseguridad y no de convertir a la ciudadanía en un elemento de seguridad, justamente, asegurando que lo que no provee el Estado lo provean los mismos vecinos.

¿Quién dijo que está capacitada esta policía comunitaria para acceder al cuidado de todos los vecinos y ciudadanos de esta Provincia?, ¿quién la elige? Hace diecisiete años que venimos bregando por una política de seguridad, y lo único que tenemos es una política de inseguridad continua. ¿Quién habla de estas cosas?

El año pasado, en agosto, se lanza la policía barrial, y recorremos la ciudad de Córdoba y no vemos que la seguridad se sienta en cada uno de nuestros barrios, al contrario; habría que preguntarles a muchos de nuestros legisladores que este mismo fin de semana han sufrido hechos de violencia delictiva. Pero no sólo los legisladores, nadie está exento de los que estamos en este recinto de haber sufrido un hecho delictivo, ningún cordobés lo está.

Insisto: se están renovando los Consejos Barriales de seguridad, que serán coordinados por un promotor barrial, que pasan a ser empleados públicos, que surgieron de una búsqueda interna en la que no queda claro cuál fue el criterio y la actitud tomada en cuenta para su selección, ¿estamos seleccionando promotores o punteros políticos?, ¿en manos de quiénes estamos dejando la seguridad de los cordobeses?

No compartimos en absoluto la reinstauración del control de la conducta policial dentro de la misma Fuerza; para que sea objetiva, evite las mafias y vaya en una dirección específica y correcta, el control policial debe ser externo a la Fuerza y no intrafuerza. Esto mismo es lo que hizo la Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, también, previamente, en el Gobierno de la Ciudad...

-Manifestaciones desde la bancada de la mayoría.

Por más que escucho los chiflidos -y en este caso, usted no pide silencio- voy seguir amparando...

Sr. Presidente (Passerini).- Legisladora: si usted lo considera, le vamos a pedir a los legisladores que hagan silencio y que con respeto sigan escuchando y participando en la sesión.

Continúe con el uso de la palabra, legisladora El Sukaria.

Sra. El Sukaria.- Señor presidente: insisto, el organismo de control policial debe ser independiente de la fuerza y del poder político, es lo único que permitirá la objetividad, fortaleciendo y dando mayor independencia al Tribunal de Conducta Policial.

Otra cosa que debería exigir, como una voluntad política de este Estado, es el requisito de la presentación de las declaraciones juradas patrimoniales. No entendemos por qué, cuando en otras jurisdicciones se ha cumplimentado -y vuelvo a citar el coraje y la convicción de la decisión política de María Eugenia Vidal, que no dudó en echar a 58 comisarios por no presentar sus declaraciones juradas-; en cambio, no hay estadísticas de los 120 jefes de policía de la Provincia que hayan presentado declaraciones juradas. Según un artículo de La Voz del Interior, de agosto del año pasado, sólo 3 de los 120 lo habían realizado. Reitero, solamente es una nota periodística, nada oficial porque no existe información sobre seguridad en Córdoba.

Creemos que la situación de seguridad es gravísima en la Provincia, producto de la degradación de la Fuerza y de la desmesurada falta de una política de seguridad pública.

Por eso, legisladora Trigo y Gobierno de la Provincia, no acompañamos este proyecto de seguridad, porque no está a la altura de la realidad y de las necesidades de los cordobeses.

Gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (Passerini).- Legisladora Trigo, perdón, no la había visto, tiene el uso de la palabra.

Sra. Trigo.- Señor presidente: estaba levantando la mano hace rato, está disculpado.

Simplemente, como la legisladora El Sukaria hizo mención, le voy a sugerir con todo respeto, a través suyo, por supuesto, y con todo el respeto que me merece esta Casa de la democracia, que sería importante también que evalúe la política de seguridad que está llevando adelante el Gobierno nacional a través de Patricia Bullrich, que -desde mi punto de vista, y me hago cargo de los dichos que voy a expresar- está absolutamente lejos de todo lo vertido por la legisladora, de las aspiraciones ¿verdad?, porque lo que menos se hace es, justamente, proteger los derechos de aquellos ciudadanos más vulnerables. Lo único que está pidiendo es represión, represión y represión.

Muchas gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (Passerini).- Gracias, legisladora.

Tiene el uso de la palabra el legislador García Elorrio.

Sr. García Elorrio.- Gracias, señor presidente.

Voy a ser muy breve. No estamos de acuerdo con este proyecto, y no lo estamos porque -como lo hemos dicho en la reunión de la comisión respectiva en el día de ayer- Córdoba se merece una ley de consenso en materia de seguridad.

Ustedes me dirán: "¿por qué una ley de consenso si el pueblo le ha dado al partido de gobierno la decisión de gobernar y de plantear las políticas?" Porque en 17 años esto ha ido "in crescendo". Quiere decir que a un partido político no le alcanza -no porque ustedes sean buenos o malos- definir las políticas de seguridad de la Provincia.

La gente mira horrorizada los problemas de seguridad que tiene nuestra patria porque, en definitiva, también sería muy injusto decir que el problema no lo tienen los tucumanos o los salteños. Tenemos un problema grave que se debió abordar en un proyecto de consenso, porque desde que está la gestión del Ministro Massei tenemos reparos por los paradigmas que tiene, y se los estamos marcando. Ya me referiré a ese punto.

Creo que cuando los cordobeses mañana vean que la Legislatura dividida definió una nueva ley de seguridad, no será una buena noticia para ellos, porque pensarán "con los problemas que tenemos ¿no se pueden poner de acuerdo en qué es lo mejor para los cordobeses?".

Se dirá que nadie le ha aportado alternativas al proyecto del oficialismo, pero creo que sí se lo ha hecho. Pero esto no es de ahora, en los últimos años en esta Legislatura ha habido muchos proyectos de alternativas al problema de inseguridad en Córdoba, muchos proyectos que están en algún cajón a disposición de quien los quiera ver, y hemos aprovechado estos debates para recordarlos.

Argentina necesita una política de Estado en materia de seguridad pública, y Córdoba también necesita una, pero una política profunda que toque todos los aspectos vinculados al tema, que no es solamente la represión del delito sino, fundamentalmente, darle a la gente la inclusión que necesita, para que no se creen formas alternativas de vivir en la sociedad y de vivir en el delito.

Ustedes hoy van a imponer su mayoría, pero el problema seguirá estando mañana, pasado mañana. Esto es simplemente una noticia periodística de mañana: "Reforma de la Ley de Seguridad", quizás ustedes también hagan una publicidad al respecto, pero a mí me preocupa encontrar una política de Estado.

La primera diferencia con el paradigma del Ministro Massei es que él incorpora, a través de los Consejos Barriales, la variable "inclusión", pero ésta es un apéndice del planteo central que es la seguridad. Creo que esto es un error sideral que se pudo haber asumido y conversado, ya que había otros paradigmas para enfrentar el problema.

Dependiendo del mayor o menor blindaje mediático que ustedes tengan podrán confundir un poco más a la gente con este tema, pero de ahí no pasa; es otra mala noticia para los cordobeses.

Al tema de la Policía ustedes lo tienen muy complicado; debemos aclarar que dentro de esa institución hay muy buena gente, pero también hay de la otra y no han encontrado los mecanismos para que los otros -los que viven de otra forma- sean puestos a resguardo, si no la inteligencia criminal de Villa Allende no podría haber tenido a ese señor que detuvieron el otro día; quiere decir que no pudieron prevenirse de poner en esa zona a una persona que no estaba calificadas para hacer, precisamente, inteligencia criminal sino otro tipo de "inteligencia": para la criminalidad. Hay que ayudar pronto a la Policía.

Todos los cordobeses tuvimos un problema los días 3 y 4 de diciembre de hace algunos años. Eso demostró la anchura, la profundidad y la magnitud de la crisis que se vive en esa institución, y cómo eso repercute en la sociedad; pero como zafaron van para adelante, y el tema sigue dando vueltas.

Hace cinco años propusimos que la Fuerza de Seguridad estuviera en manos de una junta de comisarios generales retirados que en los últimos años hubieran tenido cargos importantes en la Policía, a los que había que hacerles un análisis de sus situaciones patrimoniales, eligiendo a quienes no se hubieran enriquecido en el cargo. Era una propuesta muy simple: un gobierno colegiado por una junta de comisarios generales retirados. Eso lo propusimos hace cinco años porque les dijimos que iba a llegar el día en que un recluta, un chico recién agregado a la Policía, tuviera que tomar decisiones de importancia, porque cada vez que tienen una crisis van "serruchando". Ahora tienen un jefe de Policía de 43 años -y no pongo en duda a este hombre- y ustedes saben que a los comisarios de mayor edad que pasaron dignamente por la Fuerza les podrían haber dado la oportunidad de mantener una pirámide como la gente.

El otro día tuve una visita a mi casa de gente que no había invitado. Yo atiende gente hasta las 9 o 10 de la noche, estos llegaron más tarde. Le juro que yo no había invitado a nadie, todas las puertas estaban cerradas.

Después, entre las 2 y las 6 de la mañana, recibí en mi casa a todo el sistema jerárquico de la Policía de la Provincia -comisarios generales, comisarios mayores, comisarios inspectores. Fueron llegando a distintas horas, por graduación; primero vinieron los más modernos y después los más antiguos, preocupados por estas visitas. Y había un muchacho muy jovencito -que aparentaba menos edad todavía- que me dijo: "doctor, yo soy el jefe de Robos y Hurtos de la Policía de la Provincia". Le pregunté: ¿cuántos años tenés? -no sé si tenía 36 o 37 años, aparentaba menos-, ¿vos estás a cargo de todos los robos de la Provincia de Córdoba?, y me contestó: "y sí, doctor". Nos saludamos y estuvimos charlando.

Eso pasa porque no aplicaron las soluciones que les propusimos hace años, entonces, se fue generando esta situación. Además, varios legisladores hemos dicho que la Policía debe tener una autodepuración externa a sus miembros.

Le menciono dos episodios: venían trabajando con un Tribunal de Conducta Policial; usted dice: "no, teníamos un Tribunal de Conducta con gente de afuera"; pero ahí prestaban servicio 80 miembros de la fuerza, a quienes sacaban de los lugares operativos donde estaban para que juzgaran a sus propios camaradas.

El mismo error cometieron con la Policía Antidrogas. El ex Gobernador De la Sota nos dijo que quería tomar distancia de los problemas que había tenido con la Policía de la Provincia y que quería abrirla a la participación de civiles, y cuando nos dimos cuenta -a los

seis meses- dos comisarios de la Policía ya comandaban la Policía Antidrogas. En definitiva, la buena voluntad que pudo haber tenido el Gobierno se esfumó.

Hay un problema concreto en la Policía de la Provincia que no se resuelve sin llegar a una revisión profunda, porque pronto la va a comandar, si siguen las crisis, un chico de 25 años, porque cada vez que tienen un problema hacen una purga, entonces, se van a quedar sin cuadros -se los digo, como se los vengo diciendo desde hace años, cuando la solución era otra.

Tampoco han asumido el problema del narcotráfico en Córdoba, que no es el único problema de seguridad, pero es un ingrediente muy fuerte porque le hace daño a la fuerza de seguridad provincial, porque exhibe tanto poder económico que golpea muy fuertemente a cualquier fuerza de seguridad –y no iba a estar ajena la Policía de la Provincia de Córdoba.

Si vieran un mapa de los puntos de venta de droga en la ciudad, en el Gran Córdoba, quedarían impactados; yo lo vi, hace dos o tres días, y son impactantes.

Ahora bien, el Gobernador Schiaretti nos prometió, el primer año que vino aquí, que iba a sacar la droga de los barrios. Discúlpennos, pero creo que cada día hay más.

Hoy nos visitó el Fiscal General de la Provincia –para qué voy a relatar lo que pasó, cada uno habrá hecho su lectura- y me quedé preocupado del todo porque, por ejemplo, puede haber un narcodistribuidor que administre cien quioscos, entonces, si le detienen a diez personas tiene treinta de recambio para reemplazarlas. Por eso, no termino de entender cómo no van sobre los distribuidores de la droga, que son 18 o 20, no más; cualquiera puede vender droga en su casa, pero no cualquiera puede robar un auto, llevarlo a Orán y cambiarlo por pasta base, traerla, cocinarla y después distribuir en esos kioscos. Además, están perfectamente identificados; me van a decir que eso es materia federal. ¡Pero entonces pónganse de acuerdo! Alguien se tendrá que poner de acuerdo para caer sobre ellos.

Ustedes, que son un partido de masas o de mayorías, pueden averiguar esos datos porque están en todos los barrios de Córdoba. Pueden, con una mínima logística, averiguar quiénes son los que venden la droga en cada barrio; preguntando se los van a decir. Se van a enterar quiénes la distribuyen, de dónde la traen, así como se lo van a informar a cualquier partido con similar estructura territorial al de ustedes. Así, pueden contar con un mapa en quince minutos, llegando rápidamente a 18, 20 o 25 cabezas –las que sean.

También se conoce que hay rutas absolutamente abiertas; esta mañana les conté un caso –que ya le entregué a un fiscal adjunto- de una ruta que está perfectamente abierta, y no sólo al ingreso de la droga sino también al contrabando o a lo que se les ocurra.

En definitiva, no se blindan las rutas, no se tocan a esas personas cabecillas de la droga en los barrios, que esperan un ejército de esclavos siempre dispuestos a vender droga, sea por malicia, codicia o necesidad social algunos. ¿Realmente no podían resolver eso?

Ya entrando al tema de los paradigmas, espero que no se den más casos como el que les voy a contar. El otro día un grupo religioso me manda un señor que, en la zona de Argüello, se resiste a vivir bajo el ejido de un narco que, de alguna forma, domina toda la zona, desde la cancha de fútbol hasta las actividades que se realizan en el barrio. Y este vecino no quiere vivir así, por ser un cordobés bien rebelde, y valioso por cierto; entonces, hizo la denuncia del caso y, a raíz de la misma, se llevó a cabo un allanamiento en la casa del narco donde encontraron un arma 9 milímetros. Por supuesto, detuvieron a la hija del narco ya que no había otra persona en ese momento en la casa, por lo que el narco se le fue “al humo” a este vecino. Por supuesto que este vecino da aviso a la Policía y la misma se hizo presente, pero ocurrió que en un momento este vecino percibe –no quisiera haber estado en el lugar de ese hombre- o advierte la naturalidad con la que dos policías le guiñaban los ojos al narco, como diciéndole “quedate tranquilo porque hemos venido acá porque éste nos ha llamado, pero acá no hay bronca”.

Imagino el panorama si le yerran a quien pongan a cargo en esos Consejos Barriales, ¿o la idea es poner en riesgo a la gente? No vaya a ser que alguien se exprese en esas reuniones sin saber de qué lado puede estar el policía de turno o el promotor. Como sea, esto está sucediendo en Córdoba, no digo que en todo Córdoba, pero a este hombre que les conté le sucedió. Yo acompañé a este vecino a hacer la denuncia –los fiscales Caballero y Caro pueden dar fe de esto- y gestionamos que le pusieran una custodia, ya que estamos ante una situación muy complicada porque este hombre no se quiere mudar y vive en medio de eso.

Si en 17 años no se hizo lo que se debió para enfrentar el narcotráfico, el delito organizado, ¿hay derecho ahora de pedirle a la gente que se cargue sobre sus espaldas los Consejos Barriales para colaborar con fuerzas de seguridad que no son del todo confiables? ¡No son confiables, señor presidente! Y se lo voy a demostrar.

Esos indeseables que tuve de visita la otra noche, cuando llevaban una hora y cuarto adentro de mi casa, me tenían maniatado, gatillado con el tambor del revólver, en definitiva,

lo que le pasa a todos los cordobeses cuando sufren un asalto de este tipo, me dice mi hija: “Papá, algo escuché que a estos les hablaban de afuera, alguien les habló de afuera, por eso te vinieron a buscar al final”. Y, efectivamente, al final vino uno, se me acerca –yo estaba tapado con una frazada y maniatado- y me dice: “viejito –eso fue una ofensa- ¿a quién custodian en esta cuadra?”. “No, acá, a nadie”. “Viejito, acá custodian a alguien”. “¡No, no acá no custodian a nadie!”. “No, acá custodian a alguien, ¿a quién están custodiando en esta cuadra?”. Por poco me decía “por favor” el tipo, “hemos entrado a la casa equivocada, decime que no era acá”. Se ve que no se convencieron con mi respuesta y recién ahí se fueron.

Ahora, ¿quién andaba dando vueltas en torno a mi casa como para darle una información fidedigna de esta naturaleza: “ojo que ahí hay un custodiado”? ¿Me entiende? Por eso hay que tener mucho cuidado con los Consejos Barriales.

En el fondo, me parece, señor presidente, que estos Consejos Barriales pueden funcionar en Suiza, en Suecia, pero no en Córdoba porque, primero, hay que depurar las fuerzas de seguridad y darle garantías al ciudadano que quiera contribuir en seguridad. ¿Me explico?

Ustedes tenían una subdirectora de Derechos Humanos, el Gobierno de Unión por Córdoba la tenía, que estuvo sentada en estas bancas; era una dirigente política de primer nivel, se habrá cansado de ganar elecciones, y me mostraron en la Justicia Federal -por las denuncias que hice por las que tuve que estar custodiado, por una carta documento que me mandó Schiaretti para que diera los nombres-, las cintas del control que tenía esta mujer de las cárceles, manejaba el Servicio Penitenciario de la Provincia de Córdoba.

A ver, ¿Córdoba está preparada para los Consejos Barriales?, ¿es justo que le carguemos a la gente semejante responsabilidad? Creo que no.

Creo que a la gente hay que convocarla para otra cosa. Los que tienen el voto del pueblo, que tienen lo que hay que tener, háganse cargo de enfrentar los problemas que hay que enfrentar. ¿Está claro? A la gente hay que dejarla tranquila, hay que convocarla para otra cosa. Hay que convocarla para que trabajemos para que los chicos tengan proyectos de vida, que es lo que les vengo proponiendo hace 5 años, en mesas territoriales donde el Estado y la comunidad trabajen para que la gente tenga proyectos de vida, para eso sí hay que convocar a la comunidad.

Ustedes no pueden, mientras no resuelvan el tema de la Policía de la Provincia de Córdoba, mientras no resuelvan el problema del poder paralelo que se está ejerciendo en determinados barrios, mientras no resuelvan eso no tienen derecho a sentar a la gente en una “silla eléctrica”. En muchos lugares no pasará nada, pero en muchos otros van a poner en riesgo a la gente. A esto se los digo para que tengan mucho cuidado con lo que van a hacer en esos Consejos Barriales.

Se puede lograr la adhesión de la gente a proyectos propositivos, donde se les ayude a los chicos a encontrar otra forma de vida, que no sean ejércitos del narcotráfico, para eso convóquenlos, no para los Consejos Barriales.

En primer lugar, deseo que con esto que hoy van a aprobar, y que ustedes creen que van a resolver el problema, les vaya bien, y que yo y los otros legisladores estemos equivocados.

Pero, muchachos, si todo sigue igual –ojalá que no– abramos una mesa de diálogo profundo, hablemos de la ruta por la que ingresa la droga a nuestra Provincia, absolutamente abierta; hablemos de los 18 o 20 tipos, cómo sacarlos en 48 horas del medio, porque decimos que no hay diálogo entre la Justicia Provincial y la Federal no alcanza. Hoy hemos recibido el aliento de que hay una especie de diálogo en marcha; para esas cosas llámennos. Cuando quieran hablar de la reestructuración de la Policía, les volveremos a recordar el consejo acerca de emplear a los mejores comisarios generales.

Y vean qué van a hacer con Paredes, porque Paredes a ustedes los “estrelló” por los cuatro costados. ¿Qué poder tiene Paredes sobre Unión por Córdoba? En verdad, no lo sé. Ya lo he dicho varias veces acá: ¿qué poder tiene este señor?, ¿qué les conoce como para que vuelvan a confiarle el diseño de las políticas de seguridad? ¿Y saben por qué les digo que está él? Porque, ¡oh! sorpresa, los dos jefes de las Fuerzas de Seguridad principales son hombres de él: Vélez y Salcedo. Y, ¡oh! sorpresa, cada vez que había que designar en la Policía Antidrogas a la persona que debía manejar el control de la ruta de la Provincia, las dos veces que nos pudimos enterar que eran dos hombres de Paredes, pero no dos hombres de Paredes, el chofer y el secretario personal, manejando lo más poderoso que puede exhibir, que es el control de las rutas del narcotráfico. Y ustedes insisten en eso. Entonces, evidentemente, a eso hay que cambiarlo.

Señor presidente: esperamos que algún día nos convoquen, seriamente, a dar nuestras ideas. Fíjese, cambió el Gobierno y le llevamos el plan de los consejos locales como un proyecto de vida para los chicos, me lo recibió Massei y Diego Hack y me dijeron:

quédese tranquilo, doctor, que se lo vamos a dar a nuestros equipos. Como a los dos meses nos invitan a un Consejo de Políticas de Seguridad, fuimos ahí, y cuando empiezo a hablar de esto se me acerca Stampalija –hombre que tienen para el diseño en seguridad– y me dice: doctor, ¡qué interesante!, ¿me lo puede mandar? Quiere decir que en esa audiencia que me dio Massei, en la que yo le fui a llevar las cosas, es como que ni me hubieran escuchado. Pero seguiremos insistiendo en proponerles programas de inclusión que les van a ayudar mucho en el tema de seguridad.

Nada más.

Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el legislador Fresneda.

Sr. Fresneda.- Señor presidente: trataré de ser sintético porque estamos en la segunda vuelta de este debate.

En función de lo expuesto por la miembro informante del bloque oficialista –que presenta el proyecto en tratamiento–, creo que hay errores no sólo conceptuales sino también de técnica legislativa. Lo más llamativo es que, cuando vino el ministro junto a expertos, esto se presentaba como la posibilidad de que los cordobeses tengamos un gran plan integral de seguridad pública y ciudadana para Córdoba, incorporando un nuevo concepto y asociando la seguridad ciudadana sólo a lo preventivo, y la seguridad pública, a lo represivo. El resabio de la vieja doctrina de seguridad nacional –como lo expresó la legisladora Vilma Chiappello– no convive con la construcción de un doble estándar que pueda dar solución a los problemas de seguridad que hoy existen.

Nos preguntamos sobre el porqué del apuro que esta ley salga con preferencia sí o sí en esta sesión, cuando se trata realmente de un entramado complejo del delito. Además, en comisión nos preguntamos cuáles son los criterios para definir en qué lugares van a estar los Consejos Barriales, cuál son las zonas rojas, pero no pudimos saberlo porque no tenían esos datos.

El proyecto de referencia contempla la creación de un observatorio, como si la propia Policía de la Provincia no tuviera datos estadísticos. A veces, pareciera ser que tenemos que guiarnos por La Voz del Interior o algún otro medio para saber cuál es el cuadro de situación y cuál es el mapa del delito, superpuesto con el mapa de la pobreza porque la legisladora, evidentemente, se olvidó de asistir a las clases de Criminología, en que nos enseñaban que existen delitos de cuello blanco, cuyo victimario no está ubicado, precisamente, en barrios populares.

Nos preguntamos también sobre el doble estándar; para construir una policía de proximidad se debe cumplir con requisitos específicos que esta ley no contiene y con un concepto de seguridad que esta ley no define; de hecho, por medio del artículo 2º se intenta avanzar sobre una definición que apunta a conceptualizar por vía de la función y no por la definición en sí sobre qué es la policía de proximidad y la seguridad ciudadana, así como por el concepto –que ya no se usa– de seguridad humana.

Es verdad que son conceptos propios de países como Colombia, que tiene un problema de seguridad distinto –como el de México–, donde se avanza sobre concepciones más progresistas; pero el progresismo, legisladora Trigo, no convive con la represión. En un episodio concreto, ¿se imaginan lo que puede llegar a suceder con este doble estándar?, ¿cuál de las dos policías puede llegar a intervenir, cuando tengamos una policía educada con la vieja doctrina y otra policía educada con la otra, pese a que tienen un mismo punto de conducción, una misma autoridad, que es el jefe de Policía, que responde –lo cual está bien– a la cadena civil?

Voy a incorporar por Secretaría un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales, que ha brindado opiniones al respecto y que, justamente, pone en tensión este concepto de seguridad. Esta ley, en su artículo 1º, establece que “va a regular las relaciones”, entre ellas las del Plan Integral; o sea que el Plan Integral es esta ley de 13 o 14 artículos. ¿Este es el Plan Integral que anunciaron y que modifica la Ley 9235?

Cuando vino el ministro y plantearon esta posibilidad uno lo vio con expectativas porque el proyecto parecía interesante. Pero, al final del camino, no resulta un proceso interesante y mucho menos cuando la oposición y los que tenemos que dar una opinión para votar una ley marco como esta –porque eso es, en definitiva, ya que muchos de los puntos que se establecen deberán ser reglamentados– tendríamos que tener la información sobre qué tipología del delito existe en Córdoba, cuál es el delito que hay que prevenir, teniendo en cuenta también que los estudios han informado que la exclusión social genera una tipología de delito. Pero la experiencia nos dice que el ascenso no disminuyó la tipología del delito de homicidio y mucho menos de femicidios.

Entonces, creo que el objetivo y el propósito de esta ley, que dice que, tomando elementos de la sociedad civil con niveles de participación puede llegar a prevenir el delito, lo

veremos en el futuro, porque la herramienta que hoy se está votando, por un lado, consolida un sistema con matriz represiva de la policía en cuanto al rol, y el otro objetivo no alcanza para decir que esto va a ser una política que no va a reprimir la protesta social, que es otro de los puntos fundamentales que cualquier política de seguridad de proximidad debería tener: protocolo de accionar de la Policía ante, por ejemplo, manifestaciones sociales.

Para que exista un plan integral hay que modificar también la Ley 9728, por lo tanto, no podemos llamar a esto “plan integral”, porque si realmente pensamos un plan integral de modificación de la Ley de Seguridad y lo vamos a reducir a 14 artículos, creo que se está haciendo una simplificación. Sí me parece que intenta mostrar algo novedoso, pero eso novedoso, que es patrimonio de algunas doctrinas progresistas, no va a resultar cuando la Policía en su matriz, en su conducción, sigue siendo la que comulga con la seguridad nacional.

El concepto de seguridad para estas doctrinas excluye, por ejemplo, al servicio penitenciario y a la ejecución penal. Sin embargo, en el artículo 42 vuelven a darle facultades de autocontrol a la Fuerza. Intentan abrir, por un lado, pero recuperan la conducción por el otro.

Me da la impresión de que esta es una ley que da un mensaje para adentro de la Fuerza después de lo sucedido con el levantamiento policial en Córdoba. Y viene de la mano de lo que sucedió cuando preguntamos por qué habían pasado a retiro a tantos miembros de la Fuerza y pasa lo que se decía recién, que jóvenes –y no por ello pueden llegar a ser inexpertos- asumen una alta responsabilidad en un momento difícil y complejo.

Con esto concluyo porque, como dijo la legisladora Vilma Chiappello, creo que nos perdimos la oportunidad de tener una ley que le dé a la Policía un rol inclusivo, que significa que cuando detecte vulnerabilidad, contenga, acompañe y lleve adelante un proceso de inclusión social y que no exista el otro estándar de una Policía para la clase alta y otra para la clase baja.

En los conceptos más avanzados de seguridad de los países civilizados que quieren abordar esta temática, esta convivencia ha fracasado. No hay ninguna modificación en el estado de derecho moderno que pueda transformar un concepto de seguridad de un día para el otro; ninguna política de seguridad, al menos de conducciones responsables, puede hacerse de esta forma, se necesitan planes pilotos, ver la experiencia y la reacción de la sociedad.

En ese sentido, existían planes pilotos como la Policía Barrial y los Consejos Barriales, pero no tuvimos ningún resultado de cuáles fueron, después de un año y pico, sus resultados.

No queda otra que apostar, aunque uno se equivoque porque, en definitiva, la sociedad cordobesa quiere que se disminuyan los índices del delito, pero no solamente algún índice, porque los sectores populares padecen también de forma espantosa la inseguridad.

Si vamos a dar un mensaje a la sociedad, este proyecto de ley no puede, de ninguna manera, dejar tranquilos a los que más preocupados están por la inseguridad.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el legislador Quinteros.

Sr. Quinteros.- Señor presidente: después de estas horas de debate empiezo a intuir que no están encontrando el consenso necesario con el tratamiento de esta ley, y semejante capacidad de investigación casi me pondría en condiciones de ser jefe de Policía del Gobierno de Unión por Córdoba.

Voy a ser absolutamente sintético. Escuchamos hablar grandilocuentemente del cambio de paradigma en materia de seguridad; en tal sentido, después de 6471 días, 924,43 semanas, 212,46 meses o 17,72 años, lo siguen buscando porque no encuentran soluciones, la solución que todos los cordobeses estamos esperando en materia de seguridad; porque después de 17 años de gobierno, este momento es el de mayor inseguridad que vive la Provincia de Córdoba.

Simplemente, y para terminar, les quiero decir lo siguiente: piensen que a esta ley la están votando en soledad.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el legislador Julián López.

Sr. López, J.- Señor presidente: adhiriendo a todo lo que ya adelantó la miembro informante de nuestro bloque, quiero ratificar todas y cada una de sus palabras y expresiones.

Para hablar sobre la construcción de este sistema de seguridad pública y ciudadana que refiere a un conjunto de acciones democráticas en beneficio de la seguridad de los

habitantes y de sus bienes, armonizando el ejercicio de los derechos humanos con distintas políticas en materia de seguridad, buscando avanzar en un cambio de paradigma que vaya en el camino de la prevención, que permita tener fuerzas policiales capacitadas, que permita tener una fuerza no reactiva sino preventiva, proactiva, que acompañe a los vecinos, que tenga un conocimiento acabado del territorio donde desempeña sus funciones y que fundamentalmente esté para servir y ayudar a los ciudadanos.

Nos hacemos cargo, señor presidente, de que es el Estado el que tiene que resolver el problema de la inseguridad; es el máximo responsable de garantizar esa seguridad en la persona y en los bienes de cada ciudadano de la Provincia. Pero es la manera en que el Estado aplica esas herramientas en materia de seguridad la que va a determinar su eficacia.

Este Plan Integral que se ha propuesto e hizo efectivo en el anuncio de la apertura de sesiones ordinarias el Gobernador Schiaretti y que presentó el Ministro Massei en esta Legislatura el 9 de febrero pasado, tiene un fundamento principal, que no es un invento de los cordobeses porque esto se ha aplicado en otros Estados provinciales o nacionales, fundamentalmente en Latinoamérica, y ha tenido mucho éxito. Nosotros tenemos que lograr que la lucha contra la inseguridad no sea solamente un problema del gobierno: tenemos que involucrar a la sociedad en su conjunto.

Discutimos muchas veces en comisión con algunos representantes de otras fuerzas políticas que plantean, fundamentalmente, que cuando hay que hablar sobre el control interno de la Policía y la corrección de algunos miembros que se desvían de la función que deberían cumplir, tiene que existir la participación ciudadana. Esto es muy amplio: estamos planteando que se involucre a la sociedad en la planificación de políticas públicas en materia de seguridad, trabajando con el Estado en estos temas a través de los Consejos Barriales y del Consejo Provincial de Seguridad Ciudadana.

Esta iniciativa es una ley que de ninguna manera va a terminar con la inseguridad en la Provincia de Córdoba, pero es una herramienta más, necesaria para sumar a otras acciones que se vienen desarrollando, que nosotros apostamos a que van a servir, y mucho, para avanzar en esta materia.

Este abordaje integral exige que se trabaje en la inclusión social con un Estado que esté presente en los barrios más humildes; que trabaje de la mano de los intendentes; que trabaje de la mano de las fuerzas que representan a los vecinos a través de distintas organizaciones y que tenga políticas claras en la lucha contra la droga. Esta fue una de las cinco provincias que asumieron el desafío, en el marco de la ley nacional, de involucrarse en la lucha contra el narcotráfico a través de la ley que todos conocemos, de narcomenudeo.

A este abordaje integral lo vemos también plasmado en un abordaje interdisciplinario e interministerial, que va a permitir que referentes, ministros o delegados por ellos en distintas áreas trabajen de manera coordinada en distintos aspectos, pero que tienen mucho que ver con la seguridad, como es la salud, la educación, el deporte, la cultura, la justicia, que sirven a la implementación de un nuevo Plan de Seguridad.

Se mencionó que existen malos policías y que la Policía es corrupta. Lamentablemente, existen malos policías. Nos duele encontrarnos, a través de los diarios, la televisión o la radio, con noticias que dan a conocer estas conductas antiéticas que convierten a esos policías en verdaderos delincuentes.

Este Gobierno no lo oculta, nos duele, pero no lo ocultamos. Es la propia Policía la que pone en conocimiento de los medios de prensa esas acciones de desviación de esas conductas que deben tener, como funcionarios públicos, los policías de Córdoba. El Gobierno no quiere que se oculte este tipo de acciones y dar a conocer todas y cada una de esas noticias es la mejor manera de ayudar a reconstruir la credibilidad que la Policía pierde cuando se suscitan estas situaciones.

Pero también tenemos que dejar en claro que son pocos los policías que se equivocan; son pocos los policías que se desvían entre más de 20 mil efectivos que tiene la fuerza policial provincial.

También se dijo que no hay estadísticas ni índices del delito en nuestra Provincia. El Ministro Massei dijo claramente, cuando presentó esta ley, que se está trabajando, en conjunto con la Fiscalía General a través de la Policía Judicial; ustedes saben que es la responsable de tomar las denuncias en la Ciudad de Córdoba y en algunas ciudades importantes según su cantidad de habitantes del interior provincial y del resto es la Policía provincial, como lo viene haciendo, y se trabaja de manera coordinada con el Tribunal Superior de Justicia para unificar definitivamente todas y cada una de las denuncias para que la carga de datos se pueda hacer de manera simultánea entre la Policía judicial y la provincial.

A su vez, se está trabajando en un protocolo para que cada uno de estos datos vaya al Ministerio de Seguridad del Gobierno nacional y sepan, desde la Nación, cómo se mueve el delito.

Una legisladora decía que recordaba, de su época de facultad, cuáles son las competencias que tienen las provincias y es cierto, lo dijo muy bien; ahora, la Nación no puede escapar a la problemática de inseguridad; rija en la provincia que rija también tiene una responsabilidad, porque si no entendemos que el compromiso contra la inseguridad se debe dar en todos los ámbitos -estatales, municipales, provinciales y nacional-, va a ser muy difícil que podamos erradicarla. Seguramente, se irán los delincuentes de una provincia a otra, o habrá inequidad entre las provincias que pueden por sí solas hacer frente a este tipo de situaciones y las que necesiten de la ayuda del Estado nacional, pero que no se las querrían dar porque no es una competencia de ellos.

La Dirección de Control Policial va a trabajar de manera complementaria y coordinada con el Tribunal de Conducta Policial. Este Tribunal no va a desaparecer, algunos se oponen a que sea un órgano de control interno, como existen en todas las Policías del mundo, y dicen que la Policía es corrupta, pero Asuntos Internos está para investigar las desviaciones de los policías, los excesos, o los que se atribuyen competencias que no tienen. Estos hechos delictivos son investigados por la propia Policía a través de esta Dirección, pero también vamos a contar con un Tribunal de Conducta Policial en el cual están representados los tres Poderes del Estado; esto es un gran avance para evitar todo tipo de conductas ilegales dentro de la fuerza policial.

Nosotros estamos convencidos de que este plan que se propuso representa un cambio de paradigma que nos va a permitir mejorar sustancialmente la lucha contra la inseguridad, que no es patrimonio exclusivo de nuestra Provincia, no somos una isla, no somos quienes hicimos carrera política diciendo que Córdoba era una isla. La inseguridad afecta a todo el país y es por eso que el abordaje tiene que ser integral y solidario.

La misión y el objetivo del Plan de Seguridad son superadores, tiene dos pilares fundamentales: la seguridad ciudadana y la gestión policial, trabajando primero lo preventivo, y cuando falla tiene que estar presente el accionar del Estado a través de la Policía.

Queremos una política de Estado que trascienda los diferentes gobiernos; estamos convencidos de que constituye una mejora sustancial al sistema de seguridad vigente y que se agregan conceptos y estrategias modernas y dinámicas con un profundo contenido humanista y que ayudan a fortalecer la presencia policial.

Para nosotros, señor presidente, la seguridad es un proceso de construcción permanente, que va evolucionando como evoluciona la sociedad. La seguridad personal y social exigen trabajos superadores y también dejar de lado mezquindades políticas; también exige no utilizarlo, pero esto es muy difícil en años electorales. Lo más fácil para la oposición es no involucrarse en la elaboración de un nuevo proyecto de ley si es un problema del Gobierno, es un desafío de las sociedades modernas y también de los distintos niveles del Estado -municipal, provincial y nacional.

La inseguridad en sus orígenes es eminentemente multicausal, y nosotros nunca vamos a negar nuestra concepción justicialista y cristiana y entendemos, con esta concepción, que ninguna persona nace delincuente y, como lo dice permanentemente nuestro Gobernador Schiaretti, la delincuencia es hija de la exclusión social. Por eso, cuando escuchábamos algunas críticas -que estamos dispuestos a escucharlas, porque nosotros estamos reconociendo la existencia de un problema en la sociedad- vemos que también muchas veces suenan a excusas para no involucrarse con la solución, amparados en mezquindades políticas, no con Unión por Córdoba ni con el Gobierno provincial, sino con muchos cordobeses que confiaron en otras fuerzas políticas y que también necesitan una solución a este problema.

Y si hablamos de pobreza y exclusión, me hubiera gustado escuchar autocrítica de algunos legisladores que integran una fuerza nacional que no está haciendo nada para evitarla, al contrario.

Mire, señor presidente, bajo el Gobierno nacional actual aumentó la pobreza en un millón y medio de personas -no lo digo yo, le voy a pagar derecho de autor al legislador Nicolás, como dice él-, lo dice el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, más de 600.000 indigentes. La indigencia pasó al 6,9 de la población, 2,7 millones de personas que viven con poco más de 2.000 pesos por mes; 32,9 de pobreza, 13 millones de personas que ganan por debajo de la canasta básica, ¿es todo responsabilidad de la actual conducción? No, hay mucha responsabilidad de los gobiernos anteriores y hay mucha responsabilidad de todos los partidos políticos, esto tiene que ser parte de una gran autocrítica. Pero no han hecho nada para mejorar, al contrario, lo han aumentado; se siguen llamando "Cambiemos" porque, evidentemente, no han encontrado el camino correcto.

Un verdadero compromiso con la sociedad es cumplir lo que se prometió: pobreza cero debería ser pobreza cero; hambre cero debería ser hambre cero, no hay que empeorar las cosas.

Nuestro Gobierno de Córdoba ha hecho este año -o va a hacer en este año que transcurrimos- la mayor inversión social para combatir la exclusión y para dar respuesta a todas y cada una de esas familias que no pueden por sí mismas solucionar los problemas; más de 6.200 millones de pesos de inversión; también más de 36.000 millones de pesos de inversión en obra pública que van a ayudar a generar, se estima, alrededor de 40.000 puestos de empleo en la Provincia.

Es cierto, hablaban del 40 por ciento de pobreza y de indigencia en Córdoba; en Santiago del Estero, 44 por ciento; en Concordia, 43,6 por ciento; en San Juan, 43,5 por ciento; en Córdoba el 40,5 -desmenuzado en un 10,8 de indigencia y en un 29,7 de pobreza. Córdoba es la Provincia con menor empleo público en proporción a la cantidad de habitantes.

Obviamente, en una Provincia altamente industrializada sufrimos las consecuencias de malas políticas nacionales, que llevan a gran cantidad de suspensiones en muchas de estas empresas, a algunas de las cuales tiene que salir la Provincia a dar respuesta y -aunque no venga al caso porque no tiene que ver con Córdoba ni con el Gran Córdoba- veíamos hoy cómo el Gobierno provincial, a través de una fuerte decisión política del Gobernador Schiaretti, otorgará un subsidio para los trabajadores que sean despedidos de la empresa SanCor.

No hay que medir como un riesgo empresarial asumido las malas consecuencias de las políticas públicas, no se maneja así el Estado, porque malas decisiones dejan en la calle a millones de personas: padres que no tienen para pagar el transporte de sus hijos a la escuela, ni hablar si los mandaban a una escuelita que consideraban mejor por el tipo de educación que querían para sus hijos o alguna escuela pública que quedaba lejos de su casa y había que pagar un hogar, si tenían una obra social privada o si pagaban un alquiler. Las familias con una suspensión se quedan sin nada de un día para el otro; los empresarios tienen espalda, suspenden gente y sobreviven, los trabajadores no.

Para nosotros, también sería fácil gritar "háganse cargo", como lo dijo una legisladora acá, y como lo dijo el jefe de gabinete hace pocos días; háganse cargo porque para eso nos vota la sociedad, no hay que jugar a la prueba y el error y dejar miles de excluidos.

Nosotros no lo hacemos, no nos pasamos la vida echando culpas a lo que hacen los otros; elegimos aportar, construir y acompañar con nuestros diputados y senadores nacionales muchos proyectos que el departamento ejecutivo nacional plantea como imprescindibles para el desarrollo de sus políticas, aunque muchas veces no los compartimos, porque eso es lo que espera la sociedad.

La sociedad votó al Presidente Macri y su partido político, y no vamos a negar algunas herramientas que necesiten para gobernar; vamos a marcar diferencias cuando lo consideremos necesario, pero nunca les vamos a negar las herramientas para que lleven adelante su gobierno, porque tampoco pertenecemos a aquellos que piensan que mientras peor mejor, porque lo ha dicho muchísimas veces nuestro Gobernador: "cuanto peor, mejor es cada vez más malo para la gente pobre y humilde de nuestra Provincia y de nuestra República Argentina".

Quieren comparar la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con Córdoba, pero les voy a dar un dato: la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es prácticamente una ciudad de Suiza, tiene el mayor PBI de Argentina. Tengo un hijo de cuatro años al que me animo a decirle que a los dieciséis podría ser intendente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es facilísimo gobernar la ciudad con mayor PBI; lo difícil es gobernar donde hay exclusión, donde no llegó el progreso, falta el desarrollo y los pobres superan a las personas más ricas -que no es el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Es imposible comparar este tipo de realidad y desconocer cómo van de la mano la exclusión y la inseguridad, y no hay muchos conceptos de inseguridad. Tenemos una visión social sobre este tema, hay otros que tienen la visión de "palo y a la bolsa", modelos represivos, incluso con quienes protestan legítimamente.

Acá no hay tantos modelos: hay una mirada social o una mirada fría sobre estadísticas, sin importar la gente que lo compone.

Hablan mucho de los diecisiete años que gobernamos la Provincia. Les quiero recordar una fuerza política que hace 34 que gobierna la ciudad de Córdoba y no lograron tapar los baches de las calles, no lograron que lo que tiene que circular por las cloacas deje de hacerlo por las veredas, no lograron tener todos los espacios verdes sin yuyos, no lograron tener buena iluminación en todas las calles y estas cosas también ayudan a la inclusión y a la seguridad. Por eso, trabajamos con nuestra política provincial junto a los intendentes, pero hace 34 años que gobierna la misma fuerza política o sus socios políticos.

Voy a cerrar con una pequeña anécdota personal. Empecé a militar desde muy joven, no vengo de una familia política, tuve la suerte, en 2001, de conocer a una persona que por entonces era Gobernador de Córdoba, y me contó una anécdota. Él me decía que había perdido tres elecciones y que cada elección que perdía se enojaba con la gente, hasta que un día se dio cuenta de que algo estaba haciendo mal para que no lo votaran más.

Creo que esas fuerzas políticas que lo único que hacen es endilgar la cantidad de años que gobernamos la Provincia de Córdoba tienen que presentar proyectos superadores. Sólo así la sociedad podrá volver a confiar en ellos y darles la posibilidad de gobernar nuevamente la Provincia.

Mientras tanto, ojalá la gente siga apostando por nosotros, pero ojalá también nosotros estemos a la altura de las circunstancias para responder ante cada inquietud y cada necesidad que tenga cada cordobés que vive en esta Provincia.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

Olvidé mocionar el cierre del debate y el pase a votación.

Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la moción de cierre de debate formulada por el legislador Julián López.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.

Sr. Presidente (Passerini).- Ahora sí, se pone en consideración en general el proyecto 20934/E/17, tal cual fuera despachado por las comisiones respectivas.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobado.

A los efectos de la votación en particular, se hará por artículos.

-Se vota y aprueban los artículos 1º al 22.

Sr. Presidente (Passerini).- El artículo 23 es de forma.

Queda aprobado el proyecto en general y en particular.

Se comunicará al Poder Ejecutivo. (Aplausos).

-INCORPORACIÓN SOLICITADA POR LA LEG. TRIGO-

PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y PREVENCION DEL DELITO

El Plan Integral de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito CÓRDOBA SE ENCUENTRA, es una iniciativa del Gobierno de la provincia de Córdoba a través del Ministerio de Gobierno con el objetivo de abordar integralmente la seguridad ciudadana y la prevención del delito en nuestra provincia.

El mismo se basa en las siguientes premisas:

- 1- Muchos hechos de inseguridad son derivados de la exclusión social en la que se encuentran uno de cada tres argentinos, circunstancia de la que nuestra provincia no se encuentra exenta. Por ende el recurso policial resulta insuficiente para paliar las múltiples situaciones de inseguridad que padecen los ciudadanos de Córdoba.
- 2- La participación directa de los vecinos agrupados en instituciones o en calidad de simples vecinos proactivos es una instancia insustituible para que el Estado Provincial sepa dónde, cómo y cuándo invertir sus recursos con eficiencia a los fines de morigerar o revertir las situaciones de riesgo y vulnerabilidad de las diferentes comunidades, priorizando a las de mayor vulnerabilidad.
- 3- Es necesario implementar esta iniciativa con solidez institucional que trascienda las diferentes gestiones como Política de Estado volviéndola sólidamente operativa y transparente en su gestión y administración.

En el marco de este plan se crean:

-La Secretaría de Políticas Comunitarias. Unidad Ejecutora del Programa de Seguridad Ciudadana. Encabezada por referentes del sector social de la sociedad, Secretario Oscar Arias, y del ámbito académico de la criminología Dr. en Criminología Claudio Stampalija y en Urbanismos Social, Arquitecto Gustavo Restrepo, mentor del movimiento urbanista para la paz de la Ciudad de Medellín Colombia.

Además:

-La Comisión Interministerial de Seguridad Ciudadana.

- El Consejo Provincial de Seguridad Ciudadana

- El Equipo Interministerial de Seguridad Ciudadana

- Los Consejos Barriales de Prevención y Convivencia. Estos espacios son coordinados por un “promotor barrial”.

-La Policía Barrial

- El Observatorio de Estudios sobre Convivencia y Seguridad Ciudadana

1) CONSEJOS BARRIALES

Actualmente se encuentran en funcionamiento 20 Concejos Barriales.

Para 2017 se prevé la inauguración de 24 Concejos Barriales totalizando la cantidad de 44 Concejos cubriendo el 50 % de las zonas rojas de la Ciudad de Córdoba.

Los Consejos Barriales de Prevención y Convivencia son un espacio de participación de todas las organizaciones públicas (provinciales y municipales), de organizaciones sociales y de vecinos proactivos, constituidos como espacios de encuentro, debate y consenso para resolución de prioridades en corto, mediano y largo plazo en cada territorio.

Son promovidos y articulados por Promotores Barriales dependientes de la Secretaría de Políticas Comunitarias que ofician de “facilitadores” en el proceso de constitución y en el proceso de gestión ante las diferentes áreas de gobiernos (articuladas en el Equipo Interministerial en el caso de la jurisdicción provincial) de las prioridades que los vecinos votan democráticamente.

Estos espacios de participación ciudadana persiguen:

-Impulsar valores y prácticas cívicas y democráticas

- Fomentar el desarrollo social

- Tener un diagnóstico preciso sobre la inseguridad, identificando prioridades que fije la comunidad.

- Mejorar el vínculo entre la ciudadanía y la policía.

Para un abordaje más focalizado y eficaz de la seguridad se dividió a la Ciudad de Córdoba en 119 cuadrantes, de acuerdo a los criterios de vulnerabilidad y extensión territorial.

El cuadrante es un espacio geográfico que recibe las intervenciones del equipo interministerial, los equipos técnicos y la policía barrial.

En cada cuadrante funcionará un Consejo Barrial de Prevención y Convivencia. Actualmente veinte cuadrantes están en pleno funcionamiento.

En cada uno de estos cuadrantes a través de los Consejos Barriales se han desarrollado acciones de:

- Recuperación de espacios públicos. En todos los cuadrantes se implementaron Escuelitas de Deporte Social vinculadas a la Agencia Córdoba Deporte, en muchos casos recuperando basurales y baldíos.

Actualmente se encuentra en Proceso de Expropiación terrenos en Barrio Muller que serán destinados a consolidar un espacio social y deportivo para la obra del Padre Mariano Oberlin.

- Actividades recreativas, culturales y deportivas. Ejemplo, Programa Derecho al Verano. Desde la idea de reconvertir durante el receso escolar a las Escuelas Públicas en Centros Recreativos Comunitarios promoviendo, por primera vez en muchos casos, el acceso de 3000 niños de los cuadrantes más vulnerables a Piletas y Centros Deportivos públicos, a obras de teatro y/o Cine Móvil. Se mantuvo PAICOR para todos los participantes.

- Programas de prevención de adicciones. En todos los cuadrantes se brindan Talleres de Prevención de Adicciones para Jóvenes. Se brindan Charlas Informativas para Padres. Actúan Equipos de Primer Contacto que toman demandas puntuales y derivan a Centro Asistencial Córdoba dependiente de la Secretaría de Prevención y Asistencia de las Adicciones.

- Capacitación laboral y programas de empleo. En el transcurso del año 2016 se implementaron en 15 cuadrantes 400 cursos de Capacitación en Oficios para 10000 jóvenes vulnerables utilizando como sede de estos a las escuelas del sector y muy especialmente a la red de organizaciones sociales existentes a los fines de capitalizar su cercanía y credibilidad ante jóvenes que quedaron fuera del sistema de educación formal. 2000 jóvenes resultaron beneficiados con el Programa Primer Paso y Primer Paso Aprendiz, aplicando sus conocimientos adquiridos en diferentes empresas.

- Mejoras en obras de infraestructura, pavimentación, luminaria led, entubamiento de desagües y funcionamiento de plantas cloacales.

Solo a modo de ejemplo citar al Programa de Rutas Seguras a través del cual la comunidad de cada cuadrante, junto al Equipo de Urbanismo Social de la Secretaría de Políticas Comunitarias, establece los itinerarios más frecuentados por la comunidad, a los fines de garantizar alumbrado público y mantenimiento de calles.

Al día de la fecha se inauguraron Rutas Seguras en los cuadrantes:

5F B° Renacimiento

5D B° Maldonado

7E Marques Anexo

11 K Villa Urquiza

10 M Barrio Cabildo

10 D B° Congreso.

Actualmente el Gobierno Provincial se encuentra instrumentando el Proceso de Licitación de las primeras 500 cuadras de cordón cuneta y ripiado.

2) URBANISMO EN ACCIÓN:

Desde Urbanismo en acción se busca consolidar los entornos urbanos, estructurándolos a nivel físico, social y económico, desde la óptica de la seguridad ciudadana.

Su accionar se apoya en la participación ciudadana y la voluntad política.

El trabajo interdisciplinario en territorio permite realizar un diagnóstico de las carencias sociales y de infraestructura en los cuadrantes, a través de distintas metodologías participativas con la comunidad, creando cultura ciudadana y fortaleciendo la cohesión social para la construcción de una seguridad sostenible.

El modelo de trabajo conjuga la participación pública y privada de distintos actores sociales, con un plan de acción a corto, mediano y largo plazo.

Urbanismo en acción realiza acciones concretas en el territorio, promueve la educación del ciudadano, a través del trabajo en conjunto, la convivencia y la participación.

Los proyectos en desarrollo son: la creación de las rutas seguras, la reactivación de plazas y parques, los puntos verdes de reciclado de basura, los faros barriales de seguridad y los Demos, centros deportivos-culturales de legalidad.

Se suma a esto la recuperación y mejoramiento de Playones deportivos dentro del programa "Somos Equipo", dotándolos de una cubierta y módulos de equipamiento, a través de una arquitectura innovadora.

“Somos equipo” genera puntos de encuentro social en los barrios, a través de espacios comunes, abiertos y seguros, con el objetivo de regenerar el tejido social y la convivencia ciudadana con el acompañamiento de la policial barrial.

Urbanismo en acción a través del diagnóstico social y físico busca mejorar el entorno urbano optimizando los recursos de seguridad.

-INCORPORACIÓN SOLICITADA POR EL LEG. FRESNEDA-

Consideraciones del CELS al Proyecto de Ley de Seguridad de la Provincia de Córdoba

Marzo de 2017

El proyecto propone una serie de modificaciones a la Ley 9235 de Seguridad Pública de la Provincia de Córdoba promulgada en el año 2005.

La propuesta del Poder Ejecutivo dice enmarcarse en un modelo de “**seguridad ciudadana**”, agregando el concepto al art. 2 de la ley 9235 que contenía una definición de “seguridad pública”. El proyecto sostiene en los Fundamentos que la participación activa de la ciudadanía permite controlar a la policía y de ese modo dar mayor transparencia a su accionar. Asimismo, plantea que esta línea de intervención “asegura un continuo respeto por los derechos humanos, adoptando como postulado de actuación policial la equidad, la seguridad con eje en la participación del vecino y la inclusión”. Luego agrega que en la provincia “se vienen realizando esfuerzos y progresos significativos en este sentido” y que este enfoque se encuentra en vigencia en la actualidad en la Provincia de Córdoba. El proyecto sostiene que es preciso realizar una reforma legislativa para “compatibilizar y armonizar los nuevos organismos, sus denominaciones y funciones a la estructura normativa vigente”.

Centralmente el proyecto propone:

1. La creación del Plan Integral de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito
2. La creación del Consejo Provincial de Seguridad Ciudadana
3. La creación del Consejos Barriales, municipales y Departamentales de prevención y convivencia
4. La creación del Observatorio de Estudios para la Convivencia y Seguridad Ciudadana
5. El cambio de nombre de la Ley de Seguridad Pública y Ciudadana de la Provincia de Córdoba.
6. La creación de la Dirección General de Control de la Conducta Policial

Comentarios generales

Resulta destacable que el proyecto de ley consolida un cambio en la estructura del Poder Ejecutivo provincial. La ley 9235 ponía en cabeza de un Ministerio de Seguridad la coordinación de los órganos del sistema provincial de seguridad y la elaboración de un plan integral. Mediante la ley 10.185 del año 2014 se creó el Ministerio de Gobierno y Seguridad; hoy el proyecto de ley subsume en el Ministerio de Gobierno actualas competencias en materia de seguridad, lo cual consolida un retroceso en la organización institucional por la pérdida de especificidad, a contramano del resto de las experiencias a nivel nacional y local.

En el mismo sentido, sería aconsejable que una reforma legal avanzara sobre la separación de la seguridad como materia específica distinta de los asuntos penitenciarios y la ejecución de la pena. Sin embargo, el proyecto de ley insiste en incluir al servicio penitenciario provincial dentro del “Sistema Provincial de Seguridad Pública y Ciudadana”, y en fijar como objetivo del mismo la coordinación de los organismos de ejecución de la pena, “a los fines de lograr la reinserción social del condenado, en cumplimiento de la legislación vigente”. Asimismo, resulta notable que pese a las articulaciones necesarias que identifica el proyecto entre Provincia, municipios y comunas, el art. 2 sostiene que “la seguridad pública está a cargo *exclusivo* del Estado Provincial”, lo cual tampoco se encuentra en armonía con la ley nacional de seguridad interior 24.059 que reconoce en su art. 5 que “la seguridad interior [...] se encuentra reglada mediante leyes nacionales y provinciales referidas a la materia, con vigencia en cada jurisdicción y por la presente ley, que tendrá carácter de convenio, en cuanto a la acción coordinada interjurisdiccional con aquellas provincias que adhieran a la misma”.

Por otra parte, no queda claro por qué es necesario incluir en la ley la creación de un plan de seguridad, más aún si no pone plazos de vigencia como en este caso, en lugar de

hacerlo mediante decretos o disposiciones del Poder Ejecutivo, que permitan instrumentar políticas públicas con mayor agilidad para responder con mayor inmediatez a diagnósticos específicos que pueden ser coyunturales y cambiantes.

Más allá de este punto que puede ser discutido, el Plan enuncia un modelo con el que se podría acordar (abordaje integral, multiagencial, con una fuerte impronta preventiva, modelo policial de proximidad, con un enfoque de derechos humanos) pero no plantea precisiones ni innovaciones normativas que este modelo requeriría: intervenir sobre la formación, el control del uso de la fuerza, el escalafón único, las investigaciones internas (ver más adelante este punto).

También en la conceptualización de la seguridad el proyecto oscila entre distintos modelos: además de agregar el interés en la “seguridad ciudadana” como concepto distinto de la “seguridad pública” (art. 2), el art. 9 inc. j) refiere a la “seguridad humana”, que no es definida en el proyecto, y por otra parte indica que uno de los objetivos del “Sistema de Seguridad Pública y Ciudadana” será el de “mantener el orden y la tranquilidad pública en todo el territorio de la Provincia de Córdoba”, formulación que colisiona con el modelo de seguridad ciudadana que propone el resto del proyecto.

En cuanto a la relación entre el Plan Integral y los organismos que crea la ley, no forman parte del Plan los organismos como el Consejo Provincial, los Consejos Barriales, etc. Esto llama la atención teniendo en cuenta que adhieren a los lineamientos que establece el primero.

Sobre el Consejo Provincial, no se establecen los objetivos y características en el articulado, ni cómo estará integrado, si abre la posibilidad a la participación de la sociedad civil, por ejemplo. Del mismo modo, con relación al Observatorio, en el art 3 sólo se menciona que el mismo integrará el Sistema Provincial de Seguridad Pública y Ciudadana, pero no establece sus objetivos, metodología, integración, etc.

En el art 7° establece que la policía barrial integrará secciones dentro de las comisarías, y que actuará de acuerdo a protocolos de actuación, pero no establece sobre qué temas intervendrá ni a qué refieren los protocolos, ni quien los establecerá (la policía o Ministerio de Gobierno).

El artículo 8 establece la creación de los Consejos barriales, municipales, y departamentales de prevención y convivencia, estos tendrán una perspectiva multidisciplinaria de la seguridad y funcionarán como ámbitos de encuentro y labor comunitarios. No se propone una metodología concreta de trabajo para la participación ciudadana y entre sus objetivos generales no se formula el control de los servicios policiales a pesar de que los fundamentos del proyecto refieren a un modelo de mayor participación ciudadana.

Sobre la Dirección General de Control

Quizás el aspecto más preocupante del proyecto sea la propuesta de crear una Dirección General de Control de Conducta Policial (art. 10) bajo la dependencia del Jefe de Policía de la provincia, a cargo de un Oficial Superior designado por el Poder Ejecutivo. Dicha Dirección “tiene plena autonomía técnica de gestión en materia de prevención e investigación en el ámbito de su competencia”.

Sin embargo, tanto en los debates internacionales sobre mecanismos de control policial como en las experiencias nacionales quedó firmemente establecido que **no hay “seguridad ciudadana con orientación democrática” si no existe una instancia de control externa conducida por funcionarios sin estado policial**. La autonomía de las instancias de control en relación con los cuerpos policiales es condición necesaria (aunque no suficiente) para la efectiva conducción política de las fuerzas de seguridad. La Policía Bonaerense cuenta con una oficina de este tipo desde 2004, al igual que la Policía Metropolitana (2008). Incluso en 2016 fueron creadas oficinas de control externo para las fuerzas federales a nivel del Ministerio de Seguridad de la Nación y también para la nueva Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Desde ya que, en ausencia de la voluntad política para hacerlo, estas oficinas no garantizan un trabajo sistemático de control y sanción de casos y patrones de violencia y corrupción policial. Sin embargo, el concepto de una oficina de “asuntos internos” conducido y gestionado por la propia policía es algo retrógrado y superado.

Aspectos críticos que quedan por fuera del proyecto:

- 1- **Actuación en detenciones y manifestaciones públicas.** El proyecto no establece límites ni estándares de intervención en ese sentido.
- 2- **Formación.** En los fundamentos del proyecto se sostiene “hemos mejorado la curricula de la academia policial”, pero no se sostiene taxativamente en el articulado

del proyecto el plazo ni características que debería tener la formación policial. Asimismo, si se pretende crear una policía de proximidad, la misma debería estar formada bajo ese modelo de intervención. Del mismo modo, no se brindan precisiones sobre la profundización de la formación orientada a investigaciones científicas, cuya importancia es destacada en los fundamentos del proyecto de ley.

- 3- Temas que no se discuten, y que requerirían una reforma de la Ley 9728 de Personal Policial de la Provincia de Córdoba, pero que de todos modos son centrales para un modelo de seguridad democrática: el Estado policial, las tareas de policía adicional y la persistencia del modelo de doble escalafón (oficiales y suboficiales).

-9-

Sr. Presidente (Passerini).- Corresponde el tratamiento del punto 140 del Orden del Día, proyecto 20994/E/17, el que cuenta con despacho de comisión.

Tiene la palabra el legislador Marcos Farina.

Sr. Farina.- Gracias, señor presidente.

Tenemos en tratamiento el proyecto de ley 20994/E/17, por el que se propicia instituir una ayuda económica y becas de estudio destinada a hijos de personal policial y penitenciario que falleciere en actos de servicio.

El presente proyecto es muy simple, pero de suma importancia para las familias de quienes han dado su vida para proteger a los demás, como así también los bienes y derechos de la comunidad.

Básicamente, se brindará una ayuda económica a los hijos del personal policial y penitenciario que hubiera fallecido con motivo de actos de servicio.

La ayuda económica se otorgará a partir de los 18 años y hasta el día en que el beneficiario cumpla los 21 años de edad, siempre que no desempeñen actividades remuneradas.

Se establece también que la ayuda pueda hacerse extensiva a los nietos del personal policial y penitenciario que hubieran estado a cargo del fallecido.

El artículo 2º del proyecto determina el monto de la ayuda, que será igual al 85 por ciento móvil de la retribución correspondiente al cargo con que se diera de baja al causante.

El artículo 3º implementa un programa de becas de estudio, como un estímulo para los beneficiarios de la ayuda económica, que va desde la fecha del fallecimiento del progenitor hasta la finalización de sus estudios.

Como dije, se trata de un proyecto sencillo, a través del cual se ayuda al núcleo familiar de quienes han perdido la vida en defensa de las personas y de los bienes de nuestra comunidad. En definitiva, creemos que es un acto de justicia para las familias de quienes están a nuestro servicio arriesgando día a día su vida.

Por ello, solicito el acompañamiento de los distintos bloques en la aprobación del presente proyecto de ley, adelantando el voto positivo del bloque de Unión por Córdoba.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra la señora legisladora Serafín.

Sra. Serafín.- Señor presidente: adelanto el acompañamiento del interbloque Cambiemos a este proyecto por ser éste un acto concebido como de estricta justicia: el reconocimiento de este beneficio para los hijos de policías y penitenciaros que han perdido su vida en cumplimiento del deber, sin perjuicio de nuestras posiciones críticas respecto del anterior proyecto.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra la señora legisladora Liliana Montero.

Sra. Montero.- Señor presidente: en primer lugar, quiero adelantar el voto positivo del bloque Córdoba Podemos a este proyecto, entendiendo el espíritu en función de poder ayudar frente a una situación irreparable desde el punto de vista emocional, al cual el Estado no tiene alternativa que no sea el de coadyuvar desde una ayuda económica a los hijos de quienes han muerto prestando servicios en la Fuerza Policial o en el Servicio Penitenciario. En ese sentido, acompañamos porque compartimos el espíritu.

No obstante, también sentimos la obligación de hacer alguna referencia y dejarlo en la versión taquigráfica, porque lo han hecho quienes han participado en nombre de este bloque en las respectivas comisiones.

También creemos que, en este contexto de las responsabilidades del Estado, esta Legislatura debe discutir a quien debe asistir frente a situaciones que son altamente traumáticas y que generan absoluta desprotección a las víctimas indirectas de situaciones de violencia. Concretamente, existen desde hace muchos años -y tienen estado parlamentario- proyectos vinculados a la asistencia de los hijos de las víctimas de violencia de género. Muchas veces lo hemos hablado y he solicitado -y aprovecho también, señor presidente, para dejar sentado en la versión taquigráfica, la solicitud, porque ya lo hizo otra legisladora en otra sesión-, que se convoque a la Comisión de Equidad y Lucha contra la Violencia de Género que no ha sido convocada en lo que va del año -dos meses- por esta Legislatura.

Digo que nos parece bien este proyecto, pero en materia de hechos de violencia las víctimas de femicidio están aún más desprotegidas, muchísimo más desprotegidas, porque la mayoría de ellas no tiene ningún sustento -y no a partir de los 18 años sino desde mucho antes. A esto lo hemos discutido mucho en el contexto de las políticas que lleva adelante el Gobierno de la Provincia.

Voy a dar solamente dos datos. En la fundamentación que hizo el miembro informante, el oficialismo debería, por lo menos -y es algo a lo que nos deberíamos acostumbrar todos los legisladores-, tener datos objetivos para saber de qué estamos hablando, de qué números, cuáles son las estadísticas, cuál es la imputación presupuestaria que esto va a tener en la Provincia.

Intentamos rastrear datos, pero nadie nos dice cuántos policías han caído en actos de servicio en esta Provincia. Encontramos dos datos periodísticos; uno que refiere al año 2013, en el que se habla de dos caídos en servicio en la Provincia de Córdoba, y otro del año 2016, en el que se habla de cuatro caídos. Pongo entre comillas estos números porque no sé si son verdaderos, porque no hay datos oficiales. Tampoco sabemos cuál es el impacto de eso, porque no sabemos cuántos hijos tienen.

Tenemos que acostumbrarnos a hacer números y a tener datos presupuestarios, porque si no suenan a medidas eminentemente marketineras.

En este contexto, tenemos datos extraoficiales, producidos por la Casa del Encuentro y por La Voz del Interior, con relación a cuántos hijos de víctimas de violencia de género tenemos desde 2012 hasta 2016. Según estos datos son 164 víctimas.

Los proyectos que están en la Legislatura dicen que hay que asignarles un monto equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles, lo que representa aproximadamente 16 mil pesos por mes para cada uno de estas víctimas, de estos niños.

Sr. Presidente (Passerini).- Perdón, señora legisladora.

Nuevamente, solicito silencio para que nos podamos seguir escuchando.

Muchas gracias.

Continúe, legisladora.

Sra. Montero.- El total, para atender a esos 164 niños que quedaron sin sus madres y sin ninguna asistencia económica, es de 31.488.000 pesos al año. ¿Sabe qué significa eso? El 5 por ciento de lo que el Gobierno de Unión por Córdoba gastó en publicidad el año pasado.

Reitero dos cosas: primero, que sería bueno que cuando traigan estas leyes, que son producto de un hecho desgraciado que sufrió una policía que fue asesinada cuando volvía de trabajar -estaba trabajando en un horario inadecuado, también deberíamos discutir esto...

Compartimos el espíritu de este proyecto de ley, por eso lo acompañamos, pero les sugerimos que pongan en debate las otras situaciones que hacen a realidades de alta vulnerabilidad social.

No decimos que hoy no hay asistencia a estas víctimas indirectas, porque sí la hay, pero decimos que los ministros o funcionarios buenos pasan y las leyes quedan, por eso es bueno fijar determinadas cuestiones por ley.

En ese contexto, sin más que decir, reitero el voto afirmativo del bloque Córdoba Podemos.

Nada más.

Sr. Presidente (Passerini).- Gracias, señora legisladora.

Tiene la palabra el señor legislador Miguel Osvaldo Nicolás.

Sr. Nicolás.- Gracias, señor presidente.

Como adelantó la legisladora de nuestro bloque, nosotros vamos a acompañar este proyecto, porque reconocer a los buenos policías es valorar la institución.

Recién escuché al legislador López decir que en la época que gobernábamos, un Gobernador que había perdido muchas veces estaba enojado con el pueblo de Córdoba. A través suyo le digo, señor presidente, al legislador López -que, según veo, debe tener unos jóvenes treinta y pico de años- que cuando uno se pone a sacar las cuentas hacia atrás, puedo decir que creo que De la Sota perdió en el año 1987, por lo que en esa época el legislador López debe haber estado amamantándose del pecho de su madre como para que cuente esa anécdota. Por eso es que quiero aclarar que para mí fue una mentira lo que él dijo.

No le voy a permitir ninguna interrupción, así que no me la pida. (Risas). Es que me llegó el mensaje en esa terrible medida, señor presidente. Y cuando hablaba de la Policía, parecía que hablaba de otras provincias, olvidándose que las cúpulas policiales –en el resabido tema del narcotráfico- estuvieron sospechadas y presas en esta Provincia. Veo que el legislador me hace seña afirmativa que los metieron presos. Pero, ¿se olvidó que hay policías que están detenidos por delitos o que, entre bombos y platillos, anunciaron la creación del organismo para cuidarnos de la policía delincuente?

Señor presidente, ¿no ven, al recorrer las ciudades de la Provincia, que las casas están cada vez más enrejadas y que la inseguridad crece cada día más? Después de 17 años, siguen entre rejas los ciudadanos de Córdoba.

Respetamos la institución policial y su prestigio, y es por eso que acompañamos este proyecto, porque hay policías que son dignos de usar el uniforme. Pero hay que preguntarse también, señores legisladores, si no tienen la culpa de lo que les entregan.

Schiaretti dijo: “Hay que meter presos a los policías delincuentes disfrazados de policías”. Ahora ¿quién les entrega el disfraz, señor presidente? ¿El Gobierno de la Provincia de Córdoba se los entrega! Entonces, habrá que tomar las previsiones que sean necesarias para que los delincuentes no se disfracen de policías, ya que desprestigian la institución.

Después hablaron ligeramente de la ciudad, haciendo mención de que por los problemas de las luces LED o de los yuyos crecidos había inseguridad. El mismo legislador Presas pidió la intervención de la Gendarmería en el Departamento Colón ante el grado de inseguridad en el que estaban viviendo; el proyecto fue presentado, pero después lo mandaron a archivo, lo que le debe haber ocasionado un reto, al menos, al legislador Presas. Me pregunto si allí sus intendentes no cortan los yuyos.

Seguramente, a esta serie de anécdotas se las contó al abuelo del legislador López el ex Gobernador De la Sota, que se cansó de perder en la Provincia de Córdoba.

También sabemos que hay intendentes de su mismo signo político, señor presidente, y la inseguridad existe igual en los distintos departamentos de la Provincia; es un flagelo que hay que combatir. Habrá que ver cómo, pero lo que sí está muy claro es que De la Sota y Schiaretti son los responsables de que Córdoba tenga uno de los más altos índices en cuanto a la lucha contra el flagelo de la inseguridad. Lucha contra la inseguridad cuando habría que luchar por la seguridad, porque creo que esa es una materia pendiente que tiene en estos largos 17 años Unión por Córdoba.

Es cierto que por ahí hay errores en el gobierno nacional, pero lleva un año y medio de gestión, 15 meses; ustedes llevan más de 15 años y todavía no tienen nada que ver con el gobierno kirchnerista, que se hayan enojado no significa que no sean responsables de que hoy la Provincia de Córdoba tenga el mayor grado de inseguridad y pobreza. Acá parecería que no tienen nada que ver con el pasado, cuando tienen todo el presente por delante.

Aprovecho para ratificar el acompañamiento a este proyecto que sí reconoce a los buenos policías.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el legislador Salas.

Sr. Salas.- Señor presidente: este proyecto tiene un problema que, me parece, es serio, y a lo largo del debate me he dado cuenta de que es un poco más serio de lo que yo creía.

El problema es que deja afuera a muchos. No están, por ejemplo, aquellos que dan su vida como los bomberos voluntarios, los rescatistas que no pertenecen a la Fuerza Policial; no están –que en estos días se suspendió el juicio- los del caso de la ambulancia del 107. Entonces, es discriminatorio porque se valora la vida de unos y no la vida de otros.

La legisladora Montero agregó un dato interesante que es el problema de los hijos de las víctimas de femicidio que también debieran estar.

Esto también resalta un punto, en el que yo no había reparado, honestamente, que es el hecho de cómo se protege a los hijos en el Sistema Previsional de Córdoba cuando mueren los padres, si reciben pensión o no. Es un problema un poco más complejo que debiéramos debatir en otro terreno.

Por el carácter que tiene este proyecto, que desmerece el enorme problema al que hago referencia, y porque creo que el Estado tiene que responder frente a las delicadas situaciones que pueden tener los hijos de una víctima de una tragedia en todos los ámbitos - y no policías solamente- y el Estado tiene responsabilidad y tiene que intervenir, obviamente, no podemos acompañar este proyecto.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra la legisladora Vilches.

Sra. Vilches.- Señor presidente: adelanto el voto negativo del bloque del PTS-Frente de Izquierda.

En primer lugar, voy a señalar una cuestión porque se mencionó bastante a lo largo del debate del punto anterior, y es que la posición del PTS-Frente de Izquierda es que no son individuos aislados los malos policías, los policías corruptos, los policías delincuentes, los policías no capacitados, sino que es una institución que tiene un carácter represivo, es una institución que está dispuesta al servicio del Estado, que es parte del mismo como fuerza represiva, que detenta el monopolio del uso de esa fuerza y que es utilizada para la defensa de la propiedad privada y, especialmente, para la defensa de la gran propiedad privada, es decir, del gran capital. Como decían Marx y Engels, como sostuvo Lenin: “es un Estado que es una banda de hombres armados al servicio del capital”.

Lamentablemente, los hijos de quienes integran esa Fuerza no son responsables ni culpables de nada, como tampoco son responsables ni culpables por las familias que les tocaron en suerte, ni por las elecciones de esas familias.

En ese sentido, reconocemos que hay muchísimos sectores de la población que terminan opinando que la integración a la fuerza represiva, a la fuerza policial, es una salida laboral, pero nosotros insistimos en que frente a la miseria la respuesta debería ser otra.

Desde ese punto de vista, y entendiendo que acá no hay ninguna responsabilidad de esos hijos, pero lo que está en discusión es una cuestión más profunda, que tiene que ver con el carácter de la fuerza represiva y con el reconocimiento de estos servicios prestados en una labor represiva sobre el pueblo trabajador y pobre, es que no podemos acompañar este proyecto de ley.

Sr. Presidente (Passerini).- Si ningún legislador hace uso de la palabra, en consideración en general el proyecto 20994/E/17, tal como fuera despachado por las comisiones respectivas.

Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

—Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobado.

La votación en particular se hará por número de artículos.

—Se vota y aprueban los artículos 1º al 5º.

Sr. Presidente (Passerini).- Siendo el artículo 6º de forma, queda aprobado en general y en particular.

Se comunicará al Poder Ejecutivo.

Tiene la palabra la legisladora Caffaratti.

Sra. Caffaratti.- Señor presidente, perdón por lo extemporáneo. Solicito que se incorpore como coautor del proyecto 21468/L/17 a todo el bloque de la Unión Cívica Radical.

Sr. Presidente (Passerini).- Así se hará, señora legisladora.

-10-

Sr. Presidente (Passerini).- Antes de continuar con el tratamiento de los puntos del Orden del Día, quiero informar al Cuerpo que el legislador García Elorrio se ha retirado de la sesión y, antes de hacerlo, nos ha solicitado, por ser autor de tres proyectos que están en el Orden del Día, que corresponden a los puntos 84, 104 y 105 y que iban a ser debatidos, que se les dé una preferencia por 14 días.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.

-11-

Sr. Presidente (Passerini).- Continuamos con el tratamiento de los puntos del Orden del Día. Corresponde dar tratamiento al punto 68 del Orden del Día, proyecto 19206/L/16.

Por no contar con despacho, corresponde constituir la Cámara en estado de comisión. Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobado.

–CÁMARA EN COMISIÓN–

Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el legislador Salas.

Sr. Salas.- Señor presidente: estamos discutiendo un pedido de informes sobre los pedidos de ayuda que haya recibido el Ministerio de Desarrollo Social, y quiero señalar que el proyecto es del 4 de julio y hasta ahora no obtuvimos ninguna respuesta.

El problema es serio porque se refiere, justamente, al problema de la pobreza. Quiero recordar que, en el año 2014, el entonces Ministro de Desarrollo de la Provincia de Córdoba, Daniel Passerini, y el Subsecretario de la misma área de la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba, Walter Ferreyra, habían señalado que había un incremento del 40 por ciento de la demanda de asistencia social; al año siguiente otro 40 por ciento; aumentó la demanda. Entonces, queríamos saber cómo se reflejaba en los planes del Gobierno, qué datos tenía – las preguntas son sencillas–, en qué porcentaje aumentó, cuál es el monto de lo gastado. De algunas cosas no tengo la respuesta, pero el tema es grave.

El legislador López señaló hoy en este recinto –cuando intervino en el tratamiento de otro punto del Orden del Día– que el Gran Córdoba tiene uno de los índices de pobreza más altos –con un 40,5 por ciento, contra el promedio nacional del 30 por ciento–, con un nivel de indigentes muy fuerte, del 10,8 por ciento. Hace poco, se dijo que en Córdoba había 250.000 indigentes, y el ministro del área, Sergio Tocalli, dijo que posiblemente fueran más. Es decir, estamos ante un problema enormemente grave y no tenemos respuesta a nuestro pedido de informes. Dicen que este tema constituye la preocupación central del Gobierno, aunque, a juzgar por los datos que tengo, no es así.

La cuestión es aproximadamente así: hace poco, el Gobierno –sobre esto hubo una protesta que, al parecer, va a revertir la situación– decidió dejar de pasarles fondos a los merenderos, que son los lugares donde los chicos van a tomar la leche; ahora decidió darles nuevamente los fondos...

–Murmullos en el recinto.

Le pido, señor presidente, que solicite que hagan silencio.

Sr. Presidente (Passerini).- Por pedido del legislador Salas y de esta Presidencia, solicito a los señores legisladores y demás personas presentes en este recinto guarden un respetuoso silencio para que continuemos con el desarrollo de esta sesión.

Continúe con el uso de la palabra, legislador Salas.

Sr. Salas.- ¿Saben cuánto les da el Gobierno a los merenderos?; 2,12 pesos por día. Quiero contarles que el litro de la leche más barata cuesta 17,80 pesos; según las recomendaciones, los chicos que comen cuatro veces al día debieran recibir un cuarto litro de leche diario, y con 2,12 pesos que les dan alcanzaría, más o menos, para un octavo de litro de leche, es decir, 125 milímetros cúbicos, o quizás menos. Lógicamente, si les dan leche no les van a dar pan, dulce y ninguna otra cosa; puede ser que metan mate cocido y un poco de leche, pero no alcanza, no hay forma.

En otro orden, el Gobierno decidió cerrar una serie de comedores y dice que la razón es que da una tarjeta de 630 pesos, con lo cual se cubre. Quiero aclarar que la tarjeta está destinada a quienes no tiene trabajo en blanco, con lo cual no se puede comprobar que se la estén dando a alguien que tiene trabajo en negro. Si hacemos un cálculo en base a una

familia de cuatro personas, ¿cuánta plata significa por persona, por día, para darles de comer?, 4,40 pesos. ¿Acaso, se le puede dar de comer en una familia a alguien, todo el día, con esa suma?

Los comedores fueron cerrados, en parte, porque dicen que en las escuelas hay extensión de jornada para los chicos que asisten, pero esto no sucede en todas las escuelas. Voy a presentar un pedido de informes porque tengo varias denuncias sobre ciertas escuelas, incluidas algunas en las que, si bien les dan de comer a los chicos, estos disponen sólo de 15 minutos para hacerlo y, en consecuencia, surgen problemas de todo tipo.

El Gobierno cerró los CCDI –Centros de Cuidado y Desarrollo Infantil– porque abrió las Salas Cuna. ¿Cuánto le da por mes a cada Sala Cuna? Según el informe, 12.000 pesos; con eso tienen que pagarles a los docentes que van a cuidar las Salas, tienen que pagar la comida, etcétera. No alcanza, no va. Asimismo, el Gobierno levantó una serie de planes socioeducativos, de ayuda escolar.

Había una serie de financiamientos de planes culturales –esto lo hablé una vez con el ministro Massei–, entre los que estaba la creación de murgas. Tanto que hablan de droga, tanto que les echan la culpa a los pobres diciendo que son los que producen inseguridad, y que “hay que atender a los pobres” y dale con “atender a los pobres”, y resulta que las murgas no existen más. Las murgas son fabulosas –lo sabe cualquiera que tenga un trabajo territorial o barrial–, son un enorme factor de contención; ha separado a muchos chicos del consumo de drogas y de los “dealers”; les ha dado un ámbito y ha creado en los barrios una situación favorable para que puedan luchar, aunque sea mínimamente, contra ese flagelo. ¡Pero chau, quitaron eso! No sabemos a cuento de qué porque ya no es ni Sala Cuna, no es jornada extendida, ya no es nada; no pasa nada.

Entonces, lo que estamos viendo es que crece el número de indigentes, crece el número de pobres en el país y en Córdoba. Lo dijo el legislador López, lo que me exime de mayores comentarios. Lo grave es que el conglomerado del Gran Córdoba tiene el 40,5 por ciento de pobres, siendo el tercero del país.

Estamos ante una grave situación; hay aproximadamente 700 mil personas pobres en el Gran Córdoba, después hay que ver el interior. Aparte, tenemos un 30 por ciento que son indigentes. La situación es gravísima y no contestaron un pedido de informes. Como cada vez que presento un pedido de informes lo mandan a archivo, seguramente harán lo mismo con este proyecto. Está bien, manden a archivo mis pedidos de informes, pero a la pobreza no la podrán mandar a archivo porque sigue existiendo, como tampoco podrán mandar a archivo los problemas de desnutrición que con el tiempo serán más serios, como tampoco las cifras que muestran que en la ciudad de Córdoba, en el Gran Córdoba y en los conglomerados en general, hay un aumento de la indigencia y de la pobreza.

En consecuencia, lo que pediría es que si hay algún informe ahora lo podríamos ver y que este tema sea tratado.

Nada más.

Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra la legisladora Gazzoni.

Sra. Gazzoni.- Señor presidente: “No nos sorprenden los números de la pobreza”, señaló a la prensa el Ministro de Desarrollo Social, Sergio Tocalli. Seguramente, el funcionario no es el responsable de esta pobreza en el Gran Córdoba porque lo cierto es que lleva poco tiempo al frente de dicho Ministerio, casi desmantelado en relación a la Secretaría que comanda la esposa del Gobernador.

Pero, más allá del ministro, el peronismo bajo el rótulo de Unión por Córdoba gobierna ininterrumpidamente desde julio de 1999. Podrán no sorprenderse de estos números, pero lo que no pueden es no hacerse cargo de ellos.

Como ha sido de público conocimiento, se difundieron datos del INDEC según los cuales Córdoba presenta el peor cuadro social del país, reflejando la mayor tasa de indigencia y la tercera mayor tasa de pobreza del país, compartiendo este lugar con Concordia y Santiago del Estero.

Concretamente, en la Capital cordobesa y en las localidades del Gran Córdoba hay alrededor de 620 mil personas cuyos ingresos no permiten adquirir una canasta de alimentos y servicios que el INDEC considera el umbral mínimo para una vida fuera de la pobreza. De esas más de 600 mil personas, 450 mil son pobres y casi 165 mil son indigentes. En suma, representan un 40,5 por ciento de esta población. Esa es la pobreza de nuestra provincia.

Indudablemente, la pobreza no es un fenómeno exclusivo de nuestra provincia; es tal vez el problema más grave que afecta a la Argentina y debe ser el principal objetivo del Gobierno nacional sacar a esos argentinos de la pobreza con trabajo, salud y educación, en lo que se sintetizó como “pobreza cero”. Ahora bien, tengamos en cuenta que el Gobierno

nacional lleva 15 meses de gestión, mientras que el provincial más de 15 años -17 años de gestión.

Que la pobreza es estructural, no hay ninguna duda, pero que el peronismo en Córdoba es responsable, tampoco la hay.

El modelo "Unión por Córdoba", entre otras cosas, se basó en el endeudamiento para financiar obras sin prioridad social ni productiva. Un ejemplo es el "Faro de Schiaretti". Seguramente, podrán no sorprenderse de estos tristes números, pero no tienen nada más que hacerse cargo de ellos.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el legislador Miguel Osvaldo Nicolás.

Sr. Nicolás.- Señor presidente: De la Sota y Schiaretti son los responsables de que Córdoba ocupe el primer lugar en indigencia a nivel nacional, esto hay que dejarlo bien claro, porque no lo digo yo –como dice el legislador López- sino las estadísticas.

Con 618 mil pobres, donde se incluyen algunos sueldos magros -porque están por debajo del nivel de pobreza-, debe adjudicarse el récord de mayor pobreza en la historia de la Provincia de Córdoba, fruto de una política demagógica e irresponsable. Hoy Córdoba se adjudica uno de los índices de pobreza, de población indigente, mayor que el del promedio del país -6,1 por ciento- y que el promedio pampeano -6,7-, y triplica al del Gran Rosario -3,8-, producto de la soberbia y de los años de desmanejo de los recursos provinciales, de los cuales se sirven a gusto y placer.

Todo esto ocurre bajo una gran mentira: la rebaja de los impuestos, siendo hoy una de las provincias con mayor presión impositiva en el país; profundizando un modelo de exclusión donde la ayuda social está monitoreada políticamente, donde el PAICOR dejó de ser un programa y pasó a ser un gasto, donde se incorpora más policías en vez de generar trabajo, donde los recursos de la Provincia sirven para construir fastuosos hoteles. Así se llega a tener la mayor parte de la población por debajo de la línea de pobreza.

También la escuché a la legisladora y al legislador del oficialismo hablar de las políticas asistenciales, detrás de supersecretarías que reparten a gusto y placer migajas disfrazadas de subsidios a familias necesitadas bajo la máscara del profundo dolor social que son los pobres, no engañen más a los ciudadanos con una Sala Cuna, ya no se puede comprar un voto.

Gracias a Unión por Córdoba, en esta Provincia nadie se olvidará del lugar en el que pusieron a una de las mejores provincias de la República Argentina, y la paradoja: comparan a Córdoba con Santiago del Estero. Algunos que tenemos memoria recordamos que el actual Gobernador fue interventor de esa Provincia y que cuando la gobernaba había entre un 65 y 70 por ciento de personas que estaban por debajo del nivel de pobreza.

¿Por qué digo esto? Porque no debe ser casualidad: trajo el modelo y lo está copiando con exactitud en la Provincia de Córdoba. Porque aplica el modelo de empobrecimiento de los ciudadanos de Córdoba, y lo hemos dicho más de una vez cuando se habla de Presupuesto.

Ahora lo voy a decir con índices, y no lo digo yo sino los índices... Le digo al legislador López que si quiere el uso de la palabra se lo doy.

Este no es un cuento como el que nos contó recién el legislador. Cuando asume Unión por Córdoba, ¿cómo estaban los índices en aquella oportunidad? Un 10 o 15 por ciento por debajo, aunque le hablo en un tono para que no le moleste al presidente de bloque, porque por ahí anda mal del oído y le busco un tono para que él escuche y analice. (Risas).

Le explico: asumió con ese porcentaje. Cuando dejó Santiago del Estero, era de un 70 por ciento; hoy, gobernada por otro signo político, bajó del 70 al 40 por ciento. Cuando él asume acá, aplica la "receta santiagueña" y pasa del índice del 14 o 15 por ciento al que hoy dicen los otros –que no lo digo yo- del 40 por ciento. Repito: copió la receta del ex Gobernador Juárez a la perfección.

Siempre en la Provincia de Córdoba ha habido un mostrador para atender la pobreza, que es el Ministerio de Acción Social que usted, señor presidente, encabezó, y que también le costó a un dirigente volver a ser intendente de la ciudad de La Calera, porque una Secretaría –como decíamos recién y que tanto la vanagloriaban los legisladores del oficialismo- vació ese Ministerio, lo que le costó volver a la Intendencia. Repito lo que dije: De la Sota y Schiaretti tienen el récord de haber llevado a esta Provincia de Córdoba al más alto nivel de la pobreza en la historia.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el legislador Julián López y luego el legislador Carlos Mercado.

Sr. López, J.- Señor presidente: lo mío va a ser muy cortito. para que no se siga equivocando el legislador Nicolás. Le digo a través suyo que no hay peor sordo que el que no quiere oír, y Dios nos tiene que librar de la soberbia de querer saber todo o creer que sabemos todo.

Lo que yo dije –puede pedir la versión taquigráfica- fue que en el 2001 fue mi charla con el por entonces Gobernador De la Sota, no fue en el '87, tengo 38 años, era muy joven – lo digo con el máximo de los respetos.

Además, si en Córdoba pagamos algún salario de algún empleado público por debajo de la línea de pobreza, ya que ustedes son parte del Gobierno nacional, hagan algo para corregir esa terrible injusticia de que en Córdoba la mayor parte de los 400 mil jubilados nacionales que existen ganan cerca de seis mil y pico “mangos” -no los nueve mil, como dijeron que era la jubilación mínima-, son 6.300 y pico pesos los que cobra la gran mayoría de esos 400 mil que caen por debajo de la línea de pobreza.

Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el legislador Carlos Mercado.

Sr. Mercado.- Señor presidente: he solicitado la palabra para referirme al pedido de informes respecto de la situación atinente a la asistencia social dentro de nuestra Provincia.

Cabe destacar que, en base a la coyuntura imperante, hubo un incremento del presupuesto acordado para el sostenimiento de comedores sociales acorde al aumento de los pedidos de ayuda social que se reciben diariamente en la cartera del Ministerio de Desarrollo Social.

Durante el 2016, se registró un aumento de los pedidos de ayuda en un 30 por ciento, aproximadamente; principalmente ayuda alimentaria por situaciones de salud, desalojo, situaciones de calle o por contingencias particulares.

Respecto de las ayudas individuales, el incremento fue mayor al 35 por ciento, canalizadas en comedores nocturnos, copas de leche y merenderos que se encuentran en los barrios más vulnerables, todo ello para tratar de paliar la situación existente por el aumento de la demanda alimentaria y el aumento de precios, producto de la inflación.

Teniendo en cuenta la situación económica del país, la cual no desconocemos, y mucho menos negamos, se trabaja en forma integral con diferentes programas a fin de poder llegar a aquellas familias en situaciones vulnerables de todas las formas posibles, no limitándose solamente a brindar una ayuda alimentaria sino que, por el contrario, se busca intervenir desde el Gobierno de una manera integral, buscando el fortalecimiento familiar, ya que cuando se atraviesan coyunturas económicas de retraimiento de la economía e inflación, los sectores más vulnerables, que destinan la totalidad de los ingresos familiares al consumo, sufren situaciones de necesidad básica donde el Estado debe intervenir.

El Ministerio de Desarrollo Social, conjuntamente con la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo, ejecutan un sinnúmero de programas a fin de asistir a las familias en situación vulnerable como son: Plan Comer Juntos, el cual implementa el Programa Nacional de Seguridad Alimentaria y el Programa de Complemento Nutricional para Grupos Vulnerables.

El Plan Mayores, que implementa el Programa de Protección del Adulto Mayor y el Programa Un Hogar para todas las Noches.

El Programa Tarifa Solidaria, consistente en la reducción de servicios e impuestos a la vivienda para hogares por debajo de la línea de pobreza, centros vecinales y centros de jubilados.

El Plan Crecer Juntos, que implementa el Programa de Comedores Asistidos y Copa de Leche, brindando servicio alimentario y estimulación para el desarrollo infantil.

Derecho Complementario por Nacimiento, consistente en una prestación monetaria para apoyar a las madres de menos recursos para adquirir pañales, fórmulas alimenticias o ropa para sus recién nacidos.

El Plan de Familia Cordobesa, que implementa el Programa de Protección de Derechos, Salas Cuna, Programa Permanente de Atención a la Niñez y la Familia, Programa de Centros de Cuidados Infantiles y Promoción de la Familia.

Plan Vida Digna, que contempla la asistencia económica a familias en situación de carencia para que puedan realizar mejoras edilicias en sus hogares entregando sumas de hasta 25.000 pesos.

Plan por la Familia, que implementa el Banco de la Gente, que opera en base a la confianza y respalda el valor de la palabra otorgando créditos para el consumo y financiando micro emprendimientos individuales y asociativos.

El Programa Más Leche Más Proteínas, abasteciendo de leche entera y fortificada a niñas y niños cordobeses desde su nacimiento hasta los 11 años de edad, garantizando la

calidad nutricional de nuestros chicos, promoviendo su crecimiento, desarrollo, salud, seguridad alimentaria y rendimiento escolar.

La Tarjeta Social, programa que tiene un monto presupuestado para el 2017 de 379 millones de pesos, brindando contención a familias que se encuentran en situación de indigencia.

Todo esto es llevado adelante desde el Ministerio de Desarrollo Social, quien trabaja junto al Colegio de Trabajadores Sociales, municipios, comunas y 51 organizaciones sociales, dentro de las que se encuentran el Polo Obrero, el MRP, Barrios de Pie, René Salamanca, Los Carreros, Naranjitas, Movimiento Evita, Felipe Varela, entre muchas otras, focalizando la problemática para llegar con los programas de asistentes a los beneficiarios.

Igualmente, a la hora de realizar estimaciones, es necesario tener en cuenta todos los planes de asistencia alimentaria que se brindan desde la Provincia y el municipio, no considerando solamente lo ejecutado desde el Ministerio de Desarrollo Social.

Claramente, existe un sistema de asistencia para atender a quien se encuentra en situación de vulnerabilidad; no se ejecutan programas aislados, sino que se busca un abordaje integral para el fortalecimiento familiar. Los índices de la situación económica nacional son conocidos por todos nosotros y Córdoba, por supuesto, no escapa a la situación promedio del país; no obstante, se trabaja fuertemente desde el Gobierno y así se ve plasmado en este sistema de asistente social.

Lamentablemente, como Gobierno provincial no es simplemente que no nos sorprende, sino que nos duele la situación por la que atraviesan demasiadas familias, y a veces no es posible intervenir en políticas de fondo que son propias del Gobierno nacional y que determinan procesos inflacionarios, por ejemplo, que afectan mucho a los más vulnerables.

Por eso, mientras existan coyunturas económicas como la actual que mantengan a las familias en situaciones de carencia, los programas de asistencia estarán siempre presentes y el presupuesto para las ayudas será siempre de importancia y aumentarán en proporción a las solicitudes que se realizan.

Por último, considero que, por la importancia de los datos vertidos, será necesario escuchar en comisión la palabra de los funcionarios provinciales; ya hemos comprometido la presencia de la Secretaria de Coordinación Social, Deborah Petrakovsky.

Por todos los motivos expresados, solicito el pase a comisión del presente proyecto en tratamiento, el cierre del debate y que sea tratado junto a otros proyectos referidos a la misma temática.

Muchas gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (Passerini).- Si ningún otro legislador va hacer uso de la palabra, en consideración la adopción como despacho de cámara en comisión la vuelta a comisión del expediente 19206/L/16.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

—Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobado.

Corresponde levantar el estado de Cámara en comisión.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

—Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobado.

-CÁMARA EN SESIÓN-

-12-

Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el legislador Nicolás.

Sr. Nicolás.- Señor presidente: solicito una preferencia de siete días para los proyectos 21168, 19381 y 21406/L/17.

Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la moción del legislador Nicolás.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
Tiene la palabra el legislador Scarlatto.

Sr. Scarlatto.- Señor presidente: solicito que el proyecto de ley 21283/L/17 sea girado a la Comisión de Obras Públicas y que sea la comisión principal para su tratamiento.

Sr. Presidente (Passerini).- Así se hará, señor legislador.

-13-

Sr. Presidente (Passerini).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Ingresados fuera de término que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Proyectos de declaración 21420, 21421, 21422, 21424, 21429 al 21437, 21439 al 21443, 21446, 21447, 21450 al 21458, 21463, 21466 y 21468/L/17.

Sr. Presidente (Passerini).- Quedan reservados en Secretaría.

-14-

Sr. Presidente (Passerini).- Conforme lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, y si no hay objeciones en aplicación del artículo 157 del Reglamento Interno, vamos a dar tratamiento, sin constitución de la Cámara en comisión, a los siguientes proyectos: 21303 y 21386 compatibilizados, 21304, 21350, 21384, 21385, 21388, 21389; 21391, 21399, 21412 y 21468 compatibilizados; 21392, 21429, 21432, 21446, 21452, 21457 y 21463 compatibilizados; 21395, 21398 y 21447 compatibilizados; 21402, 21407, 21411, 21417, 21421; 21422 y 21441 compatibilizadas; 21424, 21430, 21434 al 21437, 21440, 21442, 21443, 21450, 21451, 21453, 21454, 21455, 21456 y 21458/L/17, sometiéndolos a votación conforme al texto acordado en la mencionada comisión.

En consideración la aprobación de los proyectos mencionados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se votan y aprueban.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobados.
Tiene la palabra el legislador Gutiérrez.

Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito la abstención del bloque de Unión por Córdoba en el proyecto 21443/L/17.

Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra la legisladora Nebreda.

Sra. Nebreda.- Señor presidente: solicito que conste el voto negativo del bloque Córdoba Podemos en el proyecto 21443/L/17.

Sr. Presidente (Passerini).- Queda consignado, legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Caffaratti.

Sra. Caffaratti.- Señor presidente: solicito que quede constancia del voto negativo del interbloque Cambiemos de los proyectos 21384 y 21421/L/17.

Sr. Presidente (Passerini).- Queda consignado, legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Vilches.

Sra. Vilches.- Señor presidente: solicito que conste mi voto negativo en el proyecto 21435/L/17, y la abstención en los proyectos 21424 y 21443/L/17.

Sr. Presidente (Passerini).- Queda consignado el voto negativo, legisladora.
Tiene la palabra el legislador Ezequiel Peressini.

Sr. Peressini.- Señor presidente: solicito que se consigne el voto negativo del bloque del Frente de Izquierda al proyecto 21435/L/17, y la abstención en los proyectos 21442, 21443 y 21456/L/17; con respecto al proyecto 21456/L/17, es por no acordar con los fundamentos elaborados.

Sr. Presidente (Passerini).- Queda consignado el voto negativo, legislador.
Tiene la palabra la legisladora Montero.

Sra. Montero.- Señor presidente: disculpe, pero, en verdad, no sé si es un error en las planillas nuestras, pero el último proyecto que tenemos de la Comisión de Labor Parlamentaria es el 21443/L/17, y los otros proyectos -21450 y no sé cuáles han leído- no sabemos qué son, no están en la planilla, por lo menos no en la que nos entregaron en Labor Parlamentaria.

Sr. Presidente (Passerini).- Por Secretaría me informan, legisladora, y así es, efectivamente, que son los que se consignaron en la Comisión de Labor Parlamentaria y fueron agregados al Orden del Día. Están en las netbooks, en el temario concertado.
Tiene la palabra la legisladora Vilches.

Sra. Vilches.- Señor presidente: me olvidé uno de los proyectos; solicito la abstención en el proyecto 21456/L/17.

Sr. Presidente (Passerini).- En consideración las mociones de abstención solicitadas.

—Se votan y aprueban.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobadas.

-15-

Sr. Presidente (Passerini).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto 21347/L/17, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

Córdoba, 28 de marzo de 2017 ...

Sr. Presidente (Passerini).- Perdón, Secretario, el autor del proyecto me solicita el uso de la palabra.

Tiene la palabra el legislador Salas.

Sr. Salas.- Señor presidente: debido a la hora y a la importancia del tema, solicito una preferencia por siete días.

Sr. Presidente (Passerini).- Entonces, vuelve a comisión.

-16-

Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el legislador Peressini.

Sr. Peressini.- Gracias, señor presidente.

En el mismo sentido, formulamos moción de preferencia para tratar en siete días el proyecto 21433/L/17.

Sr. Presidente (Passerini).- En el mismo sentido, vuelve a comisión.

-17-

Sr. Presidente (Passerini).- Continuando con el Temario Concertado, se encuentra reservado en Secretaría el proyecto 21406/L/17 con una moción de tratamiento sobre tablas, que será leída a continuación.

Perdón, el proyecto 21406/L/17 está dentro del grupo que el legislador Nicolás pidió que vuelvan a comisión. Después de la comisión eso se consigna.

Ahora, de acuerdo a lo que obra en Secretaría, continuamos con el tratamiento del proyecto 21420/L/17.

Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto 21420/L/17, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

Córdoba, 28 de marzo de 2017.

Sr. Presidente del
Poder Legislativo
de la Provincia de Córdoba
Dr. Martín Miguel Llaryora
S. ____ / D. ____

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted a los fines de solicitarle el tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración 21420/L/17, por el que los legisladores del bloque Córdoba Podemos queremos expresar nuestra preocupación por la compra de material bélico por parte del Gobierno Nacional, para la 9º sesión ordinaria del 139º período legislativo a desarrollarse el día 29 de marzo del corriente año.

Sin otro particular, saluda atentamente.

Martín Fresneda
Legislador provincial

Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas formulada por el legislador Fresneda.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

–Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Passerini).- Rechazada.

Para formular una moción de reconsideración, tiene la palabra el legislador Fresneda.

Sr. Fresneda.- Muchas gracias, señor presidente.

Planteamos esta preocupación porque ayer también estuvo en todos los medios públicos, hoy sale en casi todos los diarios, hay una respuesta del Ministro de Defensa, y hay una circunstancia no aclarada frente a una preocupación.

Ayer creo que por lo menos tres países hermanos también han planteado su preocupación por la compra de armamentos. Hay información de medios periodísticos que manifiestan que sólo van a ser helicópteros, otros hablan de armas de guerra, etcétera.

Nosotros agregaremos más fundamentos por escrito y, de ser desestimada y confirmada la información respecto del comunicado de prensa del Ministerio de Defensa, retiraremos el proyecto. Pero mientras tanto no se esclarezca esta circunstancia, porque hay también una denuncia penal por parte de diputados del Frente para la Victoria del orden nacional respecto a esta circunstancia, sostendremos el proyecto y pediremos que se siga tratando eventualmente en comisión.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la moción de reconsideración.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

–Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Passerini).- Rechazada.

Sr. Presidente (Passerini).- Se encuentran reservados en Secretaría los proyectos 21413, 21431, 21439 y 21466/L/17 con moción de tratamiento sobre tablas, y el proyecto 21409/L/17, con una moción de preferencia, que serán leídas a continuación.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

Córdoba, 28 de marzo de 2017.

Al Señor Vice Gobernador
de la Provincia de Córdoba
Dr. Martín Miguel Llaryora
S. / D.

De mi mayor consideración:

Me dirijo a usted, en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno de esta Legislatura, a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto 21413/L/17, proyecto de declaración donde, en función de la grave situación del Lago San Roque y sus efluentes y ante la proliferación de cianobacterias, se dispone desarrollar un Programa de Contingencia tendiente a la protección ambiental y humana

Sin otro particular, saluda atentamente.

Adolfo Somoza
Legislador provincial

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

Córdoba, 29 de marzo de 2017.

Al Sr. Presidente
de la Legislatura de Córdoba
Martín Llaryora
S. / D.

De mi mayor consideración:

Me dirijo a Usted a fin de solicitarle, en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno, el tratamiento sobre tablas del proyecto de resolución 21431/L/17, por el que se solicita informes al Ministerio de Agua y Energía referidos al colapso de la planta de residuos Taym y su relación con la futura instalación del predio de Cormecor.

Sin otro particular, saludo a usted atentamente.

Laura Vilches
Legisladora provincial

Córdoba, 29 de marzo de 2017.

Al Sr. Presidente
de la Legislatura de Córdoba
Martín Llaryora
S. / D.

De mi mayor consideración:

Me dirijo a Usted a fin de solicitarle, en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno, el tratamiento sobre tablas del proyecto de resolución 21439/L/17, por el que cita al Ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos para que informe sobre la futura instalación del mega basural a cargo de Cormecor y su relación con el colapso de un terraplén de la empresa de residuos peligrosos Taym.

Sin otro particular, saludo a usted atentamente.

Laura Vilches
Legisladora provincial

Córdoba, 29 de marzo de 2017.

Al Sr. Presidente
de la Legislatura de Córdoba
Martín Llaryora
S. / D.

De mi mayor consideración:

Me dirijo a Usted, en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno de esta Legislatura, a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto de resolución 21466/L/17, por el que se cita al señor Ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos para que informe con respecto al desborde de la planta de residuos peligrosos Taym afectando al Valle de Paravachasca.

Amalia Vagni
Legisladora provincial.

Córdoba, 29 de marzo de 2017.

Al Sr. Presidente
de la Legislatura de Córdoba
Martín Llaryora
S. / D.

De mi mayor consideración:

Me dirijo a Usted, en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno de esta Legislatura, a fin de solicitar el tratamiento preferencial en la próxima sesión del proyecto 21409/L/17, proyecto de ley declarando la emergencia sanitaria y ambiental en las localidades integrantes de la cuenca San Roque, e instando al Poder Ejecutivo provincial a que diagrame un plan de contingencia y emergencia en función de paliar la crisis aguda que hoy afecta a la región.

Adolfo Somoza
Legislador provincial

Sr. Presidente (Passerini).- En consideración las mociones de tratamiento sobre tablas y la moción de preferencia.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y rechazan.

Sr. Presidente (Passerini).- Rechazadas.

Para formular una moción de reconsideración, en primera instancia tiene la palabra el legislador Somoza.

Sr. Somoza.- Señor presidente: lamentablemente, entiendo la hora, pero la situación acuciante que vive Villa Carlos Paz con el tema del lago no me permite evitar el debate.

En la década del '80 el biólogo Raúl Montenegro comenzó sistemáticamente, todos los noviembreros y diciembres, a alertarnos sobre el proceso de eutrofización del lago San Roque y, con muy mal tino y cometiendo una equivocación, los habitantes de Carlos Paz lo acusábamos de querer “embromar” la temporada turística y, en realidad, no nos dimos cuenta de que estaba previendo la situación que estamos viviendo en la actualidad.

Es una pena que no haya sido aprobado este proyecto de declaración, en el cual pido una “barbaridad” en función de que en Carlos Paz tenemos una escuela cerrada por el olor que emana del lago que provocan las cianobacterias, y un geriátrico que ha tenido que ser intervenido por Salud Pública porque están los jubilados vomitando y 80 mil personas respirando esto. En tal sentido, pedimos un programa de contingencia tendiente a la protección ambiental y humana. Esta es la barbaridad que estamos pidiendo.

Hoy escuchamos en un montón de debates lo bien que se han hecho las cosas en los últimos 17 años en la Provincia de Córdoba, pero hay realidades contrastantes que nos dicen que no. Hay una imagen que nos dice que no estamos equivocados.

Estuve hablando de la toxicidad de las cianobacterias –por suerte lo vi al legislador González que entraba recién, que es un profesional de la salud- con varios legisladores de

Unión por Córdoba y de todos los bloques en general y recibí como respuesta: “qué barbaridad la situación de Carlos Paz”, pero no acompañamos el proyecto de la emergencia.

¿Por qué pido la emergencia? ¿Por qué pido el plan de contingencia? Tengo el informe del Ministerio de Salud de la Nación donde se habla de las cianobacterias, de su toxicidad, de su proliferación en función de la presencia de aguas servidas, de los nutrientes que las hacen crecer.

También habla de los síntomas de la exposición a las cianobacterias, dividiéndolas en hepatotoxinas y nefrotoxinas, que atacan al hígado y al riñón -náuseas, vómitos, diarreas, mal gusto-; neurotoxinas, que atacan al sistema nervioso central; y dermatotoxinas, que atacan la piel. A todo esto, lo vi esta semana en mi ciudad; además de ver que pareciera ser que en esta Provincia lo importante es la imagen.

Tenemos una situación latente que viene produciéndose desde hace más de 30 años: el proceso de eutrofización del lago.

Nadie duda que la solución de fondo es el saneamiento de la cuenca en función de la obra de cloacas en toda la cuenca.

Hoy, que necesitamos un plan de contingencia porque el olor a podrido no nos deja vivir en la ciudad, vemos la foto de los funcionarios de la Municipalidad de Villa Carlos Paz y del Ministro Fabián López, en Buenos Aires, planteando en el ENOHA esta obra de cloacas; pero no necesitamos que esa obra de cloacas se haga hoy, lo que necesitamos es una contingencia en función del olor a podrido que está haciendo que los habitantes de Villa Carlos Paz circulen por las calles con barbijos, que está haciendo que los alumnos no puedan ir a la escuela.

¿Cuál fue el plan de contingencia que elaboró el Gobierno de la Provincia? Mandaron una lanchita “pedorra”, con una cucharita para helado, a la desembocadura del río Los Chorrillos para sacar esas algas; mandaron una máquina cosechadora de algas –hoy pudimos ver la foto- que desparramaba las cianobacterias, con los daños a la salud que eso va a provocar.

Hoy se habló mucho de los 17 años, de ciclos de gobierno. Esto no es culpa de los últimos 17 años, es culpa de los últimos 30 años; todos los cordobeses somos corresponsables.

Está siendo difícil plantear cosas con sentido común cuando el paradigma es que lo que viene de la oposición seguramente no va a ser aprobado.

Insisto: no estoy pidiendo una estupidez, estoy pidiendo una respuesta para 80 mil habitantes que hoy la están pasando muy mal, porque estos planes de contingencia que se están planteando seguramente son para la foto del diario.

Sr. Presidente (Passerini).- Legislador: le informo, para que vaya terminando porque está haciendo una moción de reconsideración, que ya está en el tiempo que se prevé para estos casos.

Sr. Somoza.- Redondeo, señor presidente.

Me quedan un montón de cosas para decir, que seguramente voy a plantear en el tratamiento de los otros proyectos que he presentado en la comisión.

Para todo esto que se plantea, dentro del marco teórico hay una comprobación empírica, que es lo que está pasando hoy en la ciudad.

En función de darle un final que valga la pena a esto, espero con ansias que estos 17 años terminen a los 20; que nos toque a quienes hoy somos oposición ser gobierno y estar de aquel lado, para demostrar que –ya que tanto se critica a nuestro gobierno nacional- se puede gobernar con minoría legislativa generando consenso; que ustedes estén de este lado, para que cuando presenten proyectos de este tipo, urgentes para la salud de la población, podamos darle la derecha y el tratamiento que corresponde.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra la señora legisladora Laura Vilches.

Sra. Vilches.- Gracias, señor presidente.

Hemos pedido la citación del Ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos para que informe sobre la situación en la que se encuentra la zona de Parque Santa Ana, donde está instalado el vertedero, la planta de tratamiento de residuos peligrosos, porque es realmente una situación alarmante la que se está viviendo.

Esa situación, que es de público conocimiento, ha afectado la vida cotidiana no sólo de los habitantes de la zona sur sino también de aquellos niños que, sin vivir en la zona sur, van a alguna de las 67 escuelas que están en esa zona y que vieron interrumpido su día normal de clase por la falta de abastecimiento de agua.

Pero, además, solicitamos su presencia por ser una situación alarmante, ya que cundió el pánico en la población de Córdoba debido a que un 30 por ciento de la misma se ve abastecida por el canal que lleva el agua a la planta potabilizadora de Los Molinos, la que se vio contaminada por los fluidos de la lixiviación de ese vertedero por residuos tóxicos arrojados.

Debemos recordar que, en su momento, en este mismo recinto, los vecinos de Villa Santa Ana –a fines de 2014- venían cuestionando la instalación de esa planta o, mejor dicho, basural. Lo cuestionaron pidiendo, inclusive, un informe técnico a la Universidad de La Plata para que revisara el estudio de la Universidad Nacional de Córdoba que avaló la instalación de esta planta, con el resultado del impacto ambiental que hoy conocemos. No sólo lo cuestionaron a través de un estudio científico, que oponía argumentos técnicos a la oportunidad de la instalación de esa planta, sino que también lo hicieron a través de la audiencia pública, la que también cuestionaron por hacerla del lado opuesto a la ciudad que estaba en las cercanías de Parque Santa Ana, en la zona sur.

Ahora, se pudo ver claramente, desde el día de ayer, que lo que los vecinos anunciaban efectivamente ocurrió. Uno de los paredones de contención de ese terraplén se derrumbó, algo que la empresa Taym negó hasta último momento. Recién esta mañana escuché al ministro reconocer el hecho y que, efectivamente, el agua había sido contaminada, si bien no por residuos patógenos, pero sí por residuos tóxicos vinculados a la producción industrial. Entonces, aquello que anunciaban los vecinos con sus cuestionamientos y los del estudio de la Universidad de La Plata, se vio efectivamente cumplido. Y uno de los principales puntos que cuestionaba este documento –que se viera ratificado, además, por un informe de la Defensoría del Pueblo de la Provincia- es que ese predio se anegaba, y por ende, si había inundación, esa agua contaminada podía llegar al canal que lleva el agua a la planta potabilizadora.

De lo que estamos hablando, entonces, es de una irresponsabilidad mayúscula del Gobierno de la Provincia y de la empresa que cogestionó e impulsó la instalación de la planta de tratamiento en esa zona, de quienes integran Cormecor y todos los que lo integran, como sindicatos –Surrbac, por ejemplo, que estuvo incluido en la aprobación de ese proyecto de ley-, para lo que me remito a las actas taquigráficas del 2 de diciembre de 2015, donde podrán chequear los argumentos vertidos en dicha sesión, así como la votación del conjunto de los partidos políticos de esta Cámara. El Frente de Izquierda –con la banca que me ha tocado ocupar- rechazamos la habilitación de esa instalación.

Entonces, la responsabilidad existe como para que el ministro acuda a dar las explicaciones a la Legislatura y no sólo las dé mediáticamente, ya que todo ha concurrido para llegar a las resultantes que hoy pone en situación crítica y de gravedad al 30 por ciento de la población de Córdoba, instalándose muchas dudas sobre la potabilidad del agua como para ser consumida, o si hubo informes fraguados, si la Universidad fue parte de eso, si al Gobierno no le interesa, si la empresa que es Aguas Cordobesas es la misma de la planta de tratamiento de residuos y, por lo tanto, hay intereses en juego, evidentemente, le importa muy poco la vida de los cordobeses, le importan más sus ganancias, y ustedes señores, tengo que decir que han sido responsables también de eso.

En función de estos argumentos es que exigíamos la citación mínima y básica al Ministro para que venga a dar respuestas en este recinto.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (Passerini).- A continuación, para el tratamiento del proyecto 21466/L/17, tiene la palabra la legisladora Vagni.

Sra. Vagni.- Señor presidente: se viven horas de incertidumbre para los ciudadanos de Córdoba. Dos sucesos de gravedad ponen en riesgo a miles de habitantes y necesitamos de manera urgente que el Gobierno brinde las explicaciones pertinentes.

Nos estamos refiriendo al desborde de los vertidos de la Planta de Residuos Peligrosos Taym y sus consecuencias sobre el Canal Los Molinos, que abastece de agua potable al 30 por ciento de esta ciudad.

En la madrugada del día martes 28 de marzo el Departamento Santa María, más precisamente el Valle de Paravachasca, se vio azotado por intensas lluvias cuyas consecuencias fueron más conflictivas de lo normal y sacaron a la luz problemáticas de antaño que cada vez resultan más normales en nuestra Provincia.

Esta situación ha generado alarma de toda la población por la posible contaminación del agua que llega a los hogares y, ante ello, es imprescindible que la Provincia tome las medidas y las precauciones correspondientes de manera urgente.

Debemos ser claros ante la población. La falta de control, las aprobaciones desmedidas de desmonte y el avance de emprendimientos inmobiliarios son las causas de que el agua haya avanzado vertiginosamente.

Ante este suceso nos preguntamos: ¿por qué el Gobierno de la Provincia espera las consecuencias de estos temporales para tomar las decisiones y actúa siempre sobre la emergencia?, ¿por qué, a pesar del conocimiento técnico sobre las obras de infraestructura y mantenimiento que son necesarias, se esperan las catástrofes poniendo en riesgo la vida de los habitantes?, ¿cuántas auditorías se realizaron sobre la planta de residuos peligrosos?, ¿por qué, después de tantos años y tantas promesas repetidas, el Gobierno no termina de ejecutar la obra de entubamiento del canal Los Molinos-Córdoba?

En la apertura de sesiones de esta Legislatura del año 2008 el Gobernador Schiaretti prometía esta obra; el 5 de noviembre de 2013 se comienzan las licitaciones; gana el Grupo Roggio y el contrato se firma en junio de 2015 que estipulaba una inversión de...

Sr. Presidente (Passerini).- Legisladora, disculpe. La interrumpo, pero es para que la puedan escuchar.

Solicito a los legisladores que no conversen entre ustedes y respetemos a la legisladora.

Puede continuar en el uso de la palabra legisladora, disculpe la interrupción, pero es para que seamos respetuosos con usted.

Sra. Vagni.- No hace falta que pida silencio; lamentablemente, si no me lo sé ganar es porque no les interesa el tema. Lo lamento muchísimo, señor presidente.

Lo único que voy a solicitar y reconsiderar es que venga el Ministro López a dar explicaciones sobre el tema.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (Passerini).- En consideración las mociones de reconsideración que fueron expuestas.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y rechazan.

Sr. Presidente (Passerini).- Rechazadas.

No habiendo más asuntos que tratar invito a la legisladora Nilda Roldán a arriar la Bandera nacional en el mástil del recinto.

-Así se hace.

Sr. Presidente (Passerini).- Queda levantada la sesión.

-Es la hora 21 y 35.

Nora Mc Garry – Graciela Maretto
Directoras del Cuerpo de Taquígrafos